



ANDRE HORI.:

EXCMA. SRA.:

Euskadiko Udal LEGEAREN PROIEKTUAREN espedientearen osatzeko dokumentazioa apailatzerakoan, Jaurlaritzako Idazkaritza honek huts bat egin du; eta Ganbera horretako aldizkari ofizialean argitalpen egokia egin dadin, Jaurlaritzaren Kontseiluak, 2011ko uztailaren 30ean egindako bileran, onartutako testua bidaltzen dizut:

Habiendo producido un error por parte de esta Secretaría del Gobierno en la composición del documento que integra el expediente del **PROYECTO DE LEY municipal de Euskadi**, y a los efectos de su correcta publicación en el Boletín Oficial de esa Cámara, adjunto le remito el texto aprobado por el Consejo de Gobierno, en su sesión del celebrada el día 30 de agosto de 2011.

Vitoria-Gasteiz, 2011ko irailaren 29.

Vitoria-Gasteiz, a 29 de septiembre de 2011.

M^a Jesús Carmen San José López.DIRECTORA DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO
Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO**EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL PARLAMENTO VASCO/
EUSKO LEGEBILTZARREKO LEHENDAKARIA.**



TEXTO DEL PROYECTO DE LEY EN CASTELLANO
/ LEGE PROIEKTUAREN TESTUA GAZTELANIAZ.

PROYECTO DE LEY MUNICIPAL DE EUSKADI.
EUSKADIKO UDAL LEGEAREN PROIEKTUA

PROYECTO DE LEY MUNICIPAL DE EUSKADI.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.-

El proceso de institucionalización de Euskadi, a pesar de haber transcurrido más de treinta años desde la recuperación del autogobierno, está aún incompleto. Efectivamente, culminado el proceso de institucionalización autonómico y foral quedaba pendiente aún la aprobación de la Ley Municipal de Euskadi.

Bajo ese planteamiento, la necesidad objetiva de la Ley Municipal de Euskadi no puede ser puesta en tela de juicio. En Euskadi, actualmente, el marco normativo local está imbuido de una notable precariedad. Es cierto, no obstante, que –dado el sistema interno de distribución del poder político- existe un cuerpo de normas forales aprobadas por los territorios históricos que regulan un amplio abanico de materias relacionadas con el ámbito local, así como un reducido elenco de disposiciones normativas reglamentarias aprobadas en su día por el Gobierno Vasco. También es cierto que el Parlamento Vasco ha llevado a cabo una importante obra legislativa en ámbitos materiales sectoriales que ha impactado con fuerza sobre las competencias municipales (policía, urbanismo, medio ambiente, servicios sociales, etc.).

Aún así, no cabe duda de la necesidad de un marco normativo general que regule el espacio de gobierno municipal. Por tanto, la articulación interna de Euskadi requería como complemento imprescindible la aprobación de la Ley Municipal que cerrara el proceso de articulación institucional entre instituciones comunes, órganos forales de los territorios históricos y ayuntamientos.

El municipio vasco, además, debe ser reconocido, de una vez por todas, como uno de los tres niveles básicos de gobierno que actúan en la estructura institucional de Euskadi y, por consiguiente, como un poder público territorial a todos los efectos. El municipio vasco, en consecuencia, necesitaba disponer de una visibilidad institucional efectiva, que le permitiera participar de forma activa –en el marco de los órganos de participación institucional que se prevén en la presente Ley- en el diseño y ejecución de aquellas políticas públicas que afecten directamente a sus ciudadanos y ciudadanas y condicionen el ejercicio de sus competencias municipales. La defensa y garantía de la autonomía municipal es, asimismo, una necesidad objetiva del municipalismo vasco que es cabalmente asumida por el presente marco normativo.

Tal como se reconoce en el artículo 10.4 del Estatuto de Autonomía, sobre el espacio institucional del nivel local de gobierno la Comunidad Autónoma ejerce competencia exclusiva, sin perjuicio de la legislación básica que dicte el Estado sobre ese ámbito. Pero la distribución interna del poder político derivada de la singular posición constitucional y estatutaria que asumen los territorios históricos en el entramado institucional vasco, ha conducido a que, ya sea por previsión del propio Estatuto de Autonomía (artículo 37.3) o ya sea por reconocimiento expreso de la competencia por la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos (en lo sucesivo, Ley de Territorios Históricos), exista un fondo foral de competencias que se proyecta sobre determinadas facetas del espacio local con incidencia asimismo en importantes aspectos puntuales del régimen jurídico de los municipios. Este espacio local de configuración foral no puede ser, en ningún caso, desconocido por el Parlamento Vasco en el momento de elaborar y aprobar la Ley Municipal de Euskadi.

Por tanto, sin perjuicio de las competencias que le corresponden a los territorios históricos vascos sobre ese ámbito, la Ley Municipal de Euskadi –aplicando una dimensión reforzada del principio constitucional de autonomía local- tiene por finalidad salvaguardar amplios espacios propios de decisión política a favor del nivel municipal de gobierno, lo que necesariamente ha de implicar una apuesta por establecer unos límites precisos a las potestades de intervención de los poderes autonómico y forales sobre ese ámbito de actuación institucional que representa el municipio.

II.-

Para alcanzar esa finalidad y garantizar la posición institucional del municipio en el entramado de instituciones vascas, la Ley Municipal se articula en torno a unos objetivos de política normativa que, dada su naturaleza transversal, influyen directamente en su contenido y han de servir de guía en su proceso de aplicación.

El primer objetivo de la Ley Municipal es el de mejorar el diálogo entre la institución municipal y sus vecinos y vecinas, así como fomentar un desarrollo sostenible de la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos vascos. Los municipios –y más concretamente los ayuntamientos- son el nivel de proximidad por excelencia y, por tanto, el más sensible a las necesidades de la ciudadanía. La fuente de legitimación institucional del municipio es atender satisfactoriamente las necesidades de sus vecinos y vecinas, así como garantizar una razonable calidad de vida de las y los ciudadanos. Y ello sólo se consigue mediante una articulación efectiva de un sistema de reparto de responsabilidades institucionales (competencias) que sea claro y preciso, así como por medio de la configuración de un sistema de financiación municipal que garantice el correcto ejercicio de sus responsabilidades y una prestación adecuada de los servicios públicos locales.

El segundo objetivo de la Ley Municipal de Euskadi no es otro que el de garantizar plenamente la autonomía municipal, lo que implica no sólo el reconocimiento formal de esa autonomía sino, además, garantizarla materialmente, con el fin de que los municipios vascos dispongan de una real capacidad de ordenar y gestionar sus asuntos propios bajo su entera responsabilidad. A tal fin, la Ley articula un depurado sistema de garantía de la autonomía municipal mediante la inserción de un mecanismo de alerta temprana, que representa una lectura temporalmente adecuada – proyectada sobre el siglo XXI- de los principios recogidos en la Carta Europea de Autonomía Local y es, sin duda, una de las experiencias pioneras en el Estado español a la hora de reforzar el autogobierno local.

El tercer gran objetivo que afronta la Ley Municipal es, como ya se advertía, el de dotar de visibilidad institucional al municipio en el conjunto de poderes públicos vascos. Se trata, por tanto, de reconocer que el municipio es un poder público territorial conformado a través del principio democrático, cuya legitimidad y calidad democrática es, como mínimo, de igual factura a la existente para la conformación de los órganos e instituciones propios de la Comunidad Autónoma o de los territorios históricos.

El principio democrático, por consiguiente, está en la base de la configuración de los ayuntamientos vascos, que disponen además de una batería de instrumentos de participación ciudadana que pueden coadyuvar en la mejora de la calidad del sistema de representación democrática que se configura a través de los procesos electorales correspondientes.

El cuarto objetivo, que se desarrollará con detalle en un momento posterior, es, sin duda, dotar al municipio de un amplio abanico de facultades que se proyectan sobre un sistema de competencias propias configurado como un estándar mínimo de garantía de la autonomía municipal. O, dicho de otra manera, se trata de preservar que el espacio municipal en Euskadi se configure como un poder político claramente delimitado en su marco de actuación sin que los otros niveles de gobierno puedan interferir discrecionalmente su ejercicio de forma puntual o sorpresiva.

Y, en fin, el quinto objetivo, se proyecta sobre la idea fuerza de que el municipio vasco ha de disponer de una financiación adecuada y suficiente para un correcto ejercicio de sus competencias municipales. La financiación municipal, junto con las competencias propias, se convierte así en el eje central de la Ley Municipal de Euskadi. Sin una financiación municipal garantizada no se puede hablar en propiedad de autonomía municipal. En este sentido, debe resaltarse cómo la Ley Municipal de Euskadi, a diferencia de otras leyes autonómicas o, incluso, de la legislación básica del Estado en materia local, es una ley integral del espacio institucional municipal –sin perjuicio de las importantes atribuciones en ese ámbito de los órganos forales de los territorios históricos- puesto que, junto con la regulación de las competencias propias, se adoptan una serie de decisiones normativas de primer relieve en materia de financiación.

La Ley Municipal se configura, por tanto, como una pieza esencial que forma parte integrante del núcleo duro del sistema institucional vasco y, en consecuencia, dado su importante papel en ese ámbito ha de ser considerada como la Ley que cierra el proceso de institucionalización interno de Euskadi.

Por consiguiente, la Ley Municipal es una ley de claro contenido institucional que, en desarrollo del propio Estatuto de Autonomía, complementa (y, en algún punto específico, corrige o puntualiza) lo previsto en la Ley de Territorios Históricos.

III.-

La Ley Municipal se estructura en un título preliminar, siete títulos específicos sobre otras tantas materias y un título genérico denominado "Otras Disposiciones", así como en una disposición adicional, dos transitorias, otra derogatoria y cuatro disposiciones finales.

El título preliminar tiene por objeto una serie de disposiciones generales que se ocupan del carácter de la Ley, del objeto de la misma, de los principios en los que se inspira este nuevo marco normativo, de la tipología de las entidades locales y del registro administrativo de éstas, a los efectos de su publicidad registral. No cabe duda que la Comunidad Autónoma dispone de competencias reconocidas estatutariamente para configurar normativamente el sistema local de gobierno y, más precisamente, la regulación del municipio, tal como prevé el artículo 10.4 del Estatuto de autonomía.

Bien es cierto que esa competencia autonómica se encuentra limitada, por un lado, por las previsiones que el legislador básico de régimen local ha dictado o pueda dictar en su día, así como por las competencias que sobre distintos e importantes aspectos del ámbito local disponen los órganos forales de los territorios históricos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 37.3 del Estatuto y en la Ley de Territorios Históricos. Esta doble limitación competencial no hace precisamente fácil la labor de configuración del legislador vasco en ese ámbito, pero cabe subrayar que la Ley Municipal es plenamente respetuosa tanto con lo previsto en la legislación básica del Estado, que debe considerarse en todo caso como una suerte de "estándar mínimo de autonomía local" y que a través de la presente Ley únicamente se desarrolla o refuerza en algunos puntos, como con las competencias propias de los órganos forales de los territorios históricos, que en todo momento se salvaguardan debidamente en esta regulación.

Se trata, por tanto, de una Ley que desarrolla las competencias de las instituciones comunes sobre ese ámbito institucional. El legislador vasco es muy consciente que, en este punto, dado el reparto externo e interno de competencias, es un legislador limitado en sus márgenes de configuración. Y en ese sentido no aborda más que aquellos puntos para los que la Comunidad Autónoma, entendida en sentido estricto, tiene competencias. Por consiguiente, deberá ser posteriormente el poder normativo foral el que, a través de normas forales, ejercite sus propias competencias (como, por lo demás, ya lo ha venido haciendo) o

desarrolle, en aquellos ámbitos que sea factible, las previstas en la presente Ley.

En el terreno de los principios cabe señalar que la Ley recoge una lista exhaustiva de los mismos, comenzando por el principio de autonomía municipal que es, sin duda, la manifestación más fuerte del principio de autonomía local y que se concreta en la dimensión política que tiene el autogobierno municipal de acuerdo con el principio democrático. El segundo principio es el de suficiencia financiera, que está recogido expresamente en la Carta Europea de Autonomía Local y que se plasma en el derecho que tienen los municipios de disponer de los recursos necesarios para ejercer sus propias competencias. Junto a estos principios, se detallan también el de autoorganización, el de proximidad, el de solidaridad y sostenibilidad, así como el principio de igualdad de los ciudadanos y ciudadanas en el acceso a los servicios públicos locales y el de autonomía normativa.

Pero ese listado estaría incompleto sin una concreción de la afectación de tales principios sobre el plano del ejercicio de las competencias. Y es allí dónde la Ley Municipal se hace eco de la dimensión competencial del principio de suficiencia financiera, así como de los principios de subsidiariedad, proporcionalidad y diferenciación, que juegan un papel trascendental en el momento de ejercer sus potestades normativas tanto por el legislador vasco como por los poderes normativos forales en relación con el ulterior control jurisdiccional que se pueda llevar a cabo, en su caso, de tales disposiciones normativas.

El título I se ocupa del municipio y de la autonomía municipal. En el sistema de gobierno local vasco no cabe duda que, dada la singularidad de los territorios históricos, el municipio es la entidad local por excelencia del modelo. En este título se parte –de acuerdo con lo dispuesto en la Carta Europea de Autonomía Local- por definir cuál es el alcance de la autonomía municipal, que comprende, en todo caso, la ordenación y gestión de todos los asuntos públicos de la incumbencia del municipio. Asimismo, se detalla el papel de los territorios históricos en el modelo institucional, que sirven –de acuerdo con la legislación básica- de refuerzo del ejercicio de las competencias propias de los municipios. En este título I se precisan, también, las competencias de los territorios históricos en diversos aspectos relativos al municipio.

El título II tiene por objeto el estatuto de las vecinas y vecinos, que se descompone en una serie de deberes y derechos, así como en unos principios y reglas relativos a la información y a la participación

ciudadana. El apartado de los deberes o responsabilidades ciudadanas ha sido tradicionalmente uno de los menos desarrollados en nuestra legislación local, sin embargo el sentido de pertenencia de las vecinas y vecinos al municipio se acrecienta en función de la libre asunción de tales responsabilidades ciudadanas y de los valores cívicos que acompañan a la propia idea de ciudadanía. El catálogo de derechos es asimismo objeto de la Ley, y en su confección se han tenido en cuenta las recomendaciones que el Consejo de Europa (Congreso de Poderes Regionales y Locales) ha venido aprobando en los últimos años sobre esta materia. Pero obviamente en ambos casos (deberes y derechos) ha de considerarse que esta regulación complementa y nunca excluye lo establecido en la legislación básica. Se prevé asimismo la posibilidad de que los municipios vascos aprueben, en su caso, cartas de derechos y deberes tal como ya lo han hecho algunas ciudades españolas, europeas y de otras partes del mundo.

El capítulo II de ese título II tiene por objeto regular una serie de principios y algunas reglas en torno a la información y a la participación de las vecinas y vecinos en la actividad municipal. Los criterios generales sobre los que se apoya tal regulación es, por un lado, la necesaria transparencia que debe haber en el actuar del gobierno local, así como, por otro, reconocer que en su mayor parte esta es una materia que debe regularse por el propio municipio en uso de sus potestades normativas y de autoorganización. La participación ciudadana es una de las claves de la gobernanza local y debe, por tanto, impulsarse su uso, sin perjuicio de que las decisiones políticas las han de adoptar los órganos que tienen atribuida la competencia y que responden políticamente por su correcto o incorrecto ejercicio ya sea a través de los instrumentos de control o por medio del escrutinio electoral y de la legitimidad democrática que el mismo ofrece. La Ley Municipal parte, así, por reforzar la participación ciudadana, especialmente en el campo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, pero se sustenta, tal como se indicaba, en el presupuesto de que han de ser los propios municipios los que elijan los instrumentos y cauces de regulación de tal participación.

El título III, por su parte, pretende únicamente desarrollar algunos aspectos de la organización municipal que la legislación básica no ha recogido y que, sin embargo, van dirigidos a mejorar la calidad institucional del gobierno local en Euskadi. El presupuesto de partida es, asimismo, muy sencillo: al margen de lo previsto por el legislador básico en esta materia, que está muy desarrollada en la normativa estatal el legislador vasco es plenamente consciente que el desarrollo de tales previsiones ha de ser atribución específica de los propios municipios a

través de sus potestades normativas. No obstante, con carácter facultativo y, en todo caso, orientativo, se recogen una serie de previsiones que tienden exclusivamente a fomentar el desarrollo de la organización complementaria de los municipios vascos. El primer capítulo de este título III incluye también sendos preceptos relativos a los regímenes especiales de organización previstos para los municipios de gran población y para los más pequeños (el de concejo abierto).

El capítulo II procura atender a cuestiones prácticas, de carácter organizativo, que se presentan en pequeños municipios y en las asociaciones y agrupaciones de entidades locales. Aquéllos se ven, en ocasiones, con dificultades para prestar servicios que no requieren la provisión de un puesto de trabajo a tiempo completo, por lo que se prevé la posibilidad de que puedan crear puestos reservados a personal funcionario a tiempo parcial. Las asociaciones y agrupaciones de entidades locales precisan, especialmente en sus primeros años de andadura, de un adecuado margen de disponibilidad en el plano organizativo, para lo que se incorpora la previsión de puedan reservar puestos de trabajo reservados a personal laboral, salvo que impliquen ejercicio de autoridad.

El capítulo III tiene por objeto establecer una regulación complementaria –si bien muy limitada en su alcance funcional- de lo previsto en la legislación básica en lo que afecta al estatuto de las y los representantes locales. La función que cumple esta regulación es, asimismo, complementaria de la prevista en la legislación básica, pues no se puede dudar que el estatuto de las y los representantes locales y el juego entre mayorías/minorías en sede de gobierno local es un ámbito cuya regulación, al menos a nivel de principios y de reglas comunes, compete llevarla a cabo al legislador estatal por medio de la definición de lo básico. Así, en la línea de completar y mejorar el estatuto de tales representantes previsto por la actual legislación básica, se prevén una serie de reglas relativas a los derechos económicos de las y los representantes y a facilitar el ejercicio de la oposición, así como sobre los grupos políticos municipales.

IV.-

El título IV regula la importante materia de las competencias municipales. En este caso, la Ley Municipal hace una clara opción por apostar decididamente por la mayoría de edad política de los municipios vascos en la línea de lo expuesto por la Carta Europea de Autonomía Local. En efecto, en línea de lo dispuesto en este importante texto, las competencias públicas deben atribuirse por regla general preferentemente

a las autoridades más cercanas a los ciudadanos y ciudadanas, así como tales competencias municipales deben ser normalmente plenas y completas. Además, los municipios vascos han de ejercitar, bajo su entera responsabilidad, todas aquellas competencias que no estén atribuidas expresamente a otra instancia de gobierno, siempre que vayan dirigidas a atender las necesidades de sus vecinos y vecinas.

Las competencias municipales se configuran en la Ley como propias de los municipios. La Ley Municipal confiere a los municipios vascos un estándar mínimo de autonomía local que, posteriormente, podrá ser mejorado por las leyes sectoriales.

Obviamente, el legislador vasco –en uso de sus atribuciones competenciales sobre ese ámbito o sobre determinados sectores materiales- también podrá, en su caso, limitar excepcionalmente el alcance de tales competencias propias, pero en este caso deberá justificar que la medida es ajustada a los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad.

La Ley incorpora de forma diáfana una cláusula general de competencias a imagen y semejanza de lo previsto en otras leyes del mismo carácter y de acuerdo con lo que prevé la propia Carta Europea de Autonomía Local, al indicar que las entidades locales –dentro del ámbito de la Ley- tienen libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad.

Particular importancia tiene el listado de competencias propias de los municipios vascos que se recoge en la Ley. La idea central de ese listado es establecer, por un lado, las potestades genéricas que tienen los municipios sobre determinados ámbitos materiales, y, por otro, garantizar, en todo caso, un estándar mínimo de competencias que se proyectan sobre una serie de submaterias dentro de cada ámbito material específico.

Con el fin de garantizar la autonomía municipal en el plano competencial, el listado de competencias refleja de forma detallada las materias sobre las cuales ya están interviniendo los municipios a través del ejercicio de una serie de potestades sobre esas materias. Por tanto, buena parte de esas competencias ya están previstas en la legislación vigente aplicable, mientras que en otras materias se ha procedido a identificar cuáles eran los ámbitos sobre los cuales se proyectaban las distintas potestades ejercidas por los municipios. La Ley Municipal procura a través de este sistema de articulación de las competencias municipales garantizar un

estándar mínimo de competencias de estas entidades locales con el fin de reforzar la seguridad jurídica de los gobiernos municipales a la hora de desarrollar políticas propias, así como servir de medida, en su caso, para dotar a los municipios vascos de la financiación suficiente para su correcto ejercicio.

En ese sentido, es capital la regulación que se hace en la Ley de la efectividad de las competencias municipales, así como la distinción que se lleva a cabo entre competencias municipales y servicios obligatorios, pues ese amplio listado de competencias municipales no representa que todos los municipios deban ejercer todas y cada una de ellas, ni tampoco nos indica la intensidad de su ejercicio, sino simplemente reconoce títulos habilitantes para que los distintos gobiernos municipales puedan priorizar determinadas políticas públicas en función de sus respectivos programas de actuación municipal impulsados por sus respectivos equipos de gobierno. La Ley recoge, también, una regulación de mínimos sobre la delegación y transferencia de competencias, pudiéndose vincular la aplicación de tales institutos al principio de diferenciación. Asimismo, se incorpora un precepto que regula la resolución de los conflictos de competencias entre entidades locales. Finalmente, en el último capítulo se incorpora una regulación sumaria del régimen de los servicios obligatorios municipales y el de la dispensa de los mismos.

De notable importancia es, asimismo, la regulación recogida en el título V de la Ley, donde se prevé la participación de los municipios en la elaboración de las políticas públicas que lleven a cabo las instituciones autonómicas. Con el fin de hacer efectiva esa participación se crea el Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales como órgano colegiado que tiene por objeto hacer efectivas las relaciones de cooperación institucional de los municipios vascos con tales instituciones. El Consejo se configura como un órgano de composición paritaria, con autonomía orgánica y funcional, adscrito, a efectos presupuestarios, a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

En el seno del Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales se crea la Comisión Municipal de Políticas Públicas, de composición estrictamente municipal, y que tiene por función principal actuar como mecanismo de alerta temprana examinando mediante un informe previo los anteproyectos de ley o proyectos de disposiciones normativas reglamentarias, con la finalidad de analizar la adecuación de tales anteproyectos o proyectos a la autonomía local y determinar, en su caso, las modificaciones que procedan. La Comisión Municipal se convierte así en el órgano de garantía por excelencia de la autonomía municipal en

Euskadi frente a la actuación de los poderes públicos. No obstante, sus funciones se limitan a “alertar” a esos niveles de gobierno de que en sus actuaciones normativas en trámite se puede estar vulnerando el principio de autonomía municipal.

El título VI consta de tres capítulos. El primero se refiere a otras entidades locales distintas del municipio, materia para cuya regulación se atribuyen las más amplias facultades a los órganos forales de los territorios históricos, siempre que el ámbito territorial de la entidad local no exceda del territorio histórico. Queda para la regulación autonómica el supuesto de que la entidad local exceda dicho ámbito territorial. Asimismo, se incorporan, como novedad, las redes de municipios, que pueden ofrecer determinadas soluciones a problemas municipales concretos y configurarse como una fórmula flexible de cooperación institucional. En efecto, como se viene reiterando, las formas de intermunicipalidad están plenamente conectadas con el correcto ejercicio de las competencias municipales, pues en muchos casos serán necesariamente los únicos instrumentos efectivos para asegurar su correcto ejercicio.

En el capítulo II de este título se regula la gestión de servicios públicos. Se recoge asimismo una regulación meramente enumerativa sobre las formas de gestión, pero con alguna innovación puntual. No obstante, la premisa de esta regulación de las formas de gestión se asienta en reconocer que se trata de una materia vinculada estrechamente con las potestades de autoorganización y con las potestades normativas de los propios municipios.

En el capítulo III se regula la iniciativa local en el ejercicio de actividades económicas de interés vecinal, por parte de las entidades locales, tanto en régimen de concurrencia con privados como en régimen de monopolio.

La financiación municipal se trata en el título VII de la Ley. Esta regulación es, sin duda, una de las notas más peculiares que ofrece la Ley Municipal vasca en relación con el resto de leyes tanto estatales como autonómicas que tratan del régimen local, pues en esa legislación, de forma un tanto injustificada –aunque basada en temas competenciales–, se ha disociado siempre entre régimen jurídico de la Administración Local y financiación local. Una disociación que ha tenido funestas consecuencias para el desarrollo del nivel local de gobierno en el resto del Estado. Sin embargo, en el caso vasco, dadas las peculiaridades económico-financieras derivadas del propio Concierto Económico y de la regulación recogida en el propio Estatuto de Autonomía, no sólo es conveniente sino también necesario incorporar una serie de principios y reglas en materia de

financiación local, sin perjuicio de reconocer expresamente las importantes competencias que sobre ese ámbito material ostentan los territorios históricos.

El citado título VII recoge en su primer capítulo una serie de disposiciones generales en las que se prevén los principios de la hacienda local vasca, así como la regla de que la financiación municipal será incondicionada, sujetando la financiación condicionada a una serie de requisitos. Asimismo, se incorporan una serie de reglas relativas, entre otras cosas, al régimen de endeudamiento.

El capítulo II del título VII tiene por objeto la financiación de los municipios vascos y las demás entidades locales. Y en la regulación de esta importante materia se ha querido partir de un criterio prudente que pretende conciliar los intereses de los diferentes niveles de gobierno existentes en la Comunidad Autónoma (instituciones comunes, territorios históricos y municipios); para lo que se da una especial relevancia al Consejo Vasco de Finanzas Públicas, en el que todos ellos estarán representados.

Por último, en el título VIII se recogen una serie de regulaciones parciales sobre diferentes temas de interés municipal. En primer lugar, con el fin de cumplir con la exigencia constitucional de predeterminación legal, en los procedimientos sancionadores definidos por ordenanza se prevé la posibilidad de que las sanciones pecuniarias puedan ser sustituidas, mediando la voluntad de la persona infractora, por trabajos en beneficio de la comunidad de valor equivalente. Asimismo, se recogen una serie de previsiones relativas a la legitimación de las asociaciones de municipios en los procesos de negociación colectiva.

La disposición adicional tiene por objeto regular algunas cuestiones relativas a la asociación de municipios vascos más representativa del municipalismo vasco y que puede asumir, de acuerdo con lo previsto en la Ley y del desarrollo que se haga de la misma, un importante papel en la gestión política del modelo diseñado en este marco normativo.

Las disposiciones transitorias regulan, en primer lugar, determinados aspectos del régimen jurídico del personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter estatal, como complemento normativo necesario de la disposición adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, hasta que se proceda a su regulación definitiva y completa en la normativa autonómica de la función pública; la segunda de estas disposiciones mantiene la vigencia del actual

Registro de Administración Local de Euskadi, hasta que se regule el régimen de organización y funcionamiento del Registro de Entidades Locales que crea esta Ley.

Se recoge también una disposición derogatoria. Y, por último, se procede a una modificación puntual de algunos aspectos de la Ley de Territorios Históricos. Esta reforma puntual pretende dar entrada a la representación de los municipios vascos en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas para el tratamiento de algunos asuntos que se determinan en la Ley de forma tasada. No se trata, en ningún caso, de modificar la composición actual del citado Consejo Vasco de Finanzas Públicas en relación con las competencias nucleares que este órgano viene desempeñando, cuya composición principal sigue asentándose sobre la base paritaria de la representación de las instituciones comunes y de los territorios históricos, sino únicamente adherir a tal Consejo una representación municipal que dispondrá de voto en materias tasadas y, en el resto, sólo será oída en el proceso de deliberación del citado órgano, pero sin disponer de derecho de voto. Con esta presencia, no obstante, se satisface una de las reivindicaciones típicas del municipalismo vasco de disponer de voz y, en su caso, voto en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas. Y se cierra, así, un largo proceso que termina con la incorporación definitiva de los municipios en el sistema institucional vasco. Las tres últimas disposiciones finales se refieren a la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de participación municipal en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas; a la constitución y a la elaboración del reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales; y a la habilitación, al Gobierno Vasco, para el desarrollo reglamentario de la Ley.

TÍTULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.- Carácter de la Ley.

1.- La presente Ley se encuadra dentro de las competencias de la Comunidad Autónoma en relación con la Administración Local, sin perjuicio de las competencias que sobre esa misma materia ejercen los órganos forales de los territorios históricos.

2.- A través de esta Ley se determina la posición del municipio vasco en el entramado institucional de poderes públicos territoriales en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Artículo 2.- Objeto de la Ley.

Es objeto de esta Ley:

- a) El reconocimiento del nivel institucional municipal, de su posición y protagonismo en el conjunto de instituciones de Euskadi.
- b) La defensa y protección de la autonomía municipal.
- c) El establecimiento del régimen de competencias municipales y un marco legal para la garantía de suficiencia financiera en su ejercicio.
- d) El establecimiento del régimen jurídico mínimo de organización y funcionamiento de los municipios y demás entidades locales.
- e) La configuración de un sistema de coordinación y colaboración interinstitucional en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en cuanto sean desarrolladas por los municipios y demás entidades locales o requieran de su participación.

Artículo 3.- Principios.

1.- Los municipios adecuarán su actuación normativa y ejecutiva a los siguientes principios:

- a) Principio de autonomía municipal.
- b) Principio de autonomía normativa.
- c) Principio de autonomía financiera.
- d) Principio de autoorganización.
- e) Principio de proximidad, a la ciudadanía.
- f) Principio de solidaridad y de sostenibilidad.
- g) Principio de igualdad de la ciudadanía en el acceso a los servicios públicos locales.
- h) Principio de lealtad institucional.

2.- Los órganos de la Comunidad Autónoma, en el ejercicio de sus competencias, deberán respetar los principios recogidos en el apartado 1 del presente artículo.

3.- Asimismo, los órganos de la Comunidad Autónoma, cuando regulen sobre materias de interés local, deberán adecuar su intervención normativa a los siguientes principios:

- a) Suficiencia financiera de los municipios para el ejercicio de las competencias atribuidas.
- b) Subsidiariedad, como criterio de atribución competencial.
- c) Proporcionalidad.
- d) Diferenciación, siempre que la aplicación del tal principio sea viable en función de las capacidades de gestión de los respectivos municipios o, en su caso, de las demás entidades locales.

Artículo 4.- Entidades locales.

1.- Tendrán la consideración de entidades locales, a los efectos de esta ley:

- a) El municipio.
- b) Los concejos y cualesquiera otras entidades locales territoriales de ámbito inferior al municipio, conforme a la normativa foral existente en cada territorio.
- c) Las mancomunidades de municipios.
- d) Los consorcios constituidos de acuerdo con lo previsto en la presente ley o en la normativa foral que les sea de aplicación.
- e) Las cuadrillas alavesas y cualesquiera otras entidades que agrupen a varias entidades locales, bajo la denominación específica que corresponda, conforme a lo dispuesto en esta ley y demás normativa que sea de aplicación.
- f) Las áreas metropolitanas.

2.- Las entidades locales a las que se refiere el número anterior tendrán personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 5.- Registro de Entidades Locales.

1.- Los municipios y demás entidades locales a que se refiere el artículo anterior se inscribirán en el Registro de Entidades Locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco que se crea en virtud de esta ley. Las anotaciones que se practiquen en este Registro se comunicarán al de ámbito estatal que corresponda.

2.- El Registro tendrá carácter público y reglamentariamente se regulará su régimen de organización y funcionamiento.

TÍTULO I

EL MUNICIPIO: LA AUTONOMÍA MUNICIPAL

Artículo 6.- El municipio.

1.- El municipio es la entidad local básica de la organización territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.- El municipio es, asimismo, la primera instancia de representación política y cauce inmediato de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos locales.

Artículo 7.- Autonomía municipal.

1.- Los municipios vascos gozan de autonomía para la ordenación y gestión de una parte importante de los asuntos de interés público en el marco de las leyes y, en su caso, de las normas forales.

2.- Los municipios actuarán, en todo caso, bajo su responsabilidad y de acuerdo con sus competencias, que ejercerán siempre en beneficio de la ciudadanía.

3.- La autonomía municipal en Euskadi se entenderá dotada de contenido político, de tal modo que la capacidad de ordenación y gestión que comprende permita a los gobiernos locales la definición y ejecución de políticas propias que excedan de la estricta prestación de servicios.

4.- La autonomía municipal comprende, en todo caso, la ordenación de los intereses públicos en el ámbito propio del municipio, la organización y gestión de sus propios órganos de gobierno y administración, la organización de su propio territorio, la regulación y prestación de los servicios locales, la iniciativa económica, la política y gestión del personal a su servicio, el patrimonio y la recaudación, así como la administración y destino de los recursos de sus haciendas.

5.- Las facultades de coordinación que en su caso correspondan a las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma y a los territorios históricos no supondrán, en ningún caso, sustracción o menoscabo de la autonomía municipal.

Artículo 8.- Alteraciones relativas al municipio.

1.- La creación y supresión de municipios, la alteración y deslinde de términos municipales, los cambios de nombre y de la capitalidad de los municipios y la adopción y modificación de su bandera, enseña y escudo, así como el otorgamiento de títulos y cualesquiera otros distintivos, se regulará por la normativa emanada de los órganos forales de los territorios históricos.

2.- Las cuestiones sobre deslindes que se susciten entre municipios pertenecientes a distintos territorios históricos serán resueltas por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. Reglamentariamente se regulará el procedimiento, en el que se dará intervención a las diputaciones forales y a los municipios afectados.

TÍTULO II

ESTATUTO DE LAS VECINAS Y VECINOS: DEBERES Y DERECHOS. INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN

CAPÍTULO I

DEBERES, RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DE LAS VECINAS Y VECINOS

Artículo 9.- Deberes y responsabilidades de las vecinas y vecinos.

1.- Son deberes y responsabilidades de las vecinas y vecinos:

a) Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas al ejercicio de las competencias municipales y a la prestación de los servicios públicos municipales.

- b) Comunicar a los ayuntamientos las variaciones de sus circunstancias personales cuando impliquen una modificación de los datos obligatorios de su inscripción registral.
- c) Cumplir la normativa local y colaborar en su aplicación informando a las autoridades locales de cualquier infracción o anomalía que impida, dificulte o perturbe la prestación de los servicios o represente un peligro cierto para usuarios o terceros.
- d) Hacer un uso racional y adecuado del patrimonio municipal y de las infraestructuras, servicios urbanos y mobiliario urbano y colaborar en su preservación y recuperación.
- e) Respetar las normas de convivencia ciudadana en el espacio público y, asimismo, respetar los derechos de las demás personas.
- f) Preservar y contribuir a la mejora del medio ambiente, del espacio público y del paisaje urbano, mediante comportamientos ecológicos y sostenibles.
- g) Cualesquiera otros previstos por la normativa en vigor, en particular en las ordenanzas municipales que regulen los usos del espacio público.

2.- Los deberes y responsabilidades regulados en el apartado anterior, a excepción del previsto en la letra b), serán también exigibles a todas las personas que, sin ostentar la condición de vecino o vecina, se hallen circunstancial o permanentemente en el término municipal.

Artículo 10.- Derechos de las vecinas y vecinos.

Son derechos de las vecinas y vecinos:

- a) Ser elector o electora y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral.
- b) Participar en la elaboración y gestión de políticas públicas locales de acuerdo con la normativa que sea de aplicación.
- c) Disfrutar de un medio ambiente y un espacio público urbano adecuado y sostenible.
- d) Disponer de entornos accesibles, que no supongan barreras ni restricciones al tránsito y a la participación de las personas con discapacidad.

- e) Acceder de forma efectiva y en condiciones de igualdad a los servicios públicos, en los términos que determina la presente Ley y demás disposiciones que sean de aplicación. Se fomentará, especialmente, el acceso y utilización de tales servicios por las mujeres víctimas de violencia de género, personas desempleadas, discapacitadas, jubiladas, pensionistas y jóvenes, así como todas aquellas personas que carezcan de recursos económicos y a cualesquiera otros colectivos desfavorecidos que así se determine.
- f) Recibir información acerca de los riesgos, de carácter natural o tecnológico que puedan afectar al ámbito municipal, así como de los planes municipales de protección civil.
- g) Derecho a la cultura y a acceder a los bienes del patrimonio histórico.
- h) Derecho a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales y ser atendidos en la de su elección, en sus relaciones con la Administración Local, de acuerdo con la legislación autonómica que regule el ejercicio de los derechos lingüísticos de la ciudadanía.
- i) Derecho a la información y participación en los términos previstos en el Capítulo II de este Título.
- j) Ser informados, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración Municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal de acuerdo con la legislación aplicable.
- k) Exigir la prestación y en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público en el supuesto de constituir un servicio municipal obligatorio.
- l) Aquellos otros derechos establecidos en la normativa en vigor.

Artículo 11.- Cartas de deberes, responsabilidades y derechos de las vecinas y vecinos.

Los municipios vascos podrán aprobar, mediante ordenanza, cartas de derechos, deberes y responsabilidades de las vecinas y vecinos, en donde se recogerán, asimismo, los compromisos municipales ante el incumplimiento de los derechos consignados y las consecuencias que conlleve no respetar los deberes y responsabilidades ciudadanas.

CAPÍTULO II

INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Artículo 12.- Derecho a la información y participación de las vecinas y vecinos.

1.- Los municipios informarán a su ciudadanía sobre sus actividades y promoverán la participación de todas las vecinas y vecinos en la vida local ya sea directamente o a través de asociaciones generales o sectoriales.

2.- Los municipios, en sus relaciones con los vecinos, actuarán de conformidad con el principio de transparencia y de participación en el proceso de formación de las políticas públicas, con el fin de garantizar principios de buen gobierno y de buena administración.

Artículo 13.- Información y carácter público de las sesiones.

1.- Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las entidades locales y de sus antecedentes, previo pago, en su caso, de las exacciones legalmente establecidas. Asimismo, podrán consultar los archivos y registros, en los términos previstos en la legislación básica. La denegación o limitación de estos derechos, por razones de interés público, por intereses de terceros más dignos de protección o cuando así lo disponga una ley deberá hacerse mediante resolución motivada.

2.- Las entidades locales deberán disponer de su respectiva página web informativa, convenientemente actualizada.

3.- Las sesiones plenarias de las entidades locales son públicas. Dichas entidades procurarán la grabación de las sesiones y su difusión a través de su respectiva sede electrónica. No obstante, podrán ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta.

4.- En ningún caso, serán públicas las reuniones de la Junta de Gobierno Local.

5.- Con carácter general, las sesiones de los órganos de las entidades locales, que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno o de la Junta de

Gobierno, o el seguimiento de la gestión de los órganos de gobierno de la entidad, no serán públicas; salvo acuerdo del Pleno en sentido contrario, adoptado por mayoría absoluta del número legal de miembros, o previsión expresa en el reglamento orgánico de la entidad.

6.- En el caso de las personas con discapacidad, la información y régimen de publicidad de las sesiones prevista en este artículo deberá proporcionarse a través de medios y formatos accesibles. Cuando el municipio u otra entidad local vasca no dispusieran de medios adecuados para satisfacer el ejercicio de este derecho podrá solicitar auxilio institucional a otras Administraciones Públicas que sí dispongan de los mismos.

7.- La aplicación de lo dispuesto en este artículo se hará de conformidad con lo dispuesto en la legislación reguladora del acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.

Artículo 14.- Participación ciudadana y potestad de autoorganización local.

Los municipios deberán establecer y regular, en normas de carácter orgánico, procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en los asuntos de la vida pública local, tanto en el ámbito del municipio en su conjunto como, en su caso, en las distintas divisiones territoriales del mismo. Esta participación ciudadana no podrá ir en menoscabo de las potestades y competencias de los órganos del municipio y de sus divisiones territoriales, previstos en la legislación básica y en esta Ley.

Artículo 15.- Consultas populares.

1.- De conformidad con la legislación del Estado y con lo dispuesto en esta Ley, los alcaldes y alcaldesas, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno del Estado, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de las vecinas y vecinos, con excepción de los relativos a la hacienda local.

2.- El acuerdo del Pleno delimitará, con claridad, los términos exactos de la consulta que se propone; y se remitirá certificado del mismo al órgano competente, en materia de Administración Local, de la Comunidad Autónoma. Éste, previo informe sobre su procedencia y adjuntando el mismo, lo remitirá al órgano competente de la Administración del Estado.

3.- Una vez obtenida la autorización, el ayuntamiento convocará la consulta popular, que deberá celebrarse en un plazo no inferior a un mes ni superior a dos meses desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Territorio Histórico. La convocatoria contendrá el texto íntegro del proyecto de disposición o, en su caso, de la decisión objeto de la consulta; señalará claramente la pregunta o preguntas a que han de responder los vecinos convocados y determinará la fecha en que haya de celebrarse la votación.

4.- El ayuntamiento procurará la máxima difusión de la convocatoria, para general conocimiento de los vecinos.

Artículo 16.- Iniciativas ciudadanas.

1.- Las vecinas y vecinos con derecho de sufragio activo en las elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa popular. A tal efecto, podrán presentar propuestas de acuerdos o actuaciones o proposiciones de ordenanzas en materias de la competencia propia municipal, de acuerdo con lo que se establece en la presente Ley.

2.- Las iniciativas a que hace referencia el apartado anterior deberán ser sometidas a debate y votación sobre su admisibilidad en el Pleno municipal, sin perjuicio de que posteriormente se tramiten y sean resueltas por el órgano competente por razón de la materia. En todo caso, se requerirá el previo informe de legalidad de la secretaria del respectivo municipio, así como de la intervención cuando afecte a derechos y obligaciones de contenido económico

3.- Las iniciativas populares pueden llevar incorporada una propuesta de consulta popular municipal, que será tramitada en tal caso por el procedimiento y con los requisitos previstos en el artículo anterior.

4.- Las iniciativas previstas en este artículo deberán ir suscritas al menos por el diez por ciento de las vecinas y vecinos del municipio, con derecho de sufragio activo.

5. Los ayuntamientos podrán regular reglamentariamente el procedimiento para el ejercicio de las iniciativas ciudadanas previstas en este artículo.

Artículo 17.- Participación y tecnologías de la información y de las comunicaciones.

1.- Las entidades locales y, especialmente, los municipios impulsarán, dentro de las políticas de innovación local, la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para promover y facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas; así como para suministrar información de toda la actividad municipal.

2.- Cuando se trate de procedimientos y trámites relativos a una actividad de servicios y a su ejercicio incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, las personas físicas y jurídicas prestadoras podrán realizar dichos procedimientos y trámites, por medio de una ventanilla única, por vía electrónica y a distancia, salvo que se trate de la inspección del lugar o del equipo que se utiliza en la prestación del servicio.

3.- Asimismo, los municipios garantizarán que las personas físicas y jurídicas prestadoras de servicios puedan a través de la ventanilla única obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio, así como conocer las resoluciones y resto de comunicaciones de las autoridades competentes en relación con sus solicitudes.

4.- Las diputaciones forales, de acuerdo con lo previsto en la legislación básica del Estado, colaborarán con los municipios, especialmente con aquéllos que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan desarrollar satisfactoriamente lo establecido en este artículo y en el 13.2 de esta Ley.

TÍTULO III

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y ESTATUTO DE SUS REPRESENTANTES

CAPÍTULO I

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

Artículo 18.- Principios generales.

1.- Los municipios vascos dispondrán de los órganos necesarios previstos en la legislación básica sobre régimen local, pudiendo desplegar sus potestades normativas de organización dentro de ese marco normativo y de lo dispuesto en esta Ley.

2.- El funcionamiento de los órganos necesarios, su régimen de acuerdos y el estatuto de sus miembros se ajustará, asimismo, a lo previsto en la citada legislación básica y a lo recogido en la presente Ley y en los reglamentos municipales de organización. En todo caso, se garantizará el ejercicio de la acción de gobierno y el respeto de las minorías políticas en sus órganos representativos, conforme al principio de legitimación democrática de los mismos.

3.- En el resto de los órganos complementarios, los municipios se ajustarán, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley, a lo que se establezca en sus respectivos reglamentos de organización dictados en el uso de sus competencias.

Artículo 19.- Municipios de gran población.

1.- A los municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco incluidos en los supuestos previstos en el artículo 121.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, les será de aplicación el régimen de organización de los municipios de gran población previsto en la legislación básica de régimen local.

2.- En los supuestos en los que sea necesaria la iniciativa del ayuntamiento para adquirir la condición de municipio de gran población, aquél deberá adoptar el correspondiente acuerdo plenario, por mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno, y remitir certificado del mismo al Departamento competente en materia de régimen local, de la

Administración General de la Comunidad Autónoma, cuyo titular elevará el correspondiente anteproyecto de ley a Consejo de Gobierno.

Artículo 20.- Régimen de concejo abierto.

1. Funcionan en régimen de concejo abierto los municipios que:
 - a. Tradicionalmente, sin tener obligación legal, cuenten con este régimen especial de gobierno y administración.
 - b. Por su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable.
 - c. Con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, venían obligados a funcionar en este régimen y hayan venido funcionando ininterrumpidamente en el mismo, si tras la sesión constitutiva de la corporación, convocada la asamblea vecinal, así lo acordaran por unanimidad los tres miembros electos y la mayoría de los vecinos.

2. La constitución en concejo abierto de los municipios a que se refiere el apartado b) del número anterior requiere petición de la mayoría de los vecinos con derecho a sufragio activo, decisión favorable de los dos tercios del número legal de miembros del ayuntamiento y aprobación por el órgano competente, en materia de régimen local, de la Administración de la Comunidad Autónoma.

3. Los municipios que vengán funcionando en régimen de concejo abierto, de acuerdo con las letras a) y b) del número 1 de este artículo, y deseen cambiar al régimen general, deberán adoptar acuerdo en tal sentido por mayoría simple de la asamblea vecinal y obtener la aprobación del órgano competente, en materia de régimen local, de la Administración de la Comunidad Autónoma. El nuevo régimen será de aplicación a partir de la constitución de la nueva corporación, tras las siguientes elecciones municipales.

4. En el régimen de concejo abierto, el gobierno y la administración municipales corresponden al alcalde o alcaldesa y a la asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores. Ajustan su funcionamiento a los usos, costumbres y tradiciones locales que sean aplicables y estén

debidamente acreditados. En defecto de los mismos se observarán las siguientes normas:

- a) Quien ostente la alcaldía deberá designar al menos a un teniente de alcalde para que le asista en el ejercicio de sus funciones y le sustituya en caso de ausencia, enfermedad o cualquier otro supuesto en que sea necesaria tal sustitución. Le corresponden las funciones que la normativa de régimen local asigna a la alcaldía.
- b) A la asamblea vecinal le corresponderán las funciones que la normativa reguladora de régimen local asigna al pleno municipal.

5. 5. En los municipios en régimen de concejo abierto existirá una comisión especial de cuentas, a la que corresponderá el examen, estudio e informe de todas las cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias, que deba aprobar la asamblea vecinal. Estará formada por un mínimo de tres miembros elegidos por este órgano. Su régimen de funcionamiento será el previsto en el correspondiente acuerdo de la asamblea vecinal.

6. Los alcaldes de los municipios de menos de 100 residentes podrán convocar a sus vecinos a concejo abierto para decisiones de especial trascendencia para el municipio. Si así lo hicieren, deberán someterse obligatoriamente al criterio de la asamblea vecinal constituida al efecto.

CAPITULO II

DISPOSICIONES ESPECIALES EN MATERIA DE PUESTOS DE TRABAJO

Artículo 21.- Puestos de trabajo a tiempo parcial.

Cuando la correcta prestación de un servicio o actividad no requiera la dedicación a tiempo completo de un funcionario o funcionaria, los municipios con población inferior a 5.000 habitantes podrán prever puestos de trabajo reservados a funcionarios y funcionarias a dedicación parcial en sus relaciones de puestos.

Artículo 22.- Puestos de trabajo reservados a personal laboral.

Las entidades locales constituidas por asociaciones o agrupaciones de otras entidades locales podrán prever, en sus relaciones de puestos de trabajo, puestos reservados a personal laboral, salvo que impliquen ejercicio de autoridad.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES SOBRE EL ESTATUTO DE LAS Y LOS REPRESENTANTES LOCALES

Artículo 23.- Régimen de las y los representantes municipales.

1.- El régimen jurídico de las y los representantes municipales vascos es el establecido con carácter general en la legislación básica de régimen local y en la legislación electoral, que se completará con lo previsto en la presente Ley.

2.- La determinación del número de representantes que integran los municipios, el procedimiento para su elección, la duración de su mandato y los supuestos de inelegibilidad e incompatibilidad se prevén en la legislación electoral.

3.- Los derechos y deberes de las y los representantes locales serán los establecidos con carácter general en la legislación básica, así como los previstos en esta ley.

Artículo 24.- Derechos económicos y régimen de dedicación de las y los representantes municipales.

1.- Las y los representantes locales tendrán los derechos económicos y las modalidades del régimen de dedicación que se prevén en la legislación básica de régimen local, en esta Ley, en el reglamento orgánico municipal y, en su caso, en los acuerdos plenarios correspondientes.

2.- Los ayuntamientos regularán en el reglamento orgánico municipal o por acuerdo de Pleno los siguientes extremos:

a) Los regímenes de dedicación y retribuciones del alcalde y concejales del equipo de gobierno.

b) Regímenes de dedicación y retribuciones de los portavoces o representantes de los distintos grupos políticos, para lo que se tendrá en cuenta el principio de proporcionalidad derivado del número de miembros integrantes del Pleno. El importe de los recursos asignados, por este concepto, a los grupos de la oposición, en ningún caso podrá ser superior al atribuido al equipo de gobierno.

c) El régimen de indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio del cargo.

d) Fórmulas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y profesional de los representantes locales.

3.- A los alcaldes y concejales que se les asigne dedicación exclusiva o parcial se les dará de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, en los términos y con las salvedades previstas en la legislación básica.

4.- El número de representantes locales con dedicación exclusiva o parcial, así como sus retribuciones, será acordada por el Pleno a propuesta del Alcalde, al inicio de cada legislatura. Dichas dedicaciones y retribuciones sólo podrán ser modificadas por el Pleno a propuesta del alcalde.

5.- A efectos de la mejor armonización del gasto público, la Comisión Municipal del Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales regulado en el artículo 39 podrá establecer, a modo de recomendación, una tabla de retribuciones en función de la población del municipio y del tipo de dedicación exclusiva o parcial de las y los representantes locales.

Artículo 25.- La oposición.

Los municipios vascos con población superior a cinco mil habitantes garantizarán que exista al menos un concejal o concejala con dedicación parcial perteneciente al grupo político de la oposición con mayor número de representantes, que a partir de veinte mil habitantes lo será con dedicación exclusiva, con el fin de que las funciones de control y fiscalización del gobierno municipal puedan llevarse a cabo de forma efectiva. Si dos o más grupos tuvieran igual número de representantes locales se adjudicará a la fuerza política más votada.

Artículo 26.- Grupos políticos municipales.

1.- Las y los representantes locales se constituirán en grupos políticos y dispondrán de los derechos y obligaciones que se establecen en la legislación básica y en la presente Ley, con excepción de los miembros no adscritos cuyos derechos económicos y políticos no podrán ser nunca superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia.

2.- Todos los grupos políticos con representación en el Pleno, salvo renuncia expresa, tendrán derecho a participar en los órganos

complementarios, mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos, en la misma proporción que en el Pleno. Cuando, por la composición de la corporación, no sea posible conseguir dicha proporcionalidad, podrá optarse por repartir los puestos de modo que la formación de mayorías sea la misma que en el Pleno o por integrar los órganos con un número de miembros igual para cada grupo, y aplicar, para la adopción de acuerdos, el sistema del voto ponderado.

3.- Los grupos políticos municipales tendrán derecho a asignaciones económicas con el fin de desempeñar dignamente sus funciones. Dichas asignaciones contarán con un componente fijo, idéntico para todos los grupos, y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos. Estas asignaciones no podrán destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación ni a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. A los efectos de una mejor armonización del gasto público, la Comisión Municipal del Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales podrá establecer, a modo de recomendación, una tabla de asignaciones a grupos municipales en función de la población de los municipios.

Artículo 27.- Código ético y de buen gobierno de las y los representantes municipales vascos.

1.- La Comisión Municipal de Políticas Públicas Locales elaborará, a modo de recomendación, un código ético y de buen gobierno de las y los representantes locales vascos que abogue por hacer efectiva la ejemplaridad pública de tales representantes y refuerce la legitimación de sus funciones ante la ciudadanía.

2.- Los municipios vascos, en uso de sus facultades de autoorganización podrán, en todo caso, aprobar códigos éticos o de buen gobierno distintos del previsto en el párrafo anterior.

TÍTULO IV
COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 28.- Principios generales.

1.- Las competencias de los municipios vascos se determinarán de acuerdo en todo caso con lo previsto en la legislación básica, en la presente Ley, en otras leyes del Parlamento Vasco y en las normas forales de los territorios históricos.

2.- Para la determinación, en su caso, de las competencias de los municipios vascos se tendrá en cuenta el principio de mayor proximidad a la ciudadanía. Asimismo se valorará la amplitud o naturaleza de la materia o actividad pública, la capacidad de gestión de las entidades locales o las necesidades de eficacia o economía.

3.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 3.3 de la presente Ley, la asignación a otro nivel de gobierno de una competencia atribuida al municipio por la presente Ley, se deberá fundamentar en el principio de subsidiariedad, así como se deberá justificar la proporcionalidad de la medida. En todo caso, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Que sea necesaria, por imprescindible, una actuación unitaria, sea en el plano territorial del territorio histórico o de la Comunidad Autónoma.

b) Que la homogeneidad requerida no pueda alcanzarse de forma suficiente mediante la asistencia técnica o a través de las fórmulas de intermunicipalidad previstas en la presente Ley o en las normas forales.

c) Que las concretas funciones atribuidas a las entidades forales o autonómicas sean estrictamente necesarias para la satisfacción de los intereses supramunicipales.

Artículo 29.- Potestades.

- 1.- A los municipios les corresponden todas las potestades previstas en la legislación básica de régimen local, incluida la declaración de urgente ocupación de bienes y derechos en las expropiaciones por motivos urbanísticos.
- 2.- Las demás entidades locales ejercerán las citadas potestades, con las salvedades y limitaciones previstas en las leyes y en las normas forales que les sean de aplicación.

CAPÍTULO II

COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS

Artículo 30.- Cláusula general de competencias.

- 1.- Los municipios vascos, sin perjuicio de las competencias que se prevén en el artículo siguiente, dispondrán de competencias para ejercer la iniciativa en la ordenación y gestión de cualesquiera otra, siempre que no esté atribuida expresamente a otro nivel de gobierno y contribuya a satisfacer las necesidades de la comunidad municipal.
- 2.- Asimismo, los municipios vascos podrán llevar a cabo actividades y servicios complementarios a los desarrollados por otras administraciones públicas.

Artículo 31.- Competencias municipales.

- 1.- Las competencias de los municipios vascos previstas en el presente artículo tendrán la condición de competencias propias
- 2.- En los casos de concurrencia competencial se actuará bajo los principios de coordinación y colaboración, a fin de evitar duplicidades innecesarias y garantizar en todo caso el mejor y más eficaz servicio a la ciudadanía.
- 3.- En el marco de la legislación aplicable y sin perjuicio de las que, además, les atribuyan las leyes sectoriales, los municipios vascos tendrán las siguientes competencias:

1) Espectáculos, actividades recreativas y establecimientos públicos en los que se celebren u organicen aquellos:

- Ordenación de las condiciones y requisitos para el inicio de una determinada actividad de servicios en establecimientos de pública concurrencia en los que se celebren espectáculos y actividades recreativas, así como su control, vigilancia, inspección y régimen sancionador.

- Otorgamiento de licencias, autorizaciones y permisos relativos a los espectáculos, actividades recreativas y los establecimientos públicos en los que se celebren, salvo que de acuerdo con la legislación vigente baste con una comunicación previa o una declaración responsable.

2) Desarrollo y aplicación de la normativa reguladora de la protección de animales y tenencia de animales potencialmente peligrosos.

3) Policía y seguridad ciudadana: En esta materia las competencias de los municipios se extienden, en el marco de lo dispuesto en la legislación de seguridad pública, sobre los siguientes ámbitos:

- Definir y aplicar políticas preventivas en materia de seguridad ciudadana en el ámbito local en coordinación con otras administraciones.

- Regular mediante ordenanza las relaciones de convivencia ciudadana en espacios públicos y locales de pública concurrencia.

- Regular mediante ordenanza el uso de los servicios, equipamientos, infraestructuras e instalaciones de titularidad pública.

- Crear los cuerpos de policía local, así como su ordenación, planificación y gestión, en el marco de lo previsto en la legislación sobre policía y seguridad pública".

4) Protección civil, prevención y extinción de incendios:

- Elaborar y aprobar planes de protección civil y prevención y extinción de incendios, planes que deberán ser coherentes y estar coordinados con los que formulen las administraciones de ámbito supralocal.

- Aprobar ordenanzas que establezcan medidas preventivas, y en su caso reactivas, en relación con incendios, inundaciones u otro tipo de percances o calamidades.

- Crear y gestionar estructuras municipales de protección civil, así como servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento.
- Ordenar la adopción de medidas extraordinarias que sean necesarias para proteger a la población en caso de incendio o catástrofe, pudiendo movilizar a las vecinas y vecinos, requisar equipos u ordenar el desalojo de edificios, entre otras.
- Promover la vinculación ciudadana en materia de protección civil a través de la figura del voluntariado, así como fomentar la creación de organizaciones de voluntariado.
- Elaborar y ejecutar programas municipales de previsión y prevención en colaboración con otras administraciones competentes en la materia.

5) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina en materia urbanística:

- Elaboración, tramitación y la aprobación inicial, provisional y, en su caso, definitiva, de los planes de ordenación urbana, estructural o pormenorizada.
- Elaboración, tramitación y aprobación de los planes de compatibilización del planeamiento general, previo acuerdo de los municipios afectados.
- Ordenación, desarrollo, gestión y disciplina del suelo no urbanizable.
- Desarrollo, gestión y disciplina en operaciones susceptibles de rehabilitación, renovación, regeneración y sustitución urbana.
- Elaboración, tramitación y aprobación definitiva de los estudios de detalle, ordenanzas complementarias de la ordenación urbanística, catálogos y otros instrumentos de ordenación urbanística.
- Elaboración, tramitación y aprobación de los instrumentos de ejecución urbanística.
- Otorgamiento, en su caso, licencias urbanísticas, salvo los supuestos que proceda una comunicación previa o declaración responsable.
- Garantía y protección de la legalidad urbanística y restauración de la ordenación urbanística.
- Inspección y sanción de las infracciones urbanísticas.

- Participación en la elaboración y diseño de los programas de ejecución de infraestructuras públicas cuando discurren por el respectivo término municipal.

- Participación efectiva en la elaboración de la planificación en los instrumentos de ordenación del territorio que afecten al término municipal.

6) Planificación, programación y gestión de viviendas:

- Elaboración, gestión y ejecución de la planificación local de vivienda y participación en la elaboración y gestión de la planificación autonómica de vivienda.

- Promoción y gestión de viviendas, sin perjuicio de la competencia atribuida a la Comunidad Autónoma y en coordinación y colaboración con ésta.

- Ordenación, promoción, gestión, adjudicación y control de equipamientos dotacionales y viviendas protegidas en sus diferentes categorías, de regulación municipal de nueva construcción o derivados de planes específicos de rehabilitación y renovación urbana.

- Tramitación de los expedientes derivados de la inspección técnica de los edificios, cuando impliquen necesidad de intervención.

7) Promoción, defensa y protección del medio ambiente y desarrollo sostenible:

- Formulación y gestión de políticas municipales para la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, el desarrollo sostenible y la protección del patrimonio natural y la biodiversidad en el ámbito municipal.

- Elaboración y aprobación de la normativa municipal de protección del medio ambiente.

- Otorgamiento de las licencias de actividades clasificadas, salvo en aquellos casos que se prevea una comunicación previa o declaración responsable, así como la vigilancia, control, inspección, supervisión y ejercicio de la potestad sancionadora con respecto a las actividades sometidas a intervención municipal.

- Impulso y programación de actuaciones en materia de información ambiental y de educación ambiental.

- Participación efectiva en la elaboración de la planificación en materia ambiental.
 - Ordenación, planificación, programación y ejecución de actuaciones en materia de protección del medio ambiente contra ruidos, vibraciones, contaminación lumínica y olores.
 - Vigilancia, control, inspección, supervisión y ejercicio de la potestad sancionadora con respecto a las actividades sometidas a intervención municipal.
 - Ordenación del acceso y limpieza de playas.
 - Planificación, conservación y explotación sostenible de los montes y lugares de acceso a la naturaleza de titularidad municipal, e implantación de medidas de conservación activa de la Red Natura 2000, de conformidad con la planificación del patrimonio natural y de la planificación territorial o sectorial que resulte en cada caso de aplicación.
- 8) Promoción, defensa y protección de la salud pública, incluyendo lo relacionado con las drogodependencias:
- Formulación y gestión de políticas municipales en materia de protección y promoción de la salud pública, con visión integradora dentro de la política municipal de sostenibilidad social, económica y ambiental; en donde se incluyan planes y acciones específicas en materia de Salud y Adicciones.
 - Aplicación de la evaluación del impacto en salud en las políticas locales, cuando éstas tengan un impacto relevante sobre la salud, de acuerdo con el principio de salud en todas las políticas, y con la finalidad de incorporar la protección y promoción de la salud en el diseño e implementación de las intervenciones locales.
 - Desarrollo de programas de promoción y educación para la salud con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad o de riesgo.
 - Colaboración con la administración sanitaria vasca en la planificación de los recursos asistenciales para la atención sanitaria a la población.
 - Participación en el gobierno y gestión de los servicios asistenciales de la sanidad pública vasca.

- Ordenación de la movilidad con criterios de sostenibilidad, integración y cohesión social, promoción de la actividad física y prevención de accidentes.
 - Control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana.
 - Control sanitario oficial de la distribución de alimentos.
 - Control sanitario oficial de la calidad del agua de consumo humano.
 - Control sanitario de industrias, transportes, actividades y servicios.
 - Control de la salubridad de los espacios públicos.
 - Control sanitario de zonas de baño costeras y continentales.
 - Velar por el cumplimiento de las normas sanitarias relativas al sacrificio de animales para las necesidades personales del criador.
 - Control de plagas urbanas.
 - Control sanitario de los cementerios y policía sanitaria mortuoria.
 - Elaboración y aprobación de ordenanzas municipales que permitan la vigilancia, control, inspección, supervisión y ejercicio de la potestad sancionadora con respecto a las actividades de promoción, defensa y protección de la salud pública, incluyendo las adicciones.
- 9) Ordenación, planificación y gestión de la defensa y protección de personas usuarias y consumidoras:
- Elaboración y aprobación de ordenanzas municipales sobre defensa y protección de las personas usuarias y consumidoras.
 - Información y educación a las personas usuarias y consumidoras en materia de consumo, así como la orientación y el asesoramiento a éstas sobre sus derechos y la forma más eficaz para ejercerlos.
 - Información y orientación a las empresas y profesionales en materia de consumo.
 - Análisis, tramitación, mediación o arbitraje, en su caso, de las quejas, reclamaciones y denuncias que presentan las personas consumidoras.

- Constitución, gestión, organización y evaluación de las oficinas municipales de información al consumidor en su ámbito territorial.
 - Fomento, divulgación y, en su caso, gestión, del sistema arbitral de consumo, en colaboración con la Administración autonómica.
 - Inspección y el ejercicio de la potestad sancionadora.
 - Adopción de medidas urgentes y requerimiento de las colaboraciones precisas en los supuestos de crisis o emergencia que afecten a la salud y seguridad o intereses económicos de las personas consumidoras y usuarias.
 - Fomento y apoyo a las asociaciones de personas consumidoras y usuarias.
- 10) Ordenación, planificación y gestión de cementerios, crematorios y tanatorios.
- 11) Ordenación, planificación y gestión de los servicios sociales:
- Ordenación, planificación y gestión de sus propios servicios en materia de servicios sociales.
 - Planificación de los servicios sociales municipales del Sistema Vasco de Servicios Sociales, de acuerdo con la planificación estratégica de las Administraciones autonómica y foral y el mapa de servicios sociales.
 - Creación, organización y gestión de los servicios sociales de base.
 - Provisión de los servicios sociales de atención primaria del catálogo de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales.
 - Protección a las personas menores de edad en situación de riesgo.
 - Fomento y promoción del tercer sector de acción social, así como la promoción de la participación ciudadana, el fomento del asociacionismo y del voluntariado y la participación de las personas usuarias y profesionales en la gestión y evaluación de los servicios sociales.
 - Aportación de información actualizada referida a las prestaciones y servicios en su ámbito territorial de actuación.

- Fomento y la promoción, en coordinación con las demás administraciones públicas vascas, de la formación de los agentes y profesionales que intervienen en el Sistema Vasco de Servicios Sociales.

- Inspección y el ejercicio de la potestad sancionadora con respecto a los servicios, centros y entidades de su titularidad y con respecto a los servicios, centros y entidades privados concertados, contratados o, en su caso, convenidos, para la prestación de servicios de competencia municipal.

- En su caso, la elaboración y el desarrollo de los programas municipales para la inclusión social aprobados en ejecución del Plan Vasco de Inclusión Social.

- Tramitación y resolución de los procedimientos relativos a las ayudas de emergencia social y, en su caso, la realización de los pagos correspondientes a dichas ayudas, así como el seguimiento y control de las mismas y el ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de su competencia.

12) Ordenación, gestión, prestación y control de los servicios en el ciclo integral del agua de acuerdo con los Reglamentos marcos correspondientes:

- Abastecimiento de agua en alta o aducción, que incluye la captación y alumbramiento de los recursos hídricos y su gestión, incluida la generación de los recursos no convencionales, el tratamiento de potabilización, el transporte por arterias o tuberías principales y el almacenamiento en depósitos reguladores de cabecera de los núcleos de población.

- Abastecimiento de agua en baja, que incluye su distribución, el almacenamiento intermedio y el suministro o reparto de agua de consumo hasta las acometidas particulares o instalaciones de las personas usuarias.

- Saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluviales de los núcleos de población a través de las redes de alcantarillado municipales hasta el punto de interceptación con los colectores generales o hasta el punto de recogida para su tratamiento.

- Depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende su interceptación y el transporte mediante los colectores generales, su tratamiento y el vertido del efluente a las masas de agua continentales o marítimas.

13) Ordenación, gestión y prestación del servicio de alumbrado público.

14) Ordenación, prestación y control de los servicios de gestión de residuos domésticos y comerciales no peligrosos, a través, en su caso, de sistemas autorizados integrados para la recogida selectiva, así como la planificación, programación y disciplina de la reducción de la producción de esos mismos residuos, todo ello de conformidad con la planificación marco de nivel territorial.

15) Ordenación, gestión y prestación del servicio de limpieza viaria.

16) Ordenación, planificación, programación, gestión, disciplina y promoción de los servicios urbanos de transporte público de personas que, por cualquier modo de transporte, se lleven a cabo íntegramente dentro de sus respectivos términos municipales.

17) Planificación, ordenación y ejecución de infraestructuras ciclables en tramos, comprendidos en su término municipal, que sean de su titularidad.

18) Promoción del deporte y gestión de equipamientos deportivos de uso público:

- Ejecución de los programas de deporte escolar y para la extensión del deporte para todas las personas, aprobados por los órganos forales de los territorios históricos, en coordinación con estos últimos.

- Construcción, ampliación y mejora de los equipamientos deportivos municipales así como su gestión y mantenimiento.

- Elaboración y aprobación de las ordenanzas reguladoras del uso de los equipamientos deportivos municipales.

- Organización y, en su caso, autorización de manifestaciones y competiciones deportivas que transcurran exclusivamente por su territorio, especialmente las de carácter popular y las destinadas a participantes en edad escolar y a grupos de atención especial.

- Formulación de la planificación deportiva municipal.

19) Planificación y gestión de actividades culturales y promoción de la cultura:

- Elaboración, aprobación y ejecución de planes y proyectos municipales en materia de bibliotecas, archivos, museos y colecciones museográficas.

- Gestión de sus instituciones culturales propias, la construcción y gestión de sus equipamientos culturales y su coordinación con otras del municipio.
- Organización y promoción de todo tipo de actividades culturales y el fomento de la creación y la producción artística, así como las industrias culturales.
- Participación en el sistema bibliotecario de Euskadi y en la red de lectura pública de Euskadi.

20) Protección y conservación del patrimonio histórico municipal y elaboración y aprobación de planes especiales de protección y catálogos.

21) Turismo:

- Promoción de sus recursos turísticos y fiestas de especial interés.
- Declaración de interés turístico de lugares, bienes y servicios situados dentro de su territorio.
- Prestación del servicio de información turística de carácter local.
- Participación en la formulación de los instrumentos de planificación y promoción del sector turístico en la Comunidad Autónoma.
- Diseño de la política de infraestructuras turísticas de titularidad municipal.
- Colaboración con otras administraciones públicas en la promoción de zonas y recursos turísticos comunes.

22) Educación:

- Participación en la programación de la enseñanza y en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
- Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria y de educación especial, así como la puesta a disposición de la Administración educativa de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes públicos.
- Gestión de la utilización de instalaciones de los centros docentes públicos fuera del horario escolar, en coordinación con el Departamento competente en materia de educación de la Administración de la

Comunidad Autónoma. a través de los procedimientos que se establezcan al efecto.

- Gestión de las escuelas municipales de música previo convenio con las instituciones autonómicas titulares de la competencia en el que se determinará el sistema de financiación de tales actividades.

23) Desarrollo económico y social local:

- Fomento del desarrollo económico y social local en el marco de la planificación autonómica.

- Elaboración de los planes estratégicos de desarrollo local y de empleo local.

- Prospección de las necesidades de los sectores económicos y del comportamiento del mercado de trabajo local.

- Colaboración en la ejecución de políticas activas de empleo municipales, como ente cooperativo con la Administración competente para la ejecución de las políticas activas. Para ello participaran en la gestión de programas y medidas de políticas activas de empleo y en particular en:

- intermediación laboral.
- fomento de la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad en el mercado de trabajo.
- formación profesional para el empleo.
- fomento del empleo autónomo e iniciativas empresariales generadoras de empleo.
- promoción del empleo local.

- Fomento de infraestructuras para la instalación de nuevas empresas.

- Promoción de todo tipo de actividades económicas, especialmente las de carácter comercial, turístico y artesanal.

24) Euskera:

- Elaboración, aprobación y ejecución de los planes municipales del uso del euskera.

- Fomento del uso del euskera en todos los ámbitos de la vida social, a fin de posibilitar a la ciudadanía el desenvolvimiento en dicha lengua en las diversas actividades mercantiles, culturales, asociativas, deportivas, religiosas y cualesquiera otras.

- Elaboración y aprobación de la ordenanza municipal reguladora del uso del euskera en el ámbito municipal.

- Cooperación con la Administración de la Comunidad Autónoma en la enseñanza del euskera para personas adultas, previo convenio al efecto en el que se determinará el sistema de financiación de tales actividades.

25) Igualdad y eliminación de todas las formas de discriminación, sin perjuicio de las especificidades recogidas en la legislación relativa a la igualdad de mujeres y hombres:

- Ordenación general y planificación en materia de igualdad en el ámbito municipal.

- Establecimiento y desarrollo de estructuras, programas y procedimientos para integrar la perspectiva de igualdad en su administración, así como aprobación de planes de igualdad en el empleo público.

- Prestación de programas o servicios con el objetivo de garantizar el acceso a los derechos sociales básicos de quienes sufren discriminación.

- Ordenación y gestión de recursos y servicios para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de mujeres y hombres, que por su naturaleza hayan de prestarse con carácter municipal.

- Detección de situaciones de discriminación que se produzcan en el ámbito local y adopción de medidas para su erradicación.

26) Acogida e integración de personas inmigrantes; incluyendo la ejecución de las políticas de inmigración a través de la acreditación del arraigo para la integración social de inmigrantes, así como la acreditación de la adecuación de la vivienda para el reagrupamiento familiar de inmigrantes.

27) Gestión del patrimonio municipal, la regulación de su uso y destino y su conservación y mantenimiento.

28) Gestión del padrón municipal de habitantes, así como la comprobación de la residencia habitual, en el municipio, señalada en la solicitud de inscripción y, en su caso, la denegación de la inscripción cuando el

número de personas inscritas en el mismo domicilio supere el máximo de capacidad de residentes por vivienda o unidad residencial previsto en las ordenanzas municipales conforme a la legislación aplicable.

29) Ordenación y gestión de mataderos.

30) Establecimiento y desarrollo de estructuras de participación ciudadana y del acceso a las nuevas tecnologías.

31) Diseño, conservación y mantenimiento de las vías públicas urbanas y rurales de titularidad municipal dentro del término municipal.

32) Ordenación, gestión, disciplina y promoción en vías urbanas de su titularidad de la movilidad y accesibilidad de personas, vehículos, sean o no a motor, y animales, y del transporte de personas y mercancías, para lo que podrán fijar los medios materiales, técnicos y humanos que se consideren necesarios.

33) Regulación y ordenación del tráfico y del estacionamiento de vehículos en vías urbanas.

34) Provisión de medios materiales y humanos para el ejercicio de las funciones de los juzgados de paz:

35) Parques y jardines.

36) Comercio:

- Ordenación, gestión, promoción y disciplina sobre mercados de abastos.
- Autorización de ferias y mercadillos de apertura periódica así como la promoción del acondicionamiento físico de los espacios destinados a su instalación.
- Organización y autorización, en su caso, de eventos o exposiciones destinadas a la promoción de productos singulares.
- Planificación y ordenación del uso comercial al por menor y grandes equipamientos comerciales atendiendo a criterios de ordenación urbanística y utilización racional del suelo.
- Regulación, inspección y sanción en materia de venta ambulante.
- Aprobación y ejecución de planes de orientación comercial para el ámbito municipal.

- Regulación, inspección y sanción en materia de compraventa de vehículos y otros artículos en espacios públicos.

37) Juventud:

- Ordenación, gestión, inspección, control y ejercicio de la potestad sancionadora de actividades, servicios y equipamientos específicos para la juventud.

- Planificación y programación municipal de los servicios a la juventud, de acuerdo con la planificación autonómica y foral.

38) Cooperación para el desarrollo:

- Ordenación, programación y gestión de la cooperación técnica y económico-financiera municipal para el desarrollo, así como la acción humanitaria y de emergencia.

-Ejecución de los programas y acciones de cooperación al desarrollo.

Artículo 32.- Efectividad de las competencias municipales.

1.- Los municipios podrán ejercer sus competencias por sí mismos o por medio de las fórmulas previstas en el título VI de la presente Ley o en las respectivas normas forales de los territorios históricos.

2.- Las diputaciones forales, de acuerdo con lo previsto en la legislación básica, prestarán la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios del respectivo territorio histórico con la finalidad de garantizar la plena efectividad de las competencias y la prestación de los servicios atribuidos a los municipios por la presente Ley, cuando por sí mismos o asociados no puedan atenderlos.

Artículo 33.- Delegación y transferencia de competencias.

1.- La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá transferir competencias o delegar su ejercicio, en cualquiera de los municipios o entidades locales, en el marco de lo dispuesto en la presente Ley

2.- Mediante la aplicación de los institutos de la transferencia y delegación se podrá hacer efectivo principio de diferenciación, especialmente aplicado en relación con aquellos municipios que dispongan de una dimensión adecuada y de capacidad de gestión suficiente para prestar eficazmente las competencias transferidas o la delegación de su ejercicio.

3.- Los municipios podrán delegar en los concejos de su ámbito territorial, previa aceptación expresa de éstos, el ejercicio de las competencias necesarias para la realización de obras y la prestación de servicios que afecten a los intereses propios de los mismos.

4.- La delegación y transferencia de competencias de los órganos forales de los territorios históricos a los municipios y demás entidades locales se realizará de conformidad con la legislación reguladora del régimen jurídico de dichas Administraciones Públicas.

Artículo 34.- Transferencia de competencias.

1.- Mediante ley del Parlamento Vasco se podrán transferir a los municipios vascos competencias propias de la Comunidad Autónoma.

2.- La Ley que proceda a la transferencia determinará el régimen jurídico y la financiación de la misma.

3.- La Administración de la Comunidad Autónoma podrá reservarse, cuando se estime oportuno, facultades de ordenación, planificación, coordinación general y control.

Artículo 35.- Delegación del ejercicio de competencias.

1.- La delegación del ejercicio de las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma en los municipios vascos o en otras entidades locales se hará por decreto del Gobierno Vasco.

2.- La delegación respetará, en todo caso, la potestad de autoorganización de la entidad local. La competencia delegada se ejercerá con plena responsabilidad, sin perjuicio de las facultades de dirección y control que puedan establecerse.

3.- Para la efectividad de la delegación se requerirá la aceptación expresa de la entidad local y la cesión en uso de los medios materiales, las dotaciones económicas y financieras, así como, en su caso, la adscripción de los recursos humanos necesarios para su ejercicio.

4.- El decreto de delegación deberá recoger, al menos, las siguientes cuestiones:

a) Normas legales que justifican la delegación.

b) Funciones cuya ejecución se delega.

c) Medios materiales, personales, económicos y financieros que, en su caso, se ponen a disposición de la entidad local, así como la valoración y el procedimiento de revisión.

d) Valoración del coste efectivo del servicio.

e) Fecha de efectividad de la delegación y plazo de la misma.

f) Condiciones, instrucciones, directrices emitidas por la Comunidad Autónoma, así como mecanismos de control, facultades que se reserva y procedimiento de formulación de requerimientos que podrá conllevar, en su caso, la revocación de la delegación.

g) Obligaciones de la entidad local a la que se le delega el ejercicio de la competencia.

5.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el decreto de delegación podrá suponer, previa audiencia a la entidad local y acuerdo del Consejo de Gobierno, la suspensión de la delegación y la avocación del ejercicio de las competencias por el Gobierno Vasco. Las entidades locales podrán renunciar a la delegación en los casos establecidos en el decreto de delegación. En estos casos, el Gobierno Vasco determinará los mecanismos de liquidación de los recursos y cargas derivados del ejercicio o no de las competencias delegadas.

Artículo 36.- Conflictos de competencias.

1.- Los conflictos de competencias entre entidades locales de la Comunidad Autónoma serán instruidos y resueltos por el órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma competente en materia de régimen local.

2.- La resolución pondrá fin a la vía administrativa y será recurrible ante la jurisdicción contencioso administrativa de acuerdo con la legislación correspondiente.

3.- Cuando se trate de un conflicto positivo, la entidad local que estuviere conociendo del asunto suspenderá sus actuaciones en el caso de que fuere requerida de inhibición por el órgano competente en materia de régimen local de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Si a pesar del requerimiento dicta resolución antes de resolverse el conflicto de competencias, tal resolución estará viciada de nulidad de pleno derecho.

4.- Reglamentariamente se determinará el procedimiento para la resolución de dichos conflictos.

5. Se exceptúan de lo dispuesto en los párrafos anteriores, los conflictos de competencias entre concejos pertenecientes al mismo municipio, que serán resueltos de acuerdo con lo que disponga la normativa foral aplicable..

CAPITULO III

SERVICIOS OBLIGATORIOS

Artículo 37.- Servicios obligatorios.

Tendrán la consideración de servicios obligatorios municipales los que con este carácter consten en la legislación básica local y en la legislación autonómica.

Artículo 38.- Dispensa de las diputaciones forales.

En aquellos casos en que un municipio acredite que, por sus características peculiares, le resulte imposible o de muy difícil cumplimiento la obligación de establecimiento y prestación de alguno o algunos de los servicios obligatorios, podrá solicitar la dispensa de la obligación a la diputación foral del territorio al que pertenezca, de acuerdo con el procedimiento que se prevea en la normativa foral correspondiente.

TÍTULO V

PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AUTONÓMICAS: EL CONSEJO VASCO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES.

Artículo 39.- El Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales.

El Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales es un órgano colegiado que tiene como función hacer efectivas las relaciones de cooperación institucional de los municipios vascos con las instituciones autonómicas en aras a garantizar la ponderación de los intereses municipales en la toma de decisiones a nivel autonómico.

Artículo 40.- Naturaleza del Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales.

1.- El Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales es el órgano de representación y participación de los municipios en las instituciones de la Comunidad Autónoma que tiene por función garantizar la autonomía local.

2.- El Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales, estará adscrito, únicamente a efectos presupuestarios, a la Presidencia del Gobierno Vasco.

3.- Para el ejercicio de sus competencias goza de autonomía orgánica y funcional. El Consejo adoptará su propio reglamento de organización y funcionamiento, en el que se desarrollarán las previsiones recogidas en la presente Ley.

Artículo 41.- Composición del Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales.

1.- El Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales estará presidido por el Lehendakari o por el Consejero o Consejera del Gobierno Vasco en quien delegue.

2.- El presidente o presidenta de la asociación de municipios vascos con mayor implantación en la Comunidad Autónoma, o persona en quien delegue, ejercerá la vicepresidencia del Consejo.

3.- El Consejo de Políticas Públicas Locales tendrá una composición paritaria entre representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de los municipios vascos. Lo integran, además de la presidencia y de la vicepresidencia, tres vocales representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma, designados por la Presidencia del Gobierno Vasco y otros tres representantes municipales, designados por la asociación de municipios vascos con mayor implantación, debiendo recaer sobre miembros de las tres fuerzas políticas con mayor implantación en cuanto a número de votos en las elecciones municipales de la Comunidad Autónoma, que en todo caso, tendrán que tener la condición de alcalde o alcaldesa o concejal o concejala. Los vocales designados se mantendrán en sus cargos hasta que sean cesados por la institución o entidad que los designó o concurra alguna otra causa de cese legal o reglamentariamente prevista.

4.- El Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales, para cumplir sus funciones, dispondrá de los medios y recursos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento.

Artículo 42.- Funciones del Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales.

El Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales tendrá las siguientes funciones:

- a) Participar, de oficio o previa petición, en la elaboración de iniciativas normativas así como en planes y programas, cuando afecten a las competencias propias de los municipios. Esta participación se materializará en la emisión de informes sobre el impacto que aquellos puedan ejercer sobre dichas competencias, en los que podrán incluirse juicios basados en criterios de legalidad y oportunidad. Dichos informes no tendrán carácter vinculante.
- b) Formular propuestas, incluidas las de iniciativa legislativa, sobre todas aquellas materias que afecten a competencias propias de los municipios.
- c) Promover la coordinación y colaboración interadministrativas e intercambio de información entre las distintas Administraciones Públicas.
- d) Debatir y poner en común de las diferentes políticas públicas de carácter sectorial que afecten a las competencias municipales y sus implicaciones en los diferentes niveles de gobierno.
- e) Promover sistemas de cooperación o, en su caso, de coordinación, para la gestión integrada de las políticas públicas por los diferentes niveles de gobierno.
- f) Proponer, a las personas legitimadas para ello, el planteamiento de recursos de inconstitucionalidad o conflictos de competencias ante el Tribunal Constitucional en aquellos casos en que se pueda ver afectada la autonomía local.
- g) Velar por el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 28.3 de esta Ley y cualesquiera otras atribuidas expresamente en esta u otras leyes.

Artículo 43.- Participación en la preparación de anteproyectos de leyes y decretos legislativos, así como proyectos de reglamentos y planes y programas que afecten a competencias propias de los municipios.

1.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado a) del artículo anterior, los anteproyectos de ley o de decreto legislativo y los proyectos de reglamento, planes y programas autonómicos que afecten a competencias propias de los municipios, en la fase del procedimiento de emisión de informes consultivos, deberán ser enviados por el Departamento correspondiente, al Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales.

2.- En el seno del Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales se crea una Comisión Municipal de Políticas Públicas que tendrá asignadas las funciones que en este artículo se establecen. La Comisión Municipal será presidida por quien ostente la presidencia de la asociación de municipios vascos con mayor implantación en la Comunidad Autónoma, o persona en quien delegue y estará exclusivamente formada por las y los representantes de los municipios vascos que formen parte del Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales.

3.- La Comisión Municipal habrá de emitir informe en el plazo de quince días desde la recepción de la solicitud. Si en la orden de remisión se hace constar, motivadamente, la urgencia del informe, el plazo máximo para su despacho será de ocho días.

4.- Si las modificaciones propuestas por la Comisión Municipal fueran admitidas íntegramente por el Departamento, continuará la tramitación.

5.- Si no acoge todas o parte de las propuestas, deberá convocarse sesión del Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales para que en el plazo de ocho días las delegaciones local y gubernamental de este órgano puedan debatirlas.

6.- De no alcanzar acuerdo ambas delegaciones, el Departamento proseguirá con la tramitación pero deberá elaborar un informe justificativo de las razones del rechazo de las propuestas de modificación planteadas en el informe de la Comisión Municipal.

7.- En el caso de los anteproyectos de ley, tras su aprobación como proyecto de ley, deberá remitirse al Parlamento, junto con el proyecto, el informe justificativo de las razones del rechazo y las actas de las sesión o sesiones celebradas por la Comisión Municipal y por el Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales.

8.- El Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales deberá ser informado de los proyectos normativos, planes y programas de los territorios históricos que afecten a competencias propias de los municipios.

TÍTULO VI

OTRAS ENTIDADES LOCALES Y GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES

CAPÍTULO I

OTRAS ENTIDADES LOCALES

Artículo 44.- Creación, modificación y supresión de otras entidades locales.

1.- Los órganos forales de los territorios históricos podrán crear, modificar y suprimir, dentro de su territorio, cualesquiera entidades que agrupen a varios municipios, de acuerdo con la legislación básica, esta ley y la normativa foral correspondiente.

2.- Cuando la creación, modificación y la supresión de la entidad local afecte a competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma, se requerirá informe previo del órgano competente de ésta en la materia de que se trate.

Artículo 45.- Entidades locales asociativas.

Las mancomunidades de municipios y otras fórmulas asociativas de entidades locales, para la ejecución en común de obras y servicios determinados, pertenecientes a un solo territorio histórico, se regirán por la normativa básica de régimen local y la emanada de los órganos forales del respectivo territorio histórico, sin perjuicio de los preceptos de esta Ley que les sean de aplicación.

Artículo 46.- Mancomunidades de municipios pertenecientes a más de un territorio histórico.

1.- Las mancomunidades de municipios pertenecientes a más de un territorio histórico se regirán por lo dispuesto en este artículo.

2.- Los ayuntamientos de los municipios que pretendan mancomunarse deberán acordarlo con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del pleno.

3.- Los estatutos de la mancomunidad serán aprobados por los alcaldes o alcaldesas y concejales o concejalas de todos los municipios promotores, constituidos en asamblea por mayoría absoluta, disponiendo del previo informe de las diputaciones forales interesadas. A continuación deberán ser aprobados por los plenos de cada uno de los ayuntamientos integrantes de la mancomunidad con la misma mayoría señalada en el párrafo anterior.

4.- Los estatutos deberán contener, como mínimo, los siguientes puntos:

a) La denominación, sede y relación de municipios que integran la mancomunidad.

b) La determinación de sus fines, así como la concreción de sus competencias y potestades.

c) Los órganos de gobierno y administración, así como la composición, forma de designación y cese de sus miembros.

d) Las normas de funcionamiento de los órganos de gobierno, así como de gestión administrativa y, en su caso, de la gerencia.

e) Las aportaciones de los municipios integrantes y demás recursos económicos de la propia entidad.

f) Plazo de duración de la mancomunidad.

g) Procedimiento de modificación de los estatutos, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.

h) Procedimiento de incorporación y separación de municipios y posibilidad de que estos se asocien para alguna o algunas de las finalidades de la mancomunidad.

i) Las causas y el procedimiento de disolución de la mancomunidad, así como las normas sobre su liquidación.

j) El régimen indemnizatorio aplicable a los municipios por incumplimiento de sus obligaciones con la mancomunidad.

k) Previsiones sobre el régimen jurídico en que hayan de quedar los bienes cedidos en uso de los municipios que se separen de la mancomunidad.

5.- Sin perjuicio del respeto a la autonomía local en la determinación de los órganos de gobierno de la mancomunidad, de sus atribuciones y régimen de funcionamiento, sus respectivos estatutos garantizarán que la composición del órgano de representación municipal asuma funciones de control y asegure la presencia efectiva de miembros electos de todos los municipios, sin que ninguno pueda ostentar la mayoría absoluta. Las y los representantes en el órgano de representación municipal se designarán por cada municipio de forma proporcional a los resultados electorales obtenidos en las últimas elecciones locales.

6.- Los municipios de la Comunidad Autónoma podrán asimismo integrarse en mancomunidades con municipios pertenecientes a otras Comunidades Autónomas en los términos establecidos en la presente Ley y de acuerdo, asimismo, con la legislación que sobre esta misma materia se determine, en su caso, por la legislación de la otra u otras Comunidades Autónomas afectadas.

Artículo 47.- Redes de cooperación municipal y local.

1.- La cooperación territorial de los municipios y demás entidades locales podrá desarrollarse también a través de redes de ámbito autonómico o inferior, de conformidad con la normativa que les resulte de aplicación.

2.- Las redes municipales o de entidades locales de ámbito autonómico o de municipios o entidades de más de un territorio histórico podrán estar integradas por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, siempre que se destinen a garantizar el ejercicio de competencias municipales y actúen en aras de salvaguardar los intereses de la ciudadanía.

3.- Las redes de cooperación territorial o algunos de sus miembros podrán crear entidades con personalidad jurídica para el cumplimiento de sus fines.

4.- Las redes municipales o de entidades locales se constituirán mediante convenio. Las asociaciones de municipios vascos promoverán la constitución de redes municipales y podrán incorporarse a las mismas en los términos previstos en el apartado 2 de este mismo artículo.

5.- Los municipios y demás entidades locales de la Comunidad Autónoma podrán integrarse en redes de cooperación de ámbito estatal e internacional, de conformidad con la normativa que les sea de aplicación..

Artículo 48. Convenios de cooperación.

1.- Los municipios y demás entidades locales podrán celebrar convenios de cooperación para conseguir una gestión más eficaz, un mejor aprovechamiento de las instalaciones y equipamientos y una mejor prestación de los servicios de competencia municipal.

2.- La cooperación entre los municipios y demás entidades locales con el resto de las administraciones públicas se desarrollará de acuerdo con lo dispuesto en la legislación básica de régimen local para las relaciones interadministrativas.

Artículo 49.- Consorcios.

1.- Los municipios y demás entidades locales podrán constituir consorcios con otras administraciones públicas para fines de interés común. Asimismo, podrán participar, en los consorcios, entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés público concurrentes con los de las administraciones públicas consorciadas.

2.- Los consorcios tienen la consideración de entidades locales a los efectos de esta ley si están constituidos exclusiva o predominantemente por entidades locales para la prestación de servicios o realización de actividades que, de acuerdo con esta ley estén atribuidas a la competencia de los municipios.

3.- Para la gestión de los servicios de su competencia, los consorcios podrán utilizar cualquiera de las formas previstas en la legislación de régimen local.

4.- Cuando el ámbito territorial de las entidades de derecho público que vayan a consorciarse no exceda de un territorio histórico, la constitución del consorcio se efectuará de conformidad con la normativa emanada de los órganos forales del respectivo territorio histórico.

Artículo 50.- Consorcios cuyo ámbito territorial exceda de un territorio histórico.

1.- Los consorcios en los que el ámbito territorial de las entidades de derecho público consorciadas se extiendan a más de un territorio

histórico, sin exceder el de la Comunidad Autónoma, se regulará por lo dispuesto en este artículo.

2.- Los máximos órganos de gobierno de las entidades locales que pretendan constituir o integrarse en un consorcio deberán adoptar acuerdo en tal sentido con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros. En el resto de las entidades que pretendan consorciarse, los acuerdos a que se refiere el párrafo anterior se adoptarán de conformidad con sus propios estatutos o normas de funcionamiento interno.

3.- Los estatutos del consorcio serán elaborados por una comisión formada por representantes de todas las entidades que pretendan constituir el consorcio y aprobados finalmente, en todo caso, por cada uno de los entes consorciados. En el caso de las entidades locales, esa aprobación lo será con la misma mayoría prevista en el número anterior.

4.- Los estatutos del consorcio regularán el régimen del funcionamiento del mismo y contendrán, con las adecuaciones debidas, las mismas menciones que las previstas en el artículo 46.4 de esta Ley para las mancomunidades.

5.- Los estatutos del consorcio garantizarán la presencia efectiva, en máximo órgano de gobierno del mismo, de representantes de todas las entidades consorciadas, sin que ninguna pueda ostentar la mayoría absoluta. La representación municipal se designará, por cada municipio, de forma proporcional a los resultados electorales obtenidos en las últimas elecciones locales.

6.- Las entidades locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco podrán integrarse en consorcios con entidades de otras Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y el resto de la legislación que sea de aplicación.

Artículo 51.- Áreas metropolitanas que superen el ámbito territorial de un territorio histórico.

Por ley del Parlamento Vasco se podrán crear áreas metropolitanas u otras entidades intermunicipales que extiendan su ámbito territorial a municipios de más de un territorio histórico. La ley de creación determinará las competencias de esas entidades, los órganos que forman parte de las mismas y el resto de elementos que conforman su régimen jurídico.

CAPÍTULO II

GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Artículo 52.- Gestión de servicios locales.

Sin perjuicio de lo establecido en la legislación básica del Estado y en esta ley, el régimen jurídico y las formas de gestión de servicios públicos locales se determinarán por los respectivos municipios en uso de sus potestades normativas y de autoorganización. Las entidades locales aprobarán la reglamentación del servicio antes de comenzar a prestarlo y regulará al menos, las modalidades de prestación del servicio, situación, financiación y derechos y deberes de los usuarios.

Artículo 53.- Formas de gestión.

1.- Los servicios públicos locales pueden gestionarse directamente, por la propia entidad o mediante entidades o sociedades instrumentales a la misma. También podrán gestionarse indirectamente por medio de las modalidades contractuales y de colaboración previstas en la legislación vigente.

2.- La gestión directa podrá adoptar alguna de las siguientes modalidades:

- a) Prestación por la propia entidad.
- b) Prestación por un organismo público, ya sea organismo autónomo o entidad pública empresarial.
- c) Sociedad mercantil local, cuyo capital pertenezca íntegramente a la entidad local o a un ente público de la misma.
- d) Fundación pública local, en los términos previstos en la legislación aplicable.

3.- Las citadas modalidades de gestión se regirán por la legislación básica del Estado que les resulte de aplicación, por lo previsto en la presente Ley y por la propia normativa municipal que se apruebe en cada caso.

CAPÍTULO III

EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Artículo 54.- Iniciativa local en el ejercicio de actividades económicas.

Las entidades locales, mediante expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida, para la satisfacción de las necesidades de los vecinos, podrán ejercer la iniciativa pública para el ejercicio de actividades económicas.

Artículo 55.- Actividades económicas en régimen de concurrencia.

1.- Para el ejercicio de actividades económicas por las entidades locales, en régimen de concurrencia, se requiere:

a) Acuerdo inicial en tal sentido de la corporación, en el que designará una comisión de estudio compuesta por concejales y técnicos.

b) Redacción, por la comisión a la que se refiere el párrafo anterior, de una memoria relativa a los aspectos social, jurídico, técnico y financiero de la actividad de que se trate. Deberá determinarse la forma de gestión, casos en que debe cesar la prestación de la actividad, soluciones que deben adoptarse en este supuesto y proyecto de precios del servicio.

c) Exposición pública de la memoria, previo acuerdo adoptado en tal sentido por la corporación, por un plazo no inferior a 30 días naturales, durante los cuales podrán formular observaciones tanto particulares como entidades.

d) Aprobación del proyecto por el Pleno de la corporación local.

2.- Los acuerdos a que se refiere este artículo se adoptarán por mayoría simple de los miembros de la corporación presentes.

Artículo 56.- Actividades económicas en régimen de monopolio.

1.- Para la efectiva ejecución, en régimen de monopolio, de actividades o servicios esenciales reservados a favor de las entidades locales, por Ley estatal o autonómica, se seguirá el siguiente procedimiento:

a) Acuerdo en tal sentido del Pleno de la corporación local, adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma y siguiendo los trámites previstos en el artículo anterior, con la única variante de que en la memoria deberá justificarse la conveniencia del régimen de monopolio.

b) Remisión del expediente completo al órgano competente en materia de régimen local, de la Administración de la Comunidad Autónoma.

c) El Consejero del Departamento competente en materia de régimen local elevará el expediente a Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes a partir de la fecha de su recepción. El Consejo de Gobierno se limitará a aprobar o desestimar el proyecto.

d) En el supuesto de que la entidad local no recibiera notificación del Acuerdo del Consejo de Gobierno transcurridos tres meses desde la fecha de recepción del expediente en el órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma, se entenderá que el Acuerdo es aprobatorio y la entidad local podrá ejecutar, en régimen de monopolio, la actividad o servicio de que se trate.

2.- El acuerdo de la efectiva ejecución de una actividad o prestación de un servicio en régimen de monopolio por la entidad local comportará los siguientes efectos jurídicos:

a) Llevará aneja la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes afectos al servicio, en el supuesto de que requiera expropiación de empresas o rescate de concesiones, en el que deberá avisarse a los interesados con, al menos, seis meses de antelación. La expropiación de la empresa y el rescate de concesiones sólo comprenderá aquellos elementos de las mismas que se hallaran directamente afectados al funcionamiento del servicio o fuesen necesarios para su desarrollo normal.

b) No podrán establecerse empresas dedicadas a la actividad declarada en régimen de monopolio dentro del término municipal o ámbito territorial de la entidad local, ni ejercitar tal actividad por empresas privadas en dicho ámbito territorial.

Artículo 57.- Sustitución del régimen de ejercicio de actividades económicas.

La corporación local podrá acordar la sustitución del régimen de monopolio por el de libre concurrencia siguiendo los trámites previstos en el art. 55, con la salvedad de que el acuerdo al que se refiere el apartado 1.d) deberá adoptarse con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. La sustitución del régimen de libre concurrencia por el de monopolio se efectuará siguiendo los trámites previstos en el art. 56.

Artículo 58.- Cese en el ejercicio de actividades económicas.

La entidad local cesará en el ejercicio de la actividad económica:

- a) En los casos expresamente previstos en la memoria aprobada por el Pleno y que sirvió de base para el ejercicio de la actividad.
- b) Por cualquier causa legal de disolución de la sociedad que preste el servicio.
- c) Por imposibilidad material de realizar el fin previsto.
- d) Por acuerdo adoptado por el Pleno, con el mismo quórum que el exigido para aprobar el proyecto de ejercicio de la actividad por la entidad local.
- e) En cualquier otro supuesto legalmente previsto.

TÍTULO VII

FINANCIACIÓN MUNICIPAL

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 59.- Las haciendas locales.

Las haciendas de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi se registrarán por las disposiciones que, referentes a las materias propias de aquellas, aprueben los órganos forales de los territorios

históricos, y por las normas de las propias entidades locales dictadas en ejercicio de su potestad reglamentaria y de autoorganización.

Artículo 60.- Principios básicos de actuación de las haciendas locales.

1.- Las haciendas locales actuarán de acuerdo con los siguientes principios básicos:

- a) Autonomía financiera, que se concretará en el ejercicio de las potestades de ordenación y gestión en materia económico-financiera y presupuestaria, sin perjuicio de las competencias sobre estas materias de los órganos forales de los territorios históricos.
- b) Suficiencia financiera, que implica la disponibilidad por parte de las haciendas locales de los recursos necesarios para el ejercicio de las competencias atribuidas por la presente Ley, así como por otras leyes del Parlamento Vasco o normas forales de los territorios históricos.

2.- Asimismo, las haciendas locales actuarán de conformidad con los principios de legalidad, objetividad, economía, eficacia, eficiencia, control, unidad de caja y racionalidad en la gestión de sus recursos.

3.- Las haciendas locales ejercerán sus atribuciones de forma coordinada, solidaria y con corresponsabilidad con la Hacienda General del País Vasco y las haciendas forales de los territorios históricos.

Artículo 61.- Financiación incondicionada.

1.- La financiación de los municipios y demás entidades locales vascas será, por regla general, de carácter incondicionado.

2.- Sin perjuicio de lo anterior, se podrán prever mecanismos de financiación condicionada que, en todo caso, se ajustarán a los siguientes criterios:

- a) Los planes dirigidos a los municipios garantizarán la participación municipal en lo que respecta a la fijación de prioridades, procurando conciliar los intereses municipales con los intereses de ámbito autonómico o foral, en su caso.
- b) Se deberá facilitar la gestión económica con carácter plurianual, pudiendo la entidad local planificar las inversiones, así como decidir y

elegir de conformidad con sus planes de actuación municipal y sus prioridades.

c) Los servicios que se presten como consecuencia de sistemas de financiación condicionados deberán garantizar la calidad a sus destinatarios y asegurar la continuidad de su prestación en el tiempo.

Artículo 62.- Régimen de las nuevas obligaciones y servicios municipales.

1.- Sólo por ley del Parlamento Vasco o por norma foral se podrán establecer nuevas obligaciones a cargo de los municipios y demás entidades locales o atribuirles nuevos servicios que supongan cargas financieras adicionales.

2.- La ley o norma foral que establezca tales obligaciones o servicios determinará, en todo caso y de forma simultánea, los medios de financiación necesarios que garanticen el cumplimiento de tales obligaciones o la prestación de los citados servicios.

3.- Asimismo, a efectos de garantizar los principios de autonomía y suficiencia financiera de los municipios y demás entidades locales vascas, la memoria económica que acompañe a los proyectos de ley deberá contener un análisis del impacto que, en su caso, puedan producir sobre las haciendas de las entidades locales.

4.- La propia norma deberá establecer los medios y procedimientos que permitan su aplicación con pleno respeto a los principios de autonomía y suficiencia financiera.

Artículo 63.- Régimen de adquisición, destino y prescripción de derechos.

1.- La adquisición de los derechos de las haciendas locales tendrá lugar de acuerdo con lo dispuesto en la normativa específica por la que cada uno de ellos se regule.

2.- Salvo que se estableciera otra cosa en la normativa específica de cada ingreso, el producto del mismo se destinará a financiar el conjunto de las obligaciones de las que sea titular la entidad. Cuando se trate de ingresos derivados de liberalidades destinadas a fines determinados, no se requerirá disposición expresa de afectación siempre que aquéllas sean aceptadas conforme a la normativa en cada momento vigente.

3.- Los derechos de las haciendas locales están sometidos a prescripción en los términos establecidos en las disposiciones aplicables de manera específica, directa o supletoriamente, a cada uno de aquéllos

Artículo 64.- Asunción y efectividad de obligaciones.

1.- Los municipios y demás entidades locales de Euskadi asumirán las obligaciones que les impongan directamente las leyes y normas forales que les sean aplicables, así como las que se deriven de hechos, actos y negocios jurídicos, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico.

2.- Incurrirán en nulidad de pleno derecho las disposiciones de carácter general, resoluciones y actos administrativos dictados por la entidad local por medio de los cuales se pretendan adquirir compromisos de gasto por cuantía superior al importe de los créditos de carácter limitativo autorizados en el estado de gastos del presupuesto de la respectiva entidad.

3.- Las obligaciones de pago de cantidades a cargo de las entidades locales y de sus organismos autónomos solamente serán efectivas cuando se deriven de la ejecución de sus presupuestos, de sentencia judicial firme y de operaciones de tesorería.

Artículo 65.- Régimen de endeudamiento y concesión de garantías.

En los términos en que se prevea por las normas que dicten los órganos forales de los territorios históricos, los municipios y demás entidades locales vascas, sus organismos públicos, entidades adscritas y sociedades mercantiles dependientes podrán concertar operaciones de crédito en todas sus modalidades, así como aquellas operaciones financieras accesorias destinadas a asegurar, disminuir o diversificar su riesgo o coste.

CAPÍTULO II

FINANCIACIÓN DE LOS MUNICIPIOS VASCOS Y DEMÁS ENTIDADES LOCALES

Artículo 66.- Régimen de participación de los municipios en los tributos concertados.

1.- Las haciendas locales participarán en el rendimiento de los tributos que los territorios históricos obtengan en virtud del Concierto Económico, en función de los siguientes parámetros:

a) Las competencias y los servicios de los que sean titulares los municipios y demás entidades locales de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.

b) Los rendimientos de los tributos de las haciendas locales y el resto de sus ingresos propios.

2.- El Consejo Vasco de Finanzas Públicas aprobará la metodología para la determinación de los recursos y la fijación del coeficiente en que participará el nivel municipal en los tributos concertados. La citada metodología se incorporará al proyecto de ley previsto en el artículo 22.8 y, en su caso, en el 29 de la Ley 27/1983 de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos, de manera que su régimen de aprobación y su vigencia temporal sean los mismos que los de aquella ley.

3.- Deberá garantizarse, para el conjunto de los municipios de la Comunidad Autónoma, un nivel de recursos que en ningún caso será inferior al que les correspondería por aplicación de la legislación de régimen común.

4.- Los territorios históricos contribuirán a la financiación de las haciendas locales de la Comunidad Autónoma en función de los coeficientes de recaudación de cada uno de ellos, corregidos de acuerdo con lo que establezca el Consejo Vasco de Políticas Públicas.

Artículo 67.- Determinación de la participación en cada Territorio Histórico.

1.- La cantidad destinada a la financiación de las haciendas locales de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, se distribuirá del siguiente modo:

a) El 50% entre los municipios de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con los criterios que establezca el Consejo Vasco de Finanzas Públicas, entre los que deberán figurar, con los coeficientes de ponderación que determine, la población de cada municipio y la presión fiscal en tributos locales.

b) El otro 50% de acuerdo con los criterios que establezcan los órganos forales de los territorios históricos, entre las entidades locales de su respectivo territorio histórico.

2.- A los efectos de lo dispuesto en el número anterior, se imputará, a cada territorio histórico, la suma de las cantidades correspondientes a los municipios de su respectivo territorio de acuerdo con la letra a), y el 50% de la cantidad que corresponda aportar a la financiación de las haciendas locales de la Comunidad Autónoma.

3. Los órganos forales de cada territorio histórico distribuirán, entre los municipios y demás entidades locales de su respectivo territorio, las cantidades que les correspondan por su participación en la recaudación por tributos concertados, de acuerdo con lo establecido en este artículo.

Artículo 68.- Aplicación y liquidación.

1.- La financiación que, conforme a lo dispuesto en los artículos precedentes, corresponde a los municipios y demás entidades locales, constituirá un recurso ordinario de sus respectivas haciendas locales para el sostenimiento y prestación de todos los servicios de su competencia, conforme a la normativa que resulte de aplicación.

2.- Los importes que resulten para cada ejercicio y que hayan sido puestos a disposición de los Municipios y demás entidades locales en cada territorio histórico, serán objeto de liquidación definitiva a la finalización del ejercicio, de acuerdo con los datos reales relativos a los ingresos procedentes de la recaudación por tributos concertados y demás elementos considerados para su determinación.

Artículo 69.- Participación en los tributos no concertados.

La participación de los municipios y demás entidades locales en los ingresos por tributos no concertados se realizará de conformidad con lo dispuesto en el Concierto Económico y la normativa específica que sea de aplicación.

TÍTULO VIII

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 70.- Procedimientos sancionadores.

1.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sectorial, las ordenanzas locales podrán prever, por la comisión de infracciones administrativas contra las mismas, sanciones consistentes en: a) multas; y b) prohibiciones, por tiempo razonable y proporcionado, en ningún caso superior a seis meses, del ejercicio de actividades, incluso de las autorizadas, comunicadas o registradas, del acceso a instalaciones, dotaciones o equipamientos, y de la utilización de servicios públicos locales, siempre que esta respuesta punitiva sea más adecuada al bien jurídico atacado y a la gravedad de la lesión o del riesgo que la conducta o el hecho comporte.

2.- Cuando se trate de infracciones en el ámbito de la convivencia ciudadana, también podrán imponerse, previo consentimiento expreso de la persona afectada, sanciones consistentes en medidas comunitarias de carácter reeducador o de resocialización, de acuerdo con lo que se establezca en las ordenanzas municipales. Estas medidas podrán consistir en trabajos en beneficio de la comunidad o en la asistencia a cursos de formación o sesiones individualizadas, así como en la participación en procesos de mediación o de resolución complementaria de conflictos. La imposición de cualquier sanción a través de medidas comunitarias deberá respetar los principios del derecho sancionador y ser proporcionada a la gravedad de la infracción y a los fines que se pretendan alcanzar.

3.- Las ordenanzas municipales podrán prever la sustitución de las multas, previo consentimiento de la persona afectada, por trabajos de valor equivalente para la comunidad local y proporcionales a la gravedad de la infracción, cuando así lo acuerde motivadamente, de acuerdo con los principios del derecho sancionador, el órgano competente para imponer la sanción.

Artículo 71.- Legitimación a las asociaciones de municipios vascos para la negociación colectiva.

1.- Las asociaciones de municipios vascos de acuerdo con lo previsto en la legislación básica tienen legitimación para la negociación colectiva de las y los empleados públicos de los municipios vascos y demás entidades locales.

2.- Los municipios vascos podrán adherirse, mediante acuerdo adoptado al efecto, con carácter previo a la negociación colectiva que lleven a cabo las asociaciones de municipios vascos. En tal caso, los acuerdos alcanzados por esas asociaciones obligarán, desde su suscripción, a los municipios o entidades locales adheridas.

3.- Los municipios vascos podrán adherirse sucesivamente a la negociación colectiva que haya realizado la asociación de municipios vascos y a los acuerdos adoptados a través de la misma.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.- Asociación de municipios vascos más representativa.

1.- A la asociación de municipios vascos con mayor implantación en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma le corresponderá la representatividad pública en el plano institucional de Euskadi en todos los ámbitos que así se determine.

2.- Dicha asociación de municipios ejercerá, en todo caso, las funciones que, en su caso, se le puedan conferir de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.

3.- Para la determinación de la asociación de municipios vascos con mayor implantación, a los efectos de esta Ley, se estará a los criterios de número de municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco asociados y la población total de los mismos, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Régimen jurídico del personal funcionario de administración local con habilitación de carácter estatal.

Hasta la entrada en vigor de la normativa autonómica de función pública de desarrollo de la disposición adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, el régimen jurídico del personal funcionario de administración local con habilitación de carácter estatal será en la Comunidad Autónoma del País Vasco el actualmente vigente, teniendo en cuenta las siguientes normas:

1. Los nombramientos como personal funcionario de quienes hayan superado las pruebas selectivas de acceso a las distintas subescalas que componen la escala del personal funcionario con habilitación de carácter estatal se hará por orden del Consejero o Consejera del Departamento competente en materia de función pública.
2. En las declaraciones de situaciones administrativas y de cuantas incidencias afecten a su carrera profesional se formalizarán mediante resolución del director o directora de función pública siempre que la competencia no esté atribuida a otro órgano.
3. Son órganos competentes para la iniciación de expedientes disciplinarios:
 - a) Quien ostente la alcaldía o presidencia de la entidad local, en todo caso, o la autoridad que, por delegación de aquel ostente la jefatura directa del personal. La entidad local podrá solicitar de la dirección de función pública de la Administración autonómica el nombramiento de instructor o instructora del expediente disciplinario si careciera de medios personales para su tramitación.
 - b) La dirección de la función pública de la administración autonómica cuando se trate de faltas cometidas en una entidad distinta de aquella de la que se encuentre prestando servicios, siempre que ambas sean de la Comunidad Autónoma del País Vasco, o cuando por la gravedad de los

hechos denunciados, pudiera dar lugar sanción de destitución del cargo o de separación del servicio.

4. Son órganos competentes para la imposición de sanciones por faltas graves o muy graves al resolver el expediente disciplinario:
 - a) El Consejero o la Consejera competente en materia de función pública, cuando se trate de imponer sanciones que supongan la destitución del cargo o la separación del servicio; así como en el supuesto previsto en la letra b) del número anterior.
 - b) El Pleno de la entidad local, cuando se trate de sanciones no comprendidas en el párrafo anterior.

Segunda.- Vigencia del Registro de Administración Local de Euskadi.

Hasta tanto no se ponga el funcionamiento el Registro de Entidades Locales previsto en el artículo 5º de esta Ley, seguirá vigente el Registro de Administración Local de Euskadi regulado por el Decreto 383/1987, de 15 de diciembre.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

1.- Se consideran derogadas las siguientes disposiciones normativas:

- a) El Decreto 326/1994, de 28 de julio, por el que se Crea el Consejo Municipal de Euskadi.
- b) El Decreto 364/1987, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Procedimiento para la Adopción o modificación de Signos distintivos de los entes locales.
- c) El Decreto 271/1983, de 12 de diciembre, por el que se determina el Procedimiento para el Cambio de Nombre de los Municipios del País Vasco.

2.- Quedan asimismo derogadas cuantas disposiciones legales y reglamentarias se opongan a lo previsto en la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Modificaciones de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos.

Uno.- Funcionamiento del Consejo Vasco de Finanzas Públicas.

Se añade un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 28 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, con el siguiente contenido:

“El Consejo Vasco de Finanzas Públicas se entenderá asimismo constituido a los efectos del ejercicio coordinado con la Hacienda General del País Vasco de la actividad financiera del conjunto del nivel institucional municipal de Euskadi y su sector público, especialmente para la aprobación de la metodología para la determinación de los recursos y la fijación del coeficiente en que participará el nivel municipal en los tributos concertados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Municipal de Euskadi, e igualmente a los efectos del ejercicio de la función prevista en el artículo 67 de la misma Ley.”

Dos.- Participación de los municipios vascos en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas.

Se añade un párrafo al número 4 del artículo 28 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, con el siguiente contenido:

“También se reunirá el Consejo a petición de cualquiera de las y los representantes del nivel municipal para los asuntos de su interés.”

Tres.- Se añade un apartado nuevo al artículo 28 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, con el siguiente contenido:

“10. No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 5 de este artículo, en los términos que a continuación se indican, se incorporarán al Consejo Vasco de Finanzas Públicas tres representantes de los municipios vascos designados por la asociación de municipios vascos con mayor implantación. A efectos de garantizar la pluralidad política de la representatividad de los ayuntamientos vascos, las referidas designaciones deberán recaer sobre miembros de las tres fuerzas políticas con mayor implantación en cuanto a número de votos en las elecciones

municipales en la Comunidad Autónoma, que deberán tener en todo caso la condición de concejal o concejala electa.

Las y los representantes municipales asistirán al mismo con voz pero sin voto cuando se traten asuntos que no les afectan directamente, pasando a actuar como miembros de pleno derecho cuando se trate de la aprobación de la metodología para la determinación de los recursos y la fijación del coeficiente en que participará el nivel municipal en los tributos concertados dispuesta en el artículos 66.2, así como para el ejercicio de lo previsto en el artículo 67 de la Ley Municipal de Euskadi y, en cuanto afecte directamente a los municipios, en el número tres de la disposición adicional segunda de esta ley.

Cuando las y los representantes municipales intervengan con voz y voto, para la adopción de acuerdos será preceptiva la aprobación de los mismos por mayoría absoluta, siempre que dicha mayoría incluya al menos una persona representante de cada nivel institucional”.

Cuatro.- Se añade un apartado nuevo al artículo 28 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, con el siguiente contenido:

“11.- El Consejo podrá solicitar asesoramiento y recabar los datos que considere necesarios de los municipios vascos y de la asociación de éstos con mayor implantación. Los citados municipios y asociación están obligados a facilitar datos y demás información en los mismos términos que los previstos para la Administración de la Comunidad Autónoma para las diputaciones forales en los números anteriores de este artículo”.

Cinco.- El número 1 de la disposición adicional segunda de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, queda redactado como sigue:

“1. Las diputaciones forales, en el ejercicio de las facultades de tutela financiera sobre los municipios de sus respectivos territorios, distribuirán entre los mismos su participación en la recaudación por tributos concertados de conformidad con lo dispuesto en la Ley Municipal de Euskadi”.

Segunda.- Puesta en funcionamiento del nuevo sistema.

En cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, en el plazo de dos meses desde su entrada en vigor, se convocará al Consejo Vasco de Finanzas Públicas para la designación de los nuevos consejeros y consejeras municipales y para la aprobación de una nueva propuesta de metodología de distribución de recursos, en los términos previstos en el artículo 22.8

de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, en cumplimiento de esta Ley. La nueva metodología deberá ser de aplicación en el siguiente ejercicio presupuestario, con independencia del tiempo que reste de vigencia a la actual.

Tercera.- Elaboración del reglamento del Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales.

En el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley, se constituirá un primer Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales, compuesto por seis miembros, tres designados por la asociación de municipios vascos con mayor implantación, en representación de los municipios vascos, en los términos que se establecen en el artículo 41.3 de esta Ley, y otros tres por la Presidencia del Gobierno Vasco. Este primer Consejo tendrá como función la elaboración y aprobación, en el plazo de dos meses, del reglamento del Consejo.

Cuarta.- Habilitación para desarrollo y ejecución.

Se autoriza al Gobierno Vasco para, en el ámbito de las competencias autonómicas, dictar las disposiciones reglamentarias para el desarrollo de la presente Ley.



TEXTO DEL PROYECTO DE LEY EN EUSKERA /
LEGE PROIEKTUAREN TESTUA EUSKARAZ.

PROYECTO DE LEY MUNICIPAL DE EUSKADI.
EUSKADIKO UDAL LEGEAREN PROIEKTUA

EUSKADIKO UDAL LEGEAREN PROIEKTUA

ZIOEN AZALPENA

ZIOEN AZALPENA

I.-

Euskadiren instituzionalizazio-prozesua, autogobernua berreskuratu zenetik hogeita hamar urte baino gehiago igaro diren arren, bukatu gabe dago oraindik. Izan ere, Autonomia Erkidegoari eta foru-administrazioei dagokienez, amaituta zegoen prozesua, baina, oraindik ere, Euskadiko Udalen Legea geratzen zen onartzeko.

Planteamendu hori aintzat hartuta, Euskadiko Udalen Legea beharrian objektiboa izan da, zalantzan jarri ezin dena. Euskadin, gaur egun, tokiko araudi-esparrua nahiko mugatua dela esan daiteke. Egia da, hala ere, botere politikoa banatzeko daukagun sistema dela-eta, lurralde historikoek onartutako foru-arauek tokiko esparruarekin lotutako arlo asko arautzen dituztela, eta badirela, era berean, Eusko Jaurlaritzak bere sasoian onartutako erregelamendu mailako arau gutxi batzuk. Halaber, egia da Eusko Legebiltzarrak legegintza-lan nabarmena egin duela hainbat sektoretan, eta horrek eragin handia izan duela udalen eskumenetan (polizia, hirigintza, ingurumena, gizarte-zerbitzuak, etab.).

Hala eta guztiz ere, beharrezkoa da, zalantzarik gabe, udal-gobernuaren espazioa arautuko duen arau-esparrua. Beraz, Euskadiren barne-antolaketa osatzeko, behar-beharrezkoa zen Udalen Legea onartzea, erakunde erkideen, lurralde historikoetako foru-organoen eta udalen arteko erakunde-eraketarako prozesua ixteko.

Gainera, onartu egin behar da behingoz EAEko udalak Euskadiko erakunde-egituran jarduten duten oinarrizko hiru gobernu mailetakoko bat direla, eta, beraz, lurraldeko herri-agintea direla ondorio guztietarako. Beharrezkoa zen, ondorioz, erakundeen artean dagokion lekua egitea EAEko udalei, horrela, udalek aukera izan dezaten —erakundeetan parte hartzeko lege honetan ezarritako organoen bidez— beren herritarrei zuzenean eragiten dieten eta udal-eskumenak baldintzatzen dituzten politika publikoak diseinatzeko eta gauzatzeko. Udal-autonomiaren defentsa eta bermea, era berean, euskal udalen beharrian objektiboak dira, eta arau-esparru honek zentzuz onartzen du hori.

Autonomia Estatutuaren 10.4 artikuluan onartzen denez, Autonomia Erkidegoak eskumen eskusiboa dauka tokiko gobernu mailari dagokion erakunde-esparruan, Estatuak arlo horretan eman ditzakeen oinarrizko

legeen kalterik gabe. Baina Euskadiko erakunde-sarean, Konstituzioaren eta Estatutuaren arabera, lurralde historikoek posizio berezia daukate, eta, ondorioz, gure botere politikoaren barne-antolaketan, foru-eskumen batzuk tokiko esparruaren arlo jakin batzuetan sartzen dira eta udalerrien araubide juridikoaren alderdi garrantzitsuei eragiten diete. Izan ere, horrela dator jasota Autonomia Estatutuan (37.3 artikulua), eta berariaz onartzen du hori Autonomia Erkidego Osorako Erakundearen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute-Erakundearen arteko Harremani buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legeak. Eta, jakina, foru-eskumenean barruan dagoen tokiko esparru hori aintzat hartu behar du Eusko Legebiltzarrak, Euskadiko Udalen Legea egin eta onartzean.

Beraz, arlo honetan lurralde historikoei dagozkien eskumenean kalterik gabe, Euskadiko Udalen Legearen helburua da —tokiko autonomiaren printzipio konstituzionalari garrantzia berezia emanez— udalen gobernu mailarentzat erabaki politikoak hartzeko espazio zabalak gordetzea. Horrek nahitaez dakar Autonomia Erkidegoko botereak eta foru-botereak udalen erakunde-esparruan esku hartzeko ahalmenei muga zehatz batzuk jartzea.

II.-

Helburu hori lortzeko eta EAEko erakunde-sarean udalerrien posizioa bermatzeko, Udalen Legea araugintza-politikako helburu batzuen inguruan egituratu da. Helburu horiek, zeharkakoak direnez, zuzenean eragiten dute edukian, eta Legea aplikatzeko orduan gidari izan behar dute.

Udalen Legearen lehen helburua da udalaren (erakunde gisa hartuta) eta herritarren arteko elkarrizketa hobetzea, bai eta euskal herritarren bizikaltatearen garapen iraunkorra bultzatzea ere. Udalerriak —eta zehatzago udalak— dira herritarrengandik hurbilen dauden erakundeak, eta, beraz, herritarren beharrez ondoen jabetzen direnak. Herritarren beharrez behar bezala erantzuteak eta herritarren bizikaltate arazoizkoa bermatzeak ematen diote legitimazioa udalerriari erakunde gisa. Eta erantzukizun instituzionalak (eskumena) banatzeko sistema argia eta zehatza ezarri baino ez da lortuko hori. Era berean, horretarako, udalak finantzatzeko sistema egokia ezarri behar da, udalen erantzukizunak zuzen gauzatu ahal izateko eta tokiko zerbitzu publikoak behar bezala eskaini ahal izateko.

Euskadiko Udalen Legearen bigarren helburua udal-autonomia bermatzea da. Horretarako, autonomia horren aitortze formalak egiteaz gain, beharrezkoa da erabat bermatzea autonomia hori, euskal udalek benetako ahalmena izan dezaten, udalei dagozkien gaiak eta arazoak oso-osorik

beren erantzukizunpean antolatzeko eta kudeatzeko. Hori dela eta, legeak udal-autonomia bermatzeko sistema zehatza egituratu du, ohartarazpen mekanismo bat sartuta, Tokiko Autonomiaren Europako Gutunean jasotako printzipioen irakurketa behin-behineko egokia eginez (XXI. mendearen gainean proiektatuta). Hori, zalantzarik gabe, tokiko autogobernua indartzeko orduan, Espainiako estatuan egin den esperientzia aurrendarietako bat da.

Udalen Legearen hirugarren helburua da euskal udalei dagokien lekua ematea euskal botere publikoen artean. Beraz, kontua da udalerria printzipio demokratikoaren arabera osatutako lurraldeko herri-agintea dela aitortzea. Eta udalerrriaren legitimitatea eta kalitate demokratikoa, Autonomia Erkidegoko edo lurralde historikoetako organo eta erakundeak eratzeko behar den bestekoa da gutxienez.

Printzipio demokratikoa, beraz, EAEko udalen egituraketaren oinarrian dago, eta, gainera, udalek herritarren partaidetzarako hainbat baliabide dituzte, dagozkion hauteskunde-prozesuen bidez osatzen den ordezkapen demokratikoko sistemaren kalitatea hobetzen lagundu ahal izateko.

Laugarren helburua (geroago garatuko da zehatzago), zalantzarik gabe, udalerriei ahalmen zabalak ematea da, eskumen propioen sistema batean islatuko direnak; udal-autonomia bermatzeko gutxieneko estandarra izango baita hori. Edo, beste era batera esanda, kontua da udal-eremua, Euskadin, behar bezala zedarritutako botere politiko gisa eratzea, jarduera esparru zehatza emanez, eta beste gobernu mailek ez dezatela izan nahieran udalaren esparru horretan unean-unean eta ustekabeen sartzeko aukerarik.

Eta, azkenik, bosgarren helburua indar-ideia honetan oinarritzen da: EAEko udalerriek finantziazio egokia eta behar bestekoa izan behar dutela, udalerrien eskumenak zuzen gauzatu ahal izateko. Horrela, udal-finantziazioa, udalen berezko eskumenekin batera, Euskadiko Udalen Legearen ardatz bilakatu da. Udal-finantziazioa bermatu gabe, ezinezkoa da zuzentasunez udal-autonomiaz aritzea. Ildo horretatik, nabarmentzekoa da Euskadiko Udalen Legea, beste lege autonomiko batzuk ez bezala, edo tokiko arloan Estatuak eman duen oinarritzko legeria ez bezala, udal-esparru instituzionalaren lege integrala dela (arlo horretan lurralde historikoetako foru-organoei dituzten eskuduntza garrantzitsuen kalterik gabe); izan ere, udalen berezko eskumenak arautzeaz gain, finantziazio arloan araugintza-erabaki oso garrantzitsuak hartu dira bertan.

Udalen Legea, beraz, funtsezko elementua izango da, EAEko erakunde-sistemaren muin-muineko osagaia, eta, ondorioz, arlo horretan daukan zeregin garrantzitsua dela-eta, Euskadiren instituzionalizazio-prozesua ixten duen legetzat hartu beharko da.

Ondorioz, Udalen Legea eduki instituzional argia daukan legea da, eta Autonomia Estatutua bera garatuz, Lurralde Historikoen Legean ezarritakoa osatzen du (eta, punturen batean, zuzendu edo zehaztu ere egiten du).

III.-

Udalen Legeak, hasieran, atariko titulu bat dauka, hurrengo zazpi tituluak zazpi gai zehatzi buruzkoak dira, eta, ondoren, *beste xedapen batzuk* izeneko titulu orokor bat dator. Azkenik, xedapen gehigarri bat, xedapen iragankor bi, xedapen indargabetzaile bat eta lau azken xedapen ditu.

Atariko tituluan, xedapen orokor batzuek legearen ezaugarriak, legearen helburuak, arau-esparru berri hau zein printzipiotan oinarritzen den, toki-erakunde ezaugarriak eta erakunde horien erregistro administratiboa lantzen dituzte, haien erregistroko publizitatea egite aldera. Zalantzarik gabe, Autonomia Erkidegoak Estatutuan aitortutako eskumenak ditu tokiko gobernu-sistema arautzeko, eta, zehatzago, udalerrak arautzeko, Autonomia Estatutuaren 10.4 artikuluan ezartzen denez.

Egia da Erkidegoaren eskumena mugatuta dagoela; batetik, toki-araubidearen legerian ezarritakoak edo ezar daitekeenak mugatzen du, eta, bestetik, lurralde historikoetako foru-organoei tokiko esparruko hainbat alderdi garrantzitsuren gainean dituzten eskumenek mugatzen dute, Estatutuaren 37.3 artikuluan eta Lurralde Historikoen Legean ezarritakoarekin bat etorritik. Eskumenen muga bikoitz horrek ez du, ez, errazten EAEko legegileak esparru hau eratzeko duen zeregina. Dena dela, aipatzekoa da Udalen Legeak erabat errespetatzen dituela Estatuko oinarrizko legeria —tokiko autonomiaren gutxienezko estandar gisa hartu behar da legeria hori, eta lege honen bidez puntu batzuk garatu edo indartu baino ez dira egiten— eta lurralde historikoetako foru-organoen berezko eskumenak, araudi honetan behar bezala errespetatzen baitira.

Horrela, bada, erakunde erkideek esparru instituzional honetan dituzten eskumenak garatzen dituen legea da hau. Puntu horretan, EAEko legegileak ondo daki, eskumenen kanpoko eta barneko banaketa kontuan hartuta, legegile mugatua dela. Hori dela-eta, Autonomia Erkidegoak —zentzu hertsian ulertuta— eskumenak dituen puntuetan baino ez du jarduten legegileak. Beraz, gero, foru-botere araugileak, foru-arauen

bidez, bere eskumenak gauzatu beharko ditu (orain arte horrela egin izan du) edo, egingarri den kasuetan, lege honetan ezarritako eskumenak garatuko ditu.

Printzipioei dagokienez, legean printzipio-zerrenda zehatza jaso da. Lehenengo eta behin, udal-autonomiaren printzipioa dago; zalantzarik gabe, tokiko autonomiaren printzipioa ondoen adierazten duena da, eta printzipio demokratikoaren arabera udal-autogobernuak daukan dimentsio politikoaren bidez gauzatzen da. Bigarrena finantza-nahikotasunaren printzipioa da; berariaz jasota dago Tokiko Autonomiaren Europako Gutunean, eta udalerriek beren eskumenak gauzatzeko behar dituzten baliabideak izateko eskubidean islatzen da. Printzipio horiekin batera, autoantolaketa-printzipioa, hurbiltasun-printzipioa, elkartasun- eta jasangarritasun-printzipioa eta herritarrek tokiko zerbitzu publikoetara jotzeko berdintasunaren printzipioa azaltzen dira.

Baina zerrenda hori osatu gabe egongo litzateke, printzipio horiek eskumenen betearazpenari nola eragiten dioten zehaztu ezik. Eta Udalen Legeak, hain zuzen ere, arlo horretan jasotzen du finantza-nahikotasunaren printzipioak eskumenetan duen eragina, bai eta subsidiarotasun-printzipioak, proportzionaltasun-printzipioak eta bereizte-printzipioak ere, oso garrantzitsuak baitira arauak ezartzeko ahala gauzatzeko orduan (EAEko legegileak ahal horiek gauzatzeko orduan eta foru-botere araugileak ahal horiek gauzatzeko orduan), arau-xedapen horien gainean, hala badagokio, egin daitekeen kontrol jurisdikzionalari dagokionez.

Udalerria eta udal-autonomia arautzen dira I. tituluan. Dударik gabe, EAEko tokiko gobernuaren sisteman, lurralde historikoen berezitasuna dela-eta, udalerria da toki-erakunde nagusia. Titulu horren hasieran –eta Tokiko Autonomiari buruzko Europako Gutunean ezarritakoaren arabera– definitzen da noraino heltzen den udal-autonomia, zeinak, betiere, udalerraren ardura diren gai publiko guztien antolamendua eta kudeaketa hartzen dituen. Orobat, lurralde historikoek eredu instituzionalean duten eginkizuna zehazten da, oinarrizko legerien arabera, udalek berez dituzten eskumenen gauzapena indartzeko balio baitute. I. titulu horretan, era berean, lurralde historikoek udalerrari buruzko hainbat alderditan dituzten eskumenak zehazten dira.

II. tituluaren xedea auzotarren estatutua da. Estatutu hori zenbait eskubide eta betebeharretan banatzen da, bai eta herritarrek informazioa jasotzeko eta parte hartzeko eskubideari buruzko printzipioetan eta arauetan ere. Herritarren betebeharren edo erantzukizunen atala izan da, hain zuzen, gutxien garatu ohi dena gure toki-legerian; hala ere,

auzotarrek udalerriko partaide izatearen sentimendua areagotu egiten da, herritarrak diren aldetik dituzten erantzukizunak eta herritartasunaren ideiarekin batera doazen balio zibikoak bere gain hartu ahala. Eskubideen katalogoa ere legearen xedea da, eta hori egiterakoan, Europako Kontseiluak azken urteotan gaiari buruz onartu dituen gomendioak hartu dira kontuan (Eskualdeko eta Tokiko Botereen Batzarra). Baina, begibistakoa denez, kasu bietan (eskubideak eta betebeharrak) ulertu behar da lege honek osatu egiten duela, eta inola ez baztertu, oinarrizko legeetan ezarritakoa. Orobat aurreikusten da EAEko udalek eskubideen eta betebeharren gutunak onartzea, hala badagokio, Espainiako, Europako eta munduko beste leku batzuetako zenbait hiritan egin duten bezala.

II. tituluko II. kapituluaren xedea da, berriz, zenbait printzipio eta erregela arautzea, udal-jarduera dela-eta, auzotarrek informazioa jasotzeko eta parte hartzeko duten eskubidearen gainean. Lege honek oinarri dituen irizpide orokorrak dira, alde batetik, toki-gobernuak gardena izan behar duela bere jarduerari dagokionez, eta, beste aldetik, hein handienera gai hori udalak berak arautu behar duela onartzea, horretarako, arauak ezartzeko eta bere burua antolatzeko dituen ahalak baliatuz. Herritarrek parte hartzea toki-gobernamenduaren gakoetariko bat da, eta, horrenbestez, partaidetza balia dezatela bultzatu beharra dago. Nolanahi ere, organo eskudunek hartu behar dituzte erabaki politikoak, horiek erantzuten baitute politikoki eskumenok zuzen edo oker baliatu izateagatik, hala kontrol-tresnen bidez nola hauteskunderen emaitzen bidez eta azken horiek ematen duten legitimitate demokratikoaren bidez. Udalen Legeak, beraz, herritarren partaidetza sendotzea du abiapuntu, batez ere informazioaren eta komunikazioen teknologien arloan; baina, azaldu den bezala, hipotesi honetan oinarritzen da: udalerriek berek aukeratu behar dituzte partaidetza hori arautzeko tresnak eta bideak.

III. tituluaren bestalde, udalen antolaketaren alde jakin batzuk garatu nahi dira, hain zuzen ere, Euskadiko toki-gobernua osatzen duten erakunderen kalitatea hobetzera zuzenduta egonda ere oinarrizko legerian jaso ez direnak. Hemen ere abiapuntua xume-xumea da: Estatuko arauen bidez asko garatu den gai hori dela-eta, oinarrizko legeen egileek aurreikusitakoa alde batera utzita, EAEko legegileak oso ondo daki udalerriek berek izan behar dutela aurreikuspen horiek garatzeko berariazko esleipena, arauak egiteko duten ahalen bitartez. Dena den, aukera gisa, eta, edonola ere, orientazio gisa, beste zenbait aurreikuspen jasotzen dira, xede bakar batez: EAEko udalen antolamendu osagarriaren garapena bultzatzea. Horretaz gain, III. titulu horren lehenengo kapituluak agindu bana jasotzen du, biztanle-kopuru handiko

udalerrietarako eta biztanle-kopuru txikiko udalerrietarako (kontzeju irekia) aurreikusten diren araubide bereziei buruz.

II. kapituluan, berriz, antolamenduari dagokionez bestelako kontu praktikoak landu nahi dira, hain zuzen ere, udalerrri txikietan eta beste toki-erakunde batzuk bilduta edo elkartuta sortutako toki-erakundeetan sortzen diren kontuak. Batzuetan, udalerrri txikiek zenbait zerbitzu emateko zailtasunak dituzte, dena delako zerbitzua emateko lanaldi osoko lanpostu bat bete beharrik ez dagoenean, eta, horregatik, funtzionarioentzat lanaldi partzialeko lanpostuak sortzeko aukera ezartzen da. Beste toki-erakunde batzuk bilduta edo elkartuta sortutako toki-erakundeek beren burua antolatzeko baliabideen aukera egokia izan behar dute, lanean hasi berriak direnean batez ere, eta, horretarako, lan-kontratuko langileentzat lanpostuak gordetzeko aukera ematen zaie, betiere lanpostuotan agintea erabili behar ez bada.

III. kapituluaren xedea da oinarrizko legeetan ezarritakoa osatzeko arauak ezartzea, udal-ordezkarien estatutuari dagokionez; nolana ere, arau horiek oso mugatuak dira eginkizunei dagokienez. Arau horrek ere oinarrizko legerian ezarritakoa osatzen du. Izan ere, zalantzarik gabe, Estatuko legegileari dagokio arautzea, printzipio eta arau erkideei dagokienez gutxienez, udal-ordezkarien estatutuaren arloa, bai eta toki-gobernuaren egoitzan izaten den gehiengoan eta gutxiengoan arteko jokoarena ere, eta, horretarako, oinarrizkoa dena definitu behar du. Horrela, gaur egungo oinarrizko legeriak ezarritako ordezkarien estatutua osatze eta hobetze aldera, zenbait arau aurreikusten dira ordezkarien eskubide ekonomikoei eta oposizioko zereginak errazteari buruz, bai eta udal-talde politikoei buruz ere.

IV.-

IV. tituluak gai garrantzitsua arautzen du: udalen eskumenak. Kasu honetan, Udalen Legeak EAEko udalerrriak politikan jarduteko adinez nagusizat jotzearen alde egiten du, Tokiko Autonomiaren Europako Gutunean adierazitakoaren ildotik. Hori hala izanik, testu garrantzitsu horretan ezarritakoaren ildotik, eskumen publikoak, oro har eta lehentasunez, herritarrengandik gertuen dauden aginteei esleitu behar zaizkie, eta, gainera, normalean, udalen eskumen horiek erabatekoak eta osoak behar dute. Horrez gain, gobernuaren beste instantzia bati esleitu ez zaizkion eskumen guztiak gauzatu behar dituzte EAEko udalek, beren erantzukizunpean erabat, betiere auzotarren premiei erantzutera zuzentzen badira.

Udalen eskumenak, lege honen arabera, udalerrarenak dira. Udalen Legeak toki-autonomiaren gutxienerako estandar bat ematen die EAEko udalerriei, zeina lege sektorialek ondoren hobetu ahalko duten.

Ezbairik gabe, EAEko legegileak, arlo horri edo sektore material jakin batzuei buruz esleitu zaizkion eskumenak baliatuz, bere eskumenen helmena mugatzeko aukera ere izango du, eta betiere salbuespen gisa. Baina, neurri hori hartzekotan, betiere justifikatu beharko du subsidiariorotasun-printzipioarekin eta proportzionaltasun-printzipioarekin bat datorrela.

Legeak argiro gehitzen du eskumenen klausula orokor bat, izaera bereko beste lege batzuetan egindakoaren antzera, eta Tokiko Autonomiaren Europako Gutunak berak ezarritakoari jarraiki, testuak ezartzen baitu toki-erakundeek, betiere legearen esparruaren barruan, beren ekimena gauzatzeko erabateko askatasuna dutela, beren eskumenetik kanpo ez dagoen edo beste aginte bati esleitu ez zaizkion gai guztietan.

Bereziki garrantzitsua da legeak jasotzen duen EAEko udalen eskumenen zerrenda. Zerrendaren ideia nagusia da, alde batetik, udalek arlo material jakin batzuei buruz dituzten ahal orokorrak ezartzea, eta, bestalde, eskumenen gutxienerako estandarra bermatzea beti, eskumen horiek arlo material espezifiko bakoitzaren barruan zenbait azpigaitan eragiten dutela.

Eskumen-kontuetan udal-autonomia bermatze aldera, eskumenen zerrendak zehazki adierazten du zein gaitan esku hartzen ari diren udalerrak, gai horiei buruz dituzten zenbait ahal erabiliz. Horrenbestez, eskumen horietariko asko dagoeneko aurreikusita daude aplikatzekoak diren eta indarrean dauden legeetan; beste gai batzuei dagokienez, berriz, zehaztu egin da zein arlotan zuten eragina udalek baliatzen dituzten ahalek. Udalen Legea toki-erakunde horien eskumenen gutxienerako estandarra bermatzen saiatzen da, udalen eskumenak antolatze sistemak horren bidez, betiere udal-gobernuen segurtasun juridikoa sendotze aldera, beren politikak garatzeko orduan. Halaber, EAEko udalei eskumenok behar bezala erabiltzeko behar duten finantziarioa ematen ere ahalegintzen da.

Ildo horretatik, funtsezkoak dira legean udalen eskumenen gainean ematen diren arauak, bai eta udalen eskumenen eta nahitaezko zerbitzuen artean egiten den bereizketa ere. Izan ere, udalen eskumen zerrenda luze horrek ez du esan nahi udal guztiek eskumen guzti-guztiak erabili behar dituztenik, eta, halaber, ez du zehazten eskumenak zein mailataraino baliatu behar diren. Aitzitik, zerrenda horren bidez zenbait

gaikuntza-titulu onartzen dira, udal-gobernuek politika publiko jakin batzuk lehenesteko, kasuan kasuko gobernu-taldeek bultzatzen dituzten jarduera-programen arabera. Eskumenak eskualdatzeari eta eskuordetzeari buruzko gutxieneko arauak ere jasotzen ditu legeak, eta arau horien aplikazioa bereizte-printzipioari lotu dakioke. Toki-erakundeen arteko eskumen-gatazken ebazpena arautzen duen agindu bat ere sartzen du. Amaitzeko, azken kapituluan, udalen nahitaezko zerbitzuen araubideari eta zerbitzuok ematek salbuesteko arau labur batzuk eransten dira.

Bereziki inportantea da, halaber, legearen V. tituluan araututakoa, bertan ezartzen baita udalek parte hartuko dutela Autonomia Erkidegoko erakundeek egiten dituzten politika publikoak prestatzen. Partaidetza hori benetakoa izan dadin, Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseilua sortzen da, kide anitzeko organo gisa sortu ere, EAEko udalen eta erakunde horien arteko lankidetzaharremanak gauzatzeko helburuz. Kontseiluan kide kopuru berdina izango dute EAEko administrazioko eta udaletako ordezkariak; autonomia organikoa eta funtzionala izango du, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoari atxikita egongo da, aurrekontuen aldetik.

Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren baitan, Politika Publikoen Udal Batzordea sortzen da. Batzorde horretan, udalerrriak baino ez daude ordezkaturik, eta ohartarazteko mekanismo baten moduan jokatzeko du eginkizun nagusia. Hala, lege-aurreproiektuak edo arauzko erregelamenduen xedapenen proiektuak begiratu dituzte, eta alde aurretiko txostena egingo, aurreproiektu edo proiektuok toki-autonomiara egokitzen diren aztertze aldera, eta, hala badagokio, egin beharreko aldaketak ezartze aldera. Horrela, botere publikoen jardueraren aurrean udalerrien autonomia bermatzeko organo nagusia bilakatuko da Udal Batzordea. Dena den, gobernu maila horretan izapidetzen ari diren arau-jardueretan, udal-autonomiaren printzipioa urratzeko arriskuaz "ohartaraztera" mugatzen dira haren eginkizunak.

VI. tituluak hiru kapitulu ditu. Lehena udalerrriak ez diren bestelako erakundeei buruzkoa da. Lurralde historikoetako foru-organoei ematen zaizkie gai hori arautzeko ahalmenik handienak, betiere toki-erakundearen lurralde-eremuak ez badu lurralde historikoa gainditzen. Autonomia-erkidegoak arautzeko uzten dira, berriz, toki-erakundeek lurralde-eremua gainditzen duteneko kasuak. Orobat, nobedade gisa, udalerrien sareak gehitzen zaizkie; sare horiek udalerrien arazo jakin batzuetarako konponbide zehatzak eskaini ditzakete eta erakundeen arteko lankidetzarako formula malgua bihurtu daitezke. Hala da, bai, behin eta berriz esaten ari garen bezala, udalerrien arteko lankidetzaharremanak

erabat lotuta daude udal-eskumenak behar bezala gauzatzearekin; eta kasu askotan eskumenok egokiro gauzatuko direla bermatzeko lanabes eraginkor bakarrak izango dira, ezinbestez, lankidetzeta-modu horiek.

Titulu horren II. kapituluan zerbitzu publikoen kudeaketa arautzen da. Era berean, kudeatzeko moduei buruzko arauak zerrendatu baino ez dira egiten, baina berrikuntza puntual bat edo beste jasota. Dena den, kudeatzeko moduen erregulazio horren oinarria da autoantolaketako ahalekin oso lotuta dagoen gaia dela onartzea, bai eta udalerrien beren arautze-ahalekin ere.

III. kapituluan, auzo-intereseko jarduera ekonomikoetan aritzeko tokiko ekimena arautzen da, hau da, toki-erakundeen aldetiko ekimena, dela pribatuekiko lehia-araubidean, dela monopolio-araubidean.

Udalerrien finantziazioa legearen VII. tituluaren lantzen da. Arautze hori da, zalantzarik gabe, EAEko Udalen Legeak eskaintzen duen berezitasun handienetariko bat, toki-araubidea arautzen duten gainerako legeen aldean (lege estatalak zein autonomikoak); izan ere, lege horietan, eta nahiz eta eskumen gaietan oinarrituta egon, justifikazio handirik gabe, toki-administrazioaren araubide juridikoa eta tokiko finantziazioa banatu izan dira beti. Eta banaketa horrek, Estatuan, ondorio ezin txarragoak izan ditu gobernuaren tokiko maila garatzeko. EAEko kasuan, ordea, Ekonomia Itunetik ondorioztatzen diren ekonomia- eta finantza-berezitasunak direla-eta, eta Autonomia Estatutuan bertan jasotako arauak direla-eta, komenigarria ez ezik, beharrezkoa ere bada toki-finantziarioari buruzko zenbait printzipio eta arau sartzea, lurralde historikoek eremu material horren gainean dituzten eskumen garrantzitsuak berariaz aitortzearen kalterik gabe.

Aipaturiko VII. tituluak zenbait xedapen orokor jasotzen du lehenengo kapituluan, non EAEko toki-ogasunaren printzipioak aurreikusten diren, bai eta udalerrien finantziazioa baldintzarik gabekoa izango dela dioen araua ere, baldintzapeko finantziazioa zenbait betebeharrei lotuz. Horrez gain, zenbait arau sartzen ditu, besteak beste, zorpetze-araubidearen gainean.

VII. tituluaren II. kapituluaren xedea, berriz, EAEko udalerrien eta gainerako toki-erakundeen finantziazioa da. Eta gai garrantzitsu hori arautzerakoan, zentzuzko irizpide bat hartu nahi izan da abiapuntutzat, Autonomia Erkidegoko gobernu maila guztien interesak (erakunde erkideak, lurralde historikoak eta udalerrriak) adiskidetzeko asmoz; horretarako, berebiziko garrantzia ematen zaio Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluari, non maila horiek guztiek ordezkarriak izango dituzten.

Azkenik, VIII. tituluan zenbait arautze partzial jasotzen dira, udal-intereseko gaiei buruz. Lehenengo eta behin, aurretiaz legean zehaztuta egon beharra betetzeko (Konstituzioan ezartzen denez), ordenantzaren bidez definitzen diren zigor-prozeduretan aurreikusten da diruzko zehapenen orde, araua hautsi duen pertsonak ados egonez gero, erkidegoaren aldeko balio bereko lanak egitea, betiere lanok zehapenaren balio berekoak badira. Orobat zenbait aurreikuspen jasotzen dira udalerrien elkarteek negozioazio kolektiboko prozesuetan duten legitimazioari buruz.

Xedapen gehigarriaren helburua da EAEko udalerrien ordezkariak handiena duen udalen elkarteari buruz zenbait kontu arautzea; izan ere, legean eta haren garapenean ezartzen denaren arabera, elkarte horrek eginkizun garrantzitsua har baitezake bere gain, arau-esparru honetan taxututako ereduaren kudeaketa politikoan.

Xedapen iragankorrek, lehenengo eta behin, gaikuntza nazionala duten tokiko administrazioen funtzionarioen araubide juridikoaren zenbait kontu arautzen dute, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legearen bigarren xedapen gehigarria osatzeko, hala egitea beharrezkoa baita autonomia-erkidegoak bere funtzio publikoari buruzko arauetan gaia behin betiko eta osorik arautu arte; xedapen horietatik bigarrenak, berriz, oraingo Euskadiko Tokiko Administrazioaren Erroldaren indarraldia mantentzen du, lege honetan sortzen den Toki-Erakundearen Erregistroaren antolaketa- eta funtzionamendu-araubidea arautzen den arte.

Xedapen indargabetzaile bat ere sartzen da. Eta, azkenik, Lurralde Historikoen Legearen zenbait kontu zehatz aldatzen dira. Erreforma puntual horrekin, EAEko udalerrien ordezkariak Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluan lekua egin nahi zaie, legean forma tasatuan ezartzen diren gai batzuk lan ditzaten. Kontua ez da, inola ere, Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluak orain duen osaera aldatzea, organo hori betetzen ari den muin-muineko eskumenei dagokienez –izan ere, oraindik ere aipaturiko kontseiluaren osaera erakunde erkideek eta lurralde historikoek ordezkari-kopuru berdina izatean oinarritzen da–, baizik eta aipatu kontseiluari udaletako ordezkariak gehitzea, zeinek botoa eman ahalko duten gai tasatu batzuetan; eta, gainerakoetan, berriz, botoa ematerik izango ez badute ere, beren iritzia entzungo zaie organoaren eztabaida-prozesuan. Hala eta guztiz ere, udaletako ordezkariak gehituta, udalek egin ohi duten eskabide bat asebetetzen da, alegia, Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluan ahotsa izatekoa, eta, hala balegokio, botoa ere bai. Horrela ixten da, bada, prozesu luze bat, udalerriak euskal sistema instituzionalean behin betiko txertatuz amaitzen dena. Azken hiru xedapenek gai hauek

jorratzen dituzte: udalerriek Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluan parte hartzeko sistema berriaren funtzionamendua; Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren Erregelamendua eratzea eta egitea; eta Eusko Jaurlaritza gaitzea legea erregelamendu bidez garatzeko.

ATARIKO TITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.- Legearen izaera.

1.- Lege hau Euskal Autonomia Erkidegoak toki-administrazioaren esparruan dituen eskumenen barruan kokatzen da, lurralde historikoetako foru-organismoek arlo horretan dituzten eskumenen kalterik gabe.

2.- Lege honen bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldeko herri-aginteen erakunde-sarean euskal udalek duten posizioa zehazten da.

2. artikulua.- Legearen xedea.

Hona hemen lege honen xedeak:

- a) Udalen maila instituzionala, hau da, Euskadiko erakunde-multzoan duten posizioa eta protagonismoa, aitortzea.
- b) Udal-autonomia aldezte eta babestea.
- c) Udalen eskumen-araubidea ezartzea eta eskumen horiek gauzatzeko finantza-nahikotasuna bermatuko duen lege-esparrua finkatzea.
- d) Gutxieneko araubide juridikoa ezartzea, udalerrien eta gainerako toki-erakundeen antolaketari eta funtzionamenduari dagokienez.
- e) Erakundeen arteko koordinazio- eta lankidetzaren sistema bat eratzea politika publikoak diseinatu, gauzatu eta ebaluatzeko, betiere politika horiek udalek edo gainerako toki-erakundeek burutzen badituzte edota haien partaidetza eskatzen badute.

3. artikulua.- Printzipioak.

1.- Udalek araugintzan eta jarduera betearazlean printzipio hauek beteko dituzte:

- a) Udal-autonomiaren printzipioa.

- b) Araugintzako autonomiaren printzipioa.
- c) Finantza-autonomiaren printzipioa.
- d) Autoantolaketa-printzipioa.
- e) Herritarrekiko hurbiltasun-printzipioa.
- f) Elkartasun- eta jasangarritasun-printzipioa.
- g) Herritarrek tokiko zerbitzu publikoetara jotzeko berdintasunaren printzipioa.
- h) Leialtasun instituzionalaren printzipioa.

2.- Euskal Autonomia Erkidegoko organoak, beren eskumenak gauzatzean, nahitaez bete beharko dituzte artikuluko honetako 1. paragrafoan jasotzen diren printzipioak.

3.- Era berean, Autonomia Erkidegoko organoek, toki-erakundeen intereseko gaiei buruzko arauak ematen dituztenean, printzipio hauek bete behar dituzte araugintzan:

- a) Udalen finantza-nahikotasuna, esleituta dituzten eskumenak gauzatzeko.
- b) Subsidiariorotasuna, eskumen-banaketarako irizpide moduan.
- c) Proporzionaltasuna.
- d) Desberdintzea, betiere printzipio hori aplikatzea bideragarria bada kasuan kasuko udalen edo, hala badagokio, toki-erakundeen kudeaketa-ahalmena kontuan hartuta.

4. artikulua.- Toki-erakundeak.

1.- Lege honen ondorioetarako, hauek izango dira toki-erakundeak:

- a) Udalerriak.
- b) Kontzejuak eta udalerriaren azpitik dagoen zernahi tokiko lurralde-erakunde, lurralde bakoitzean dagoen foru-araudiaren arabera.
- c) Udalerrien mankomunitateak.

- d) Lege honetan edo aplikaziokoa zaien foru-araudian aurreikusitakoaren arabera eratzen diren partzuergoak.
- e) Arabako koadrilak edo beste zernahi erakunde, baldin eta tokiko lurralde-erakunde zenbait biltzen baditu, dagokion izendapen bereziarekin, lege honetan eta aplikaziokoa zaion gainerako araudian ezarritakoaren arabera.
- f) Metropoli-areak.

2.- Aurreko paragrafoan aipatzen diren erakundek nortasun juridikoa eta beren helburuak betetzeko ahalmen osoa izango dute.

5. artikulua.- Toki-erakundeen erregistroa.

1.- Udalerriak eta aurreko artikuluan aipatzen diren gainerako toki-erakundeak lege honen indarrez sortutako Euskal Autonomia Erkidegoko Toki-Erakundeen Erregistroan inskribatuko dira. Erregistro horretan egiten diren idatzoharrak Estatuko dagokion erregistroari ere jakinaraziko zaizkio.

2.- Erregistroa publikoa izango da, eta erregistroaren antolaketa- eta funtzionamendu-araubidea erregelamendu bidez arautuko da.

I. TITULUA

UDALERRIA: UDAL-AUTONOMIA

6. artikulua.- Udalerria.

1.- Udalerria Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldea antolatzeko oinarrizko toki-erakundea da.

2.- Udalerria, orobat, ordezkaritza politikoaren lehen instantzia da, eta herritarrek tokiko gai publikoetan parte hartzeko bide hurbil-hurbilekoa.

7. artikulua.- Udal-autonomia.

1.- Euskal udalerriek autonomia dute interes publikoko hainbat eta hainbat gai antolatzeko eta kudeatzeko, betiere legeak eta, hala badagokio, foru-arauak beteta.

2.- Udalerriek, nolnahi ere, beren erantzukizunen esparruan eta beren eskumenen arabera jardungo dute. Eskumenok, betiere, herritarren onerako gauzatuko dituzte.

3.- Euskadin, udal-autonomiak eduki politikoa ere izango du. Hortaz, autonomia horrek antolatze eta kudeatzeko ematen duen ahalmenak aukera emango die tokiko gobernuei zerbitzuak emate hutsetik haratago doazen berezko politikak zehazteko eta gauzatzeko.

4.- Udal-autonomiaren barruan sartzen da, edonola ere, interes publikoak udalerriaren barruan antolatzea, udalaren gobernu- eta administrazio-organoak antolatzea eta kudeatzea, udalerriko lurraldea antolatzea, tokiko zerbitzuak arautzea eta ematea, ekimen ekonomikoa, udalerriaren zerbitzura diharduten langileen esparruko politika eta kudeaketa, ondarea eta diru-bilketa eta ogasun-baliabideak administratzea eta erabiltzea.

5.- Autonomia Erkidegoko eta lurralde historikoetako herri-administrazioei dagozkien koordinazio-ahalmenek ez diote inolaz ere ekarriko galerarik edo kalterik udalerrien autonomiari.

8. artikulua.- Udalerriari lotutako aldaketak.

1.- Udalerriak sortu edo kendu, udalerriko mugak aldatu edo zedarritu, udalerrien izena edo hiriburutza aldatu, bandera, entseina edo armarria onartu edo aldatu, eta tituluak eta beste zernahi bereizgarri eman behar direnean, lurralde historikoetako foru-organoek emandako araudia aplikatuko da.

2.- Lurralde historiko desberdinetako udalerrien artean mugaketa-arazoak sortzen badira, autonomia-erkidegoko organo eskudunak ebatziko ditu. Erregelamendu bidez arautuko da prozedura, eta bertan esku-hartzea emango zaie eragindako foru-aldundi eta udalerriei.

II. TITULUA

AUZOTARREN ESTATUTUA: ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK. INFORMAZIOA ETA PARTE-HARTZEA

I. KAPITULUA

AUZOTARREN BETEBEHARRAK, ERANTZUKIZUNAK ETA ESKUBIDEAK

9. artikulua.- Auzotarren betebeharrak eta erantzukizunak.

1.- Auzotarren betebeharrak eta erantzukizunak dira:

- a) Legez aurreikusitako prestazio ekonomiko eta pertsonalen bidez, udal-eskumenak gauzaten eta udalaren zerbitzu publikoak ematen laguntzea.
- b) Udalei gorabehera pertsonalen aldaketak jakinaraztea, baldin eta, haien ondorioz, erregistroko nahitaezko inskripzio-datuak aldatu behar badira.
- c) Toki-araudia betetzea eta araudi horren aplikazioan laguntzea, eta zerbitzuak ematea eragozten, zailtzen edo asaldatzen duen edo erabiltzaile edo hirugarrenentzat arrisku ziurra dakarren edozein arau-hauste edo anomaliaz informatzea tokiko agintariak.
- d) Udal-ondarea, azpiegiturak, udal-zerbitzuak eta udal-altzariak zentzuz eta egoki erabiltzea eta haiek kontserbatzen eta zaintzen laguntzea.
- e) Espazio publikoan herritarren bizikidetzarako arauak errespetatzea eta, era berean, beste pertsonen eskubideak ere errespetatzea.
- f) Ingurumena, espazio publikoa eta hiri-paisaia zaintzea eta hobetzen laguntzea, jarrera ekologiko eta jasangarrien bitartez.
- g) Indarrean dagoen araudian, bereziki espazio publikoaren erabilerak arautzen dituzten udal-ordenantzetan, aurreikusitako beste edozein.

2.- Aurreko paragrafoan araututako betebeharrak eta erantzukizunak, b) idatz-zatian aurreikusitakoa izan ezik, udalerrian aldi baterako edo luzarorako dauden pertsonak ere bete beharko dituzte, auzotar izan ez arren.

10. artikulua.- Auzotarren eskubideak.

Honako hauek dira auzotarren eskubideak:

- a) Hautesle eta hautagai izatea, hauteskunde-legerian xedatutakoaren arabera.
- b) Tokiko politika publikoak prestatzen eta kudeatzen parte hartzea, aplikaziokoa den araudian xedatutakoaren arabera.
- c) Ingurumen eta hiri-espazio publiko egokia eta jasangarria gozatzea.
- d) Erraz iristeko moduko ingurunea izatea, desgaitasunen bat duten pertsonen joan-etorriak eta parte-hartzea ez oztopatzeko.
- e) Zerbitzu publikoak modu eraginkorrean eta berdintasun-baldintzetan eskuratzea, lege honetan eta aplikaziokoak zaizkien gainerako xedapenetan ezarritakoaren arabera. Ahalegin berezia egingo da zerbitzu

horiek genero-indarkeriaren biktima diren emakumeek erabil ditzaten eta, horiekin batera, langabetuek, desgaituek, erretiratuek, pentsiodunek eta gazteek, ekonomia-baliabiderik gabeko pertsonak eta zehaztuko diren gizarte-egoera ahuleko gainerako kolektiboek.

f) Udal-esparruan eragin dezaketen arrisku natural zein teknologikoei eta babes zibileko udal-planei buruzko informazioa jasotzea.

g) Kulturarako eskubidea eta ondare historikoko ondasunetara iristekoa.

h) Hizkuntza ofizial bietatik edozein erabiltzeko eta aukeratutakoan artatua izateko eskubidea toki-administrazioarekiko harremanetan, herritarren hizkuntza-eskubideak arautzen dituen autonomia-erkidegoko legeriaren arabera.

i) Informazioa jasotzeko eta parte-hartzeko eskubidea, titulu honetako II. kapituluan aurreikusitako moduan.

j) Udal-espediente eta -dokumentazio osoari buruzko informazioa jasotzea, eskabide arrazoitua eginez gero, eta udal-administrazioari eskabideak egitea, aplikagarri den legeriaren arabera.

k) Zerbitzu publiko bat nahitaezko udal-zerbitzua denean, zerbitzu hori emateko edo, hala badagokio, ezartzeko eskatzea.

l) Indarrean dagoen araudian ezarritako beste eskubide batzuk.

11. artikulua.- Auzotarren betebeharrak, erantzukizunak eta eskubideen gutunak.

Euskal udalerriek auzotarren eskubide, betebeharrak eta erantzukizunen gutunak onartu ahal izango dituzte ordenantza bidez, eta haietan, eskubide horiek bete ezik udalak hartuko dituen konpromisoak eta herritarren betebeharrak eta erantzukizunak ez errespetatzeak izango dituen ondorioak ere jasoko dira.

II. KAPITULUA

INFORMAZIOA ETA PARTE-HARTZEA

12. artikulua.- Auzotarren eskubidea informazioa jasotzeko eta parte hartzeko.

1.- Udalek beren jarduerari buruzko informazioa emango diete herritarrei, eta auzotar guztiek herriko bizitzan parte har dezaten sustatuko dute.

Parte-hartze hori zuzenekoa edo elkarte orokor edo sektorialen bidezkoa izan daiteke.

2.- Udalek, auzotarrekiko harremanetan, gardentasun- eta partaidetza-printzipioak beteko dituzte politika publikoak eratzeko prozesuan, gobernu onaren eta administrazio onaren printzipioak bermatzeko.

13. artikulua.- Informazioa eta bilkuren publikotasuna.

1.- Herritar guztiek dute toki-erakundearen erabakiak eta horien aurrekariak egiaztatzeko kopiak eta ziurtagiriak eskuratzeko eskubidea; betiere lege ezarritako ordainarazpenak ordainduta. Era berean, artxibategi eta erregistroak kontsultatu ahal izango dituzte, oinarrizko legerian aurreikusitakoaren arabera. Eskubide horiek ukatu edo mugatu ahal izango dira, interes publikoak hala agintzen duenean, besteren interes babesgarriagoak daudenean, edota legeren batean horrela ezartzen denean; horretarako, betiere, ebazpen arrazoitua eman beharko da.

2.- Toki-erakundeek beren web orrialdea eduki beharko dute, eta behar den bezala eguneraturik eduki beharko dute.

3.- Toki-erakundearen osoko bilkurak jendaurrekoak dira. Erakunde horiek ahalegina egingo dute osoko bilkurak grabatzeko eta beren egoitza elektronikoaren bitartez zabaltzeko. Hala ere, eztabaida eta bozketa sekretuak izan daitezke Konstituzioaren 18.1 artikuluko oinarrizko eskabideari buruzkoak direnean, betiere gehiengo osoak hala erabakitzen badu.

4.- Tokiko gobernu-batzarraren bilerak, aldiz, ez dira inoiz jendaurrekoak izango.

5.- Orokorrean, osoko bilkuraren edo gobernu-batzarraren erabakipean jarriko diren gaiak aztertzen dituzten organoen bilkurak, haien gainean irizpena eman zein haietaz aholkua emateko edo erakundearen gobernu-organoen kudeaketaren jarraipena egiteko, ez dira jendaurrekoak izango, osoko bilkurak kontrako erabakirik hartu ezean edo erakundearen erregelamendu organikoan aurreikuspen berariazkorik egon ezean. Erabaki hori, betiere, kideen legezko kopuruaren gehiengo osoz hartu beharko da.

6.- Desgaitasunen bat duten pertsonen kasuan, artikulua honetan aipatzen den bilkuren informazioa eta publizitate-araubidea bitarteko eta formatu eskuragarrien bidez emango da. Udalak edo bestelako toki-erakundeak eskubide hori bermatzeko bitarteko egokirik ez duenean, baliabide horiek

badituzten beste herri-administrazioen laguntza instituzionala eskatu ahal izango du.

7.- Artikulu honetan xedatutakoaren aplikazioa, betiere, herritarrek zerbitzu publikoetara sartzeko duten eskubidea arautzen duen legerian xedatutakoarekin bat etorritz egingo da.

14. artikulua.- Herritarren parte-hartzea eta tokiko autoantolaketako ahala.

Udalerriek, arau organikoen bidez, tokiko bizitza publikoko gaietan auzotarrek benetako parte-hartzea izan dezaten egokitutako prozedurak eta organoak ezarri eta arautu behar dituzte, bai udalerrri osorako, bai, horrelakorik egonez gero, udalerrriaren lurralde-banaketa guztietan. Herritarren parte-hartze hori ez da joango udalerriko organoen eta udalerrriaren lurralde-banaketen eskumenen kaltetan, baldin eta oinarrizko legerian eta lege honetan aurreikusita badaude.

15. artikulua.- Herri-galdeketak.

1.- Estatuko legeriarekin bat, alkateek, osoko bilkurak gehiengo osoz hala erabaki ondoren eta Estatuko gobernuaren baimenarekin, auzotarren interesarentzat garrantzi handia daukaten gaietara buruzko iritzia galde diezaiokete herriari, baldin eta gaiok udalaren eskumenekoak eta toki-administrazioaren ingurukoak badira. Toki-ogasunari dagozkion gaiez, ordea, ezin izango da galdeketarik egin.

2.- Osoko bilkuraren erabakiak argi eta garbi zehaztuko ditu proposatzen den galdeketaren baldintza zehatzak, eta haren ziurtagiria Autonomia Erkidegoan toki-administrazioaren arloan eskumena duen organoari igorriko zaio. Organo horrek, galdeketaren egokitasunari buruzko irizpena eman ondoren eta irizpen hori erantsita, Estatuko Administrazioan eskumena duen organoari bidaliko dio.

3.- Baimena lortzen duenean, udalak herri-galdeketarako deia egingo du, eta galdeketa hori hilabetetik beherakoa eta bi hilabetetik gorakoa izango ez den epe batean egin beharko da, deialdia lurralde historikoko aldizkari ofizialean argitaratzen denetik. Deialdiak xedapeneko proiektuaren –edo, bestela, kontsultagai den erabakiaren– testu osoa jasoko du; argi eta garbi adieraziko du zein den edo diren galdeketara deitutako auzotarrek erantzun behar duten galdera, eta bozketa zein egunetan egin behar den zehaztuko du.

4.- Udalak ahaleginak egingo ditu deialdia ahalik eta gehien zabaltzeko, auzotar guztiek jakin dezaten.

16. artikulua.- Herritarren ekimenak.

1.- Udal-hauteskundeetan botoa emateko eskubidea duten auzotarrek herri-ekimena baliatu ahal izango dute. Ildo horretatik, akordio- edo jarduketa-proposamenak edo ordenantza-proposamenak aurkeztu ahal izango dituzte udalaren eskumen diren gaietan, lege honetan ezartzen denaren arabera.

2.- Aurreko paragrafoan aipatzen diren ekimenak onargarriak diren ala ez udalaren osoko bilkurak eztabaidatu eta bozkatuko du, nahiz eta, gero, gaiaren arabera eskumena duen organoak izapidetu eta ebatzi ahal izango dituen. Nolanahi ere, kasuan kasuko udaleko idazkaritzaren alde aurreko txostena eskatuko da legezketasunari buruz, eta berdin kontu-hartzailetzaren txostena ere, eduki ekonomikoko eskubide eta betebeharrei eragiten badie.

3.- Herri-ekimenek herri-galdeketarako proposamena har dezakete barruan. Horrelakoetan, galdeketa-proposamena aurreko artikuluan aurreikusitako prozeduraren eta eskakizunen arabera izapidetuko da.

4.- Artikulu honetan aurreikusitako ekimenak, betiere, botoa emateko eskubidea duten udalerriko auzotarren ehuneko hamarrak sinatu behar ditu, gutxienez.

5.- Udalek erregelamendu bidez arautu ahal izango dute artikulu honetan aurreikusitako herri-ekimenak gauzatzeko prozedura.

17. artikulua.- Parte-hartzea eta informazioaren eta komunikazioen teknologiak.

1.- Toki-erakundeek eta, bereziki, udalerriek, toki-berrikuntzako politiken barruan, informazioaren eta komunikazioen teknologien erabilera interaktiboa bultzatuko dute, auzotarren parte-hartzea eta komunikazioa errazteko, agiriak aurkezteko eta administrazioko izapideak, inkestak eta, hala denean, herri-galdeketak egiteko, bai eta udalaren jarduera guztiei buruzko informazioa eskaintzeko ere.

2.- Zerbitzuetako jardueretara libreki sartzeari eta horietan aritzeari buruzko azaroaren 23ko 17/2009 Legearen aplikazio-esparruan sartutako zerbitzu-jarduera bati eta horren gauzatzeari buruzko prozeduren eta izapideen kasuan, pertsona fisiko eta juridiko zerbitzu-emaldeen prozedura eta izapide horiek leihatila bakar baten bidez egin ahal izango dituzte,

elektronikoki eta urrutitik, salbu eta egitekoa zerbitzua emateko erabiltzen den tokia edo ekipoa ikuskatzea bada.

3.- Era berean, udalek bermatu egingo dute pertsona fisiko eta juridiko zerbitzu-emaleek aukera izan dezaten leihatila bakarraren bitartez jarduera bati eta horren gauzatzeari buruzko informazioa eta formularioak jasotzeko edota agintari eskudunek beren eskabideei buruz emandako ebazpenak eta gainerako jakinarazpenak ezagutzeko.

4.- Foru-aldundiek udalerriekin lankidetzan jardungo dute, Estatuaren oinarrizko legerian aurreikusitakoaren arabera; bereziki, ekonomiarako eta kudeaketarako gaitasun nahikorik ez dutelako, artikulua honetan eta lege honen 13.2 artikuluan ezarritakoa behar bezala bete ezin dutenekin.

III. TITULUA

UDALERRIAREN ANTOLAKETA ETA UDAL-ORDEZKARIEN ESTATUTUA

I. KAPITULUA

UDALERRIAREN ANTOLAKETA

***18. artikulua.*– Printzipio orokorrak.**

1.- Euskal udalek toki-araubidearen oinarrizko legerian aurreikusitako beharrezko organoak izango dituzte, eta legeria horren eta lege honen esparruaren barruan gauzatu ahal izango dute antolaketarako araugintza-ahalmena.

2.- Nahitaezko organoen funtzionamenduak, erabakiak hartzeko araubideak eta organo horietako kideen estatutuak toki-araubidearen oinarrizko legerian eta lege honetan eta antolaketako udal-erregelamenduetan xedatutakoa bete beharko dute. Edozein kasutan, gobernu-jarduera bermatuko da, eta ordezkaritza-organoeetan gutxiengo politikoak errespetatuko dira, haien legitimazio demokratikoaren printzipioa betez.

3.- Gainerako organo osagarrietan, udalek beren eskumenak erabiliz emandako kasuan kasuko antolaketako erregelamenduetan ezarritakoa beteko dute, lege honetan aurreikusitakoarekin bat.

19. artikulua.- Biztanle-kopuru handiko udalerriak.

1.- Toki-Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 121.1 artikuluan aurreikusitako kasuetan sartuta dauden Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriei, aplikaziokoa izango zaie toki-araubidearen oinarritzko legerian aurreikusitako biztanle-kopuru handiko udalerrien antolaketako araubidea.

2.- Biztanle-kopuru handiko udalerriaren izaera eskuratzeko udalaren ekimena beharrezko den kasuetan, udal horrek dagokion osoko erabakia hartu beharko du, Osoko Bilkurako kideen legezko kopuruaren gehiengo osoz, eta haren kopia Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorrean toki-araubidearen arloko eskumena duen sailari igorri beharko dio. Sail horretako titularrak Gobernu Kontseiluari helaraziko dio lege-aurreproiektua.

20. artikulua.- Kontzeju irekiko araubidea.

1. Kontzeju irekiaren bidez jarduten dute udalerri hauek:

- a. Legezko betebeharririk izan gabe, betidanik gobernatzeko eta administratzeko araubide berezi horretaz baliatu direnak.
- b. Duten kokaleku geografikoa dela-eta, udal-interesen kudeaketa hobea edo beste egoera batzuk direla-eta araubide horretaz baliatzea komenigarri dutenak.
- c. Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoa aldatzen duen urtarrilaren 28ko 2/2001 Lege Organikoa indarrean sartu aurretik, behartuta daude araubide honetan jardutera, orain arte eta etenik gabe, araubide horretan jardun dutenak, baldin eta, korporazioa eratzeko bilkuraren ondoren, auzo-batzarra deituta, hala erabakitzen badute aho batez hiru kide hautetsiek eta auzotar gehienek.

2. Aurreko zenbakiko b) idatz-zatian aipatutako udalerriek kontzeju irekia osatzeko, botoa emateko eskubidea duten auzotarren gehiengoak hala eskatu behar du, udaleko kideen legezko kopuruaren bi hereneko gehiengoak aldeko erabakia hartu behar du, eta Autonomia Erkidegoaren Administrazioan toki-araubidearen arloko eskumena duen sailak onartu egin behar du.

3. Orain arte kontzeju irekiaren araubidean jardun duten udalerriek, artikulua honen 1. zenbakiko a) eta b) idatz-zatien arabera, araubide

orokorrera aldatu nahi badute, horri buruzko erabakia hartu behar dute, auzo-batzarren gehiengo soilez, eta Autonomia Erkidegoaren Administrazioan toki-araubidearen arloko eskumena duen sailak onartu beharko du. Araubide berria aplikaziokoa izango da hurrengo udal-hauteskundeen ondoren korporazio berria eratzen denetik aurrera.

4. 4. Kontzeju irekiko araubidean, alkateari eta hautesle guztien artean osatutako auzo-batzarrari dagokie udalerriko gobernua eta administrazioa. Toki bakoitzeko usadio, ohitura eta tradizioetara egokitzen dute beren jarduna, behar den bezala egiaztatuta daudenetara, alegia. Horrelakorik egon ezean, arau hauek beteko dira:

- a) Alkatetza betetzen duenak gutxienez alkateorde bat izendatuko du, bere zereginetan laguntzeko eta bere ordezkari jarduteko kanpoan edo gaixorik dagoenean, edo ordezkaria izatea beharrezkoa den beste edozein egoeratan. Toki-araubideari buruzko araubideak alkatetzari egozten dizkion eskuduntzak dagozkie.
- b) Auzo-batzarrari, berriz, toki-araubidea arautzen duten arauak udalaren osoko bilkurari esleitzen dizkieten eskuduntzak egokituko zaizkie.

5.- Kontzeju irekiko araubideko udalerrietan, kontu-batzorde berezi bat ere egongo da, auzotarren batzarrak onartu beharreko kontu guztiak, aurrekontukoak eta aurrekontuz kanpokoak, begiratzeko eta aztertzeko eta haiei buruzko irizpenak emateko. Batzorde hori, gutxienez, organo horrek aukeratutako hiru kidez osatua egongo da. Funtzionamendu-araubidea auzotarren batzarrak erabakitakoa izango da.

6.- 100 biztanletik beherako udalerrietako alkateek kontzeju irekiera deitu ahal izango dituzte bertako auzotarrak, udalerrirako garrantzi berezia duten erabakietarako. Hala eginez gero, nahitaez horretarako eratzen den auzo-batzarraren irizpidea onartu beharko dute.

II. KAPITULUA

LANPOSTUEN ARLOKO XEDAPEN BEREZIAK

21. artikulua.- Lanaldi partzialeko lanpostuak.

Jarduera edo zerbitzu bat emateko funtzionario baten lanaldi osoko arduraldia behar ez denean, 5.000 biztanletik beherako udalerriek zatiko

arduraldiko funtzionario-lanpostuak sortu ahal izango dituzte beren lanpostuen zerrendetan.

22. artikulua.- Lan-kontratudunentzat gordetako lanpostuak.

Beste toki-erakunde batzuk bilduta edo elkartuta sortutako toki-erakundeek lan-kontratudunentzat gordetako lanpostuak sortu ahal izango dituzte lanpostuen zerrendetan, betiere lanpostu horietan agintea erabili behar ez bada.

III. KAPITULUA

UDAL-ORDEZKARIEN ESTATUTUARI BURUZKO XEDAPENAK

23. artikulua.- Udal-ordezkarien araubidea.

1.- Euskal udal-ordezkarien araubide juridikoa toki-araubidearen oinarrizko legerian eta hauteskunde-legerian orokorrean ezarritakoa izango da, eta lege honetan xedatutakoa osagarri izango da.

2.- Udalerria osatzen duten ordezkarien kopurua, hautatzeko prozedura, agintaldiaren iraupena eta hautaezintasun eta bateraezintasun arrazoiak hauteskunde-legerian daude jasota.

3.- Toki-ordezkarien eskubide eta betebeharrak oro har oinarrizko legerian ezarritakoak izango dira, bai eta lege honetan aurreikusitakoak ere.

24. artikulua.- Udal-ordezkarien ekonomia-eskubideak eta arduraldi-araubidea.

1.- Udal-ordezkariek toki-araubidearen oinarrizko legerian, lege honetan, udaleko erregelamendu organikoan eta, behar izanez gero, kasuan kasuko osoko akordioetan aurreikusten diren eskubide ekonomikoak eta arduraldi-araubideak izango dituzte.

2.- Udalek udal-erregelamendu organikoan edo osoko bilkuraren erabaki bidez arautuko dituzte honako alderdi hauek:

a) Alkatearen eta gobernu-taldeko zinegotzien arduraldi-araubideak eta ordainsariak.

b) Talde politiko bakoitzeko eledunen edo ordezkarien arduraldi-araubideak eta ordainsariak. Horretarako, kontuan izango da osoko bilkura osatzen duten kideen kopurutik ondorioztatzen den

proporzionaltasun-printzipioa. Oposizioko taldeei kontzeptu honengatik egozten zaizkien baliabideen zenbatekoa ez da inola ere gobernu-taldeari egozten zaiona baino handiagoa izango.

c) Karguan aritzeak eragindako gastu egiazkoengatik izango den kalte-ordainen araubidea.

d) Toki-ordezkarien bizi-tasa pertsonala, familiakoa eta profesionala bateratzeari mesede egiten dioten formulak.

3.- Erabateko edo zatiko arduraldia egozten zaien alkate eta zinegotzietan emango zaie Gizarte Segurantzako araubide orokorrean, oinarrizko legerian aurreikusten diren baldintzetan eta salbuespenekin.

4.- Erabateko edo zatiko arduraldia izango duten toki-ordezkarien kopurua, bai eta haien ordainsariak ere, osoko bilkurak erabakiko du, alkateak proposatuta, legegintzaldiaren hasieran. Arduraldi eta ordainsari horiek osoko bilkurak baino ez ditu aldatu ahal izango, alkateak proposatuta.

5.- Gastu publikoa hobeto harmonizatzeko, Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluko Politika Publikoen Udal Batzordeak, 39. artikuluan arautuak, ordainsarien taula bat proposatu ahal izango du, gomendio gisa, udalerriko biztanle-kopurua eta toki-ordezkarien arduraldia —erabatekoa edo zatikoa— kontuan hartuta.

25. artikulua.- Oposizioa.

Bost mila biztanletik gorako euskal udalerriek bermatu egingo dute oposizioko zinegotzi batek gutxienez (oposizioko ordezkari-kopuru handieneko talde politikoko kide izango denak) zatiko arduraldia izatea, udal-gobernua kontrolatzeko eta fiskalizatzeko lana behar bezala egin ahal izateko. Hogei mila biztanletik gorako udalerrietan, arduraldi hori erabatekoa izango da. Bi taldek edo gehiagok toki-ordezkarien kopuru berdina badute, indar politiko bozkatuenari esleituko zaio aukera hori.

26. artikulua.- Udaleko talde politikoak.

1.- Toki-ordezkariek talde politikoetan antolatuko dute beren burua, eta oinarrizko legerian eta lege honetan ezartzen diren eskubideak eta betebeharrak izango dituzte, salbu eta atxiki gabeko kideak, haien ekonomia-eskubideak eta eskubide politikoak ezingo baitira izan jatorrizko taldean jarraitu izan balute izango lituzketenak baino handiagoak.

2.- Osoko bilkuran ordezkariak duten talde politiko guztiek izango dute organo osagarrietan parte hartzeko eskubidea, berariaz aukera horri uko egin ezean, taldeotako zinegotziak organo horietan egonda, osoko bilkuran duten zinegotzi-proporzioaren arabera. Korporazioaren osaera dela eta, ezinezkoa denean proportzionaltasun hori lortzea, postuak banatzea erabaki ahal izango da, halako eran, non gehiengoaren osaera osoko bilkurakoa bera izango den, edo organoak talde bakoitzerako kide-kopuru berdinarekin osatuz, eta, erabakiak hartzeko, boto-sistema haztatua aplikatuz.

3.- Talde politikoek diru-izendapenak jasotzeko eskubidea izango dute, beren zereginak duintasunez burutu ahal izateko. Izendapen horiek osagai finko bat izango dute, talde guztientzat berdina, eta beste bat aldakorra, talde bakoitzeko kide-kopuruaren arabera. Izendapen horiek ezingo dira erabili korporazioaren zerbitzura diharduten inolako langileren ordainsariak ordaintzeko, ez eta ondare moduan aktibo finkoak eratzeko balio dezaketen ondasunak eskuratzeko ere. Gastu publikoa hobeto harmonizatzeko, Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluko Politika Publikoen Udal Batzordeak, udal-taldeetarako izendapenen taula bat proposatu ahal izango du, gomendio gisa, udalerriko biztanle-kopurua kontuan hartuta.

27. artikulua.- Euskal udal-ordezkarien etika eta gobernu onaren kodea.

1.- Tokiko Politika Publikoen Udal Batzordeak euskal toki-ordezkarien etika eta gobernu onaren kode bat proposatuko du, gomendio gisa, ordezkari horiek eredugarri izan daitezten eta ordezkarien zereginen legitimazioa indartu dadin herritarren artean.

2.- Euskal udalek, autoantolaketaarako dituzten ahalmenez baliatuz, aukeran izango dute aurreko paragrafoan ezarritako etika edo gobernu onaren kodeaz bestelako onartzea.

IV. TITULUA

UDALEN ESKUMENAK

I. KAPITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

28. artikulua.– **Printzipio orokorrak.**

1.- Euskal udalen eskumenak oinarrizko legerian, lege honetan, Eusko Legebiltzarraren beste lege batzuetan eta lurralde historikoen foru-arauetan aurreikusitakoaren arabera zehaztuko dira.

2.- Euskal udalen eskumenak zehazteko, hala badagokio, herritarrarekiko hurbiltasun handiena hartuko da kontuan printzipio gisa. Era berean, gai edo jarduera publikoaren zabaltasuna edo izaera, toki-erakundeen kudeaketa-gaitasuna edo eraginkortasun- edo ekonomia-beharrak ere balioetsiko dira.

3.- Lege honen 3.3 artikuluan ezarritakoari jarraituz, lege honetan udalari ematen zaion eskumen bat beste gobernu maila bati esleitzen bazaio, esleipen horrek subsidiariorotasun-printzipioa izango du oinarri, eta neurri horren proportzionaltasuna justifikatu beharko da. Nolanahi ere, honako eskakizun hauek bete beharko dira:

a) Lurralde historikoaren edo Autonomia Erkidegoaren esparruan, jarduera bateratua beharrezkoa izatea, baitezpadakoa delako.

b) Laguntza teknikoaren edo lege honetan zein foru-arauetan ezarritako udalartekotasun-formulen bitartez homogeneotasun nahikoa lortu ezin izatea.

c) Foru-erakundeei edo autonomia-erkidegoko erakundeei esleitutako zeregin zehatzak behar-beharrezkoak izatea udalez gaindiko interesak asetzeko.

29. artikulua.- Ahalak.

1.- Udalerriei, toki-araubideari buruzko oinarrizko legerian aurreikusitako ahal guztiak dagozkie, hirigintza-zioengatiko desjabetzetako ondasunen eta eskubideen presako okupazioa deklaratzeko izapidea barne direla.

2.- Gainerako toki-erakundeek ere izango dituzte ahal horiek, betiere, aplikagarri zaizkien legeetan eta foru-arauetan ezarritako salbuespenak eta mugak errespetatuta.

II. KAPITULUA

UDALEN ESKUMENAK

30. artikulua.- Eskumen-klausula orokorra.

1.- Hurrengo artikuluan aipatzen diren eskumenen kalterik gabe, euskal udalek eskumena izango dute beste edozein eskumen antolatzeko eta kudeatzeko, betiere beste gobernu maila bati berariaz esleituta ez badago eta udalerriko beharrak asetzeko bada.

2.- Era berean, euskal udalek jarduera eta zerbitzu osagarriak izan ditzakete, beste herri-administrazio batzuenak osatzeko.

31. artikulua.- Udalen eskumenak.

1.- Artikulu honetan aipatzen diren euskal udalen eskumenak berezko eskumenak izango dira.

2.- Eskumenak bikoiztuta daudenean, koordinazio- eta lankidetzaprintzipioen arabera jardungo da, beharrezko ez diren bikoiztasunak saihesteko eta herritarrei zerbitzuak modurik onenean eta eraginkorrean ematen zaizkiela bermatzeko.

3.- Legeria aplikagarriaren esparruan –eta sektore-legeek gainera aitortzen dizkietenen kalterik gabe–, euskal udalek eskumen hauek izango dituzte:

1) Ikuskizunak, jolas-jarduerak eta horiek egiten edo antolatzen diren establezimendu publikoak:

- Ikuskizunak eta jolas-jarduerak egiteko establezimenduetan zerbitzu-jarduerak abiarazteko baldintzak eta eskakizunak finkatzea eta horien inguruko kontrola, zaintza, ikuskapena eta zehapen-araubidea zehaztea, establezimenduok jendearentzat irekiak direnean.

- Ikuskizunen, jolas-jardueren eta horiek egiten diren establezimendu publikoen inguruko lizentziak eta baimenak ematea, salbu eta, indarrean

dagoen legeriaren arabera, nahikoa bada aldez aurretiko jakinarazpena edo erantzukizuneko adierazpena egitea.

2) Animaliak babesteko eta arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko araudia garatzea eta aplikatzea.

3) Polizia eta herritarren segurtasuna: gai honetan, udalen eskumenek, segurtasun publikoko legerian xedatutakoaren esparruan, honako arlo hauek hartzen dituzte:

- Herritarren segurtasunari lotutako prebentzio-politikak zehaztea eta aplikatzea udalerrian, beste administrazio batzuekin koordinatuta.

- Esparru publikoetan eta jendearentzat irekitako lokaletan herritarrek izan behar dituzten bizikidetzaharremanak ordenantza bidez arautzea.

- Titulartasun publikoko zerbitzu, ekipamendu, azpiegitura eta instalazioen erabilera ordenantza bidez arautzea.

- Udaltzaingoa sortu, antolatu, planifikatu eta kudeatzea, poliziari eta segurtasun publikoari buruzko legerian xedatutakoaren esparruan.

4) Babes zibila eta suteak saihestea eta itzaltzea.

- Babes zibileko eta suteak saihesteko eta itzaltzeko planak egitea eta onartzea. Plan horiek koherenteak izan behar dute, eta koordinatuta egon behar dute udalaz gaindiko administrazioek egindakoekin.

- Prebentzio-neurriak eta, hala badagokio, erreakzio-neurriak ezartzeko ordenantzak onartzea, suteei, uholdeei edo bestelako ezbehar edo hondamenei lotuta.

- Babes zibileko udal-egiturak, suteak saihesteko eta itzaltzeko zerbitzuak eta salbamendu-zerbitzuak sortzea eta kudeatzea.

- Suteetan edo hondamen-egoeretan herritarrak babesteko behar diren aparteko neurriak hartzeko agintzea. Neurri horien artean sartzen dira, besteak beste, auzotarrak mobilizatzea, ekipoak konfiskatzea edota eraikinak utzaraztea.

- Babes zibilaren arloan herritarren parte-hartzea boluntariotzaren bitartez bultzatzea eta boluntarioen erakundeen sorrera sustatzea.

- Aurreikuspen eta prebentzioko udal-programak egitea eta gauzatzea arlo horretan eskumena duten beste administrazioekin lankidetzan.

5) Hirigintzaren antolamendua, kudeaketa, exekuzioa eta diziiplina:

- Hiri-antolamendurako planak egitea eta izapidetzea (antolamendu egiturazko edo xehekatukoak) eta hasierako, behin-behineko eta, hala badagokio, behin betiko onarpena ematea.
- Plangintza orokorra bateragarri egiteko planak egitea, izapidetzea eta onartzea, eragindako udalerriekin adostuta.
- Lurzoru urbanizaezinaren antolamendua, bilakaera, kudeaketa eta diziiplina finkatzea.
- Garapena, kudeaketa eta diziiplina, birgaitzeari, berritzeari, berroneratzeari eta hiri-ordezkapenari dagozkion ekintzetan.
- Xehetasun-azterketak, hirigintza-antolamenduko ordenantza osagarriak, katalogoak eta hirigintza-antolamenduko beste tresna batzuk egitea eta izapidetzea eta behin betiko onespena ematea.
- Hirigintzako egikaritze-tresnak egitea, izapidetzea eta onartzea.
- Hirigintzako baimenak ematea, hala badagokio, salbu eta alde zuzeneko jakinarazpena edo erantzukizuneko adierazpena egitea dagokionean.
- Hirigintzako legezketasuna bermatzea eta babestea eta hirigintza-antolamendua berrezartzea.
- Hirigintza arloko arau-hausteen ikuskapena eta zehapena.
- Azpiegitura publikoak egiteko programak lantzen eta diseinatzen parte hartzea, azpiegitura horiek udalerritik igarotzen direnean.
- Parte-hartze eraginkorra plangintzaren prestaketan, udal-mugarteari erasaten dioten lurraldearen antolamendu-tresnetan.

6) Etxebizitzaren inguruko plangintza, programazioa eta kudeaketa egitea:

- Etxebizitzaren inguruko tokiko plangintza egitea eta gauzatzea eta autonomia-erkidegoko etxebizitza-plangintza egiten eta kudeatzen parte hartzea.
- Etxebizitzak sustatzea eta kudeatzea, autonomia-erkidegoari esleitutako eskumenaren kalterik gabe eta horrekin koordinatuta eta lankidetzan.
- Zuzkidura-ekipamenduak eta etxebizitza babestuak antolatzea, sustatzea, kudeatzea, esleitzea eta kontrolatzea, horien kategoria dena

dela: udalak arautuak, eraiki berriak edo hirigintzako birgaitze- edo berritze-plan berezien ondoriozkoak.

- Eraikinen ikuskapen teknikitik ondorioztatzen diren espedienteak izapidetzea, esku-hartze beharrezana dakartenean.

7) Ingurumenaren sustapena, defentsa eta babesa eta garapen iraunkorra:

- Ingurumena babesteko, klima-aldaketaren aurka borrokatzeko, garapen iraunkorra bultzatzeko eta natur ondarea eta biodibertsitatea babesteko udal-politikak formulatzea eta kudeatzea udal-eremuan.

- Ingurumena babesteko udal mailako araudia prestatzea eta onartzea.

- Sailkatutako jardueretarako baimenak ematea, aldez aurreko jakinarazpena edo erantzukizuneko adierazpena egin behar denean izan ezik, eta, udalaren esku-hartzearen esparruko jardueri dagokienez, jagotea, kontrolatzea, ikuskatzea, gainbegiratzea eta zehatzeko ahalmena erabiltzea.

- Ingurumen-informazioaren eta ingurumen-heziketaren arloko jarduketak bultzatzea eta programatzea.

- Ingurumenaren arloko plangintza egiteko orduan, parte-hartze iraunkorra izatea.

- Ingurumena babesteko jarduerak antolatzea, planifikatzea, programatzea eta egikaritzea zaraten, bibrazioen, argi-kutsaduraren eta usainen esparruan.

- Udalaren esku-hartzearen esparruko jardueri dagokienez, jagotea, kontrolatzea, ikuskatzea, gainbegiratzea eta zehatzeko ahalmena erabiltzea.

- Hondartzetarako sarrera eta garbiketa antolatzea.

- Udalaren titulartasunpeko mendien eta naturara iristeko tokien plangintza, kontserbazioa eta ustiapen iraunkorra, Natura 2000 Sareko kontserbazio aktiboko neurrien ezarpena, natura-ondarearen plangintzarekin eta kasu bakoitzean aplikaziokoa den lurralde- eta sektore plangintzarekin bat etorruta.

8) Osasun publikoa sustatzea, defendatzea eta babestea, droga-mendekotasunaren inguruko gaiak barne hartuta:

- Osasun publikoaren babesaren eta sustapenaren arloko udal-politikak formulatzea eta kudeatzea, ikuspegi integratzaile batekin, gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-jasankortasuneko udal-politikaren barruan, non osasunaren eta mendekotasunen arloko berariazko plan eta ekintzak sartzen diren.
- Toki-politikek osasunean duten eraginaren ebaluazioa aplikatzea, politika horiek eragin aipagarria dutenean osasunaren gainean, politika guztietako osasun-printzipioaren arabera, eta osasunaren babesa eta sustapena toki arloko esku-hartzeen diseinuan eta ezarpenean txertatzeko xedez.
- Osasuna sustatzeko eta osasun-gaietan hezteko programak egitea, babesgabetasun- edo arrisku-egoeran dauden pertsonen arreta berezia eskainita.
- Euskal osasun-administrazioarekin lankidetzan jardutea, herritarren osasun-arretarako laguntza-baliabideen plangintzan.
- Euskal osasun publikoaren laguntza-zerbitzuen gobernuan eta kudeaketan parte hartzea.
- Mugikortasuna antolatzea irizpide hauek kontuan hartuta: iraunkortasuna, gizarteratzea eta gizarte-kohesioa; jarduera fisikoaren sustapena eta istripuak saihestea.
- Pertsonen bizitzeko eta harremanetarako erabiltzen dituzten eraikinen eta tokien osasun kontrola egitea.
- Elikagaien banaketaren osasun-kontrol ofiziala egitea.
- Pertsonen kontsumorako uraren kalitatearen osasun-kontrol ofiziala egitea.
- Industrien, garraioen, jardueren eta zerbitzuen osasun-kontrola egitea.
- Espazio publikoen osasungarritasuna kontrolatzea.
- Kostaldeko eta barrualdeko bainu-guneen osasun kontrola egitea.
- Hazlearen behar pertsonaletarako animaliak hiltzeari buruzko osasun-arauak betetzen direla zaintzea.
- Hiri-izurriak kontrolatzea.
- Hilerrien osasun arloko kontrola eta hileta-tokien osasun arloko polizia.

- Osasun publikoaren sustapen, defentsa eta babeseko jardueri dagokienez, mendekotasunak barne direla, jarduera horiek jagotea, kontrolatzea, ikuskatzea, gainbegiratzea eta zehatzeko ahalmena erabiltzea ahalbidetuko duten udal-ordenantzak prestatzea eta onartzea.

9) Erabiltzaile eta kontsumitzaileen defentsa eta babesa antolatzea, planifikatzea eta kudeatzea:

- Erabiltzaile eta kontsumitzaileak defendatzeko eta babesteko udal-ordenantzak egitea eta onartzea.

- Erabiltzaile eta kontsumitzaileei kontsumoaren inguruko informazioa eta heziketa ematea eta beren eskubideei eta eskubideok erabiltzeko modurik eraginkorrenari buruzko orientabideak eta aholkuak ematea.

- Enpresei eta profesionali kontsumoaren inguruko informazioa eta orientabideak ematea.

- Kontsumitzaileek aurkeztutako kexak, erreklamazioak eta salaketak aztertzea eta izapidetzea eta, hala badagokio, bitartekaritza edo arbitrajea egitea.

- Kontsumitzaileen informaziorako udal bulegoak sortzea, kudeatzea, antolatzea eta ebaluatzea beren lurralde-eremuan.

- Kontsumoko arbitraje-sistema sustatzea, hedatzea eta, hala badagokio, kudeatzea autonomia-erkidegoko Administrazioarekin lankidetzan.

- Ikuskatzea eta zehatzeko ahalmena erabiltzea.

- Kontsumitzaile eta erabiltzaileen osasunari eta segurtasunari edo ekonomia-interesei eragiten dieten krisi- edo larrialdi-egoeretan, premiazko neurriak hartzea eta beharrezko lankidetzak eskatzea.

- Kontsumitzaile eta erabiltzaileen elkarteak sustatzea eta babestea.

10) Hilerriak, errausketa-labeak eta beilatokiak antolatzea, planifikatzea eta kudeatzea.

11) Gizarte-zerbitzuak antolatu, planifikatu eta kudeatzea:

- Gizarte-zerbitzuen arloan, beren zerbitzuak antolatu, planifikatu eta kudeatzea.

- Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako gizarte-arloko udal-zerbitzuak planifikatzea autonomia-erkidegoko eta foru-aldundietako administrazioen plangintza estrategikoari eta gizarte-zerbitzuen mapari jarraituz.
 - Oinarrizko gizarte-zerbitzuak sortu, antolatu eta kudeatzea.
 - Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako prestazio eta zerbitzuen katalogoko lehen mailako arretako gizarte-zerbitzuak ematea.
 - Arrisku-egoeran dauden adingabeak babestea.
 - Gizarte-ekintzako hirugarren sektorea sustatzea eta bultzatzea, herritarren parte-hartzea sustatzea, elkartegintza eta boluntariora bultzatzea eta erabiltzaileek eta profesionalak gizarte-zerbitzuen kudeaketan eta ebaluazioan parte har dezatela bultzatzea.
 - Prestazio eta zerbitzuei buruzko informazio eguneratua zabaltzea beren lurralde-eremuan.
 - **Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren parte hartzen duten eragile eta profesionalen prestakuntza sustatzea eta bultzatzea, gainerako euskal herri-administrazioekin koordinatuta.**
 - **Ikuskatzea eta zehatzeko ahalmena erabiltzea beren titulartasunpeko zerbitzu, zentro eta entitateen kasuan edota udalaren eskumen diren zerbitzuak ematen dituzten zerbitzu, zentro eta entitate pribatuen kasuan, berdin delarik zerbitzu horiek itun, kontratu edo, hala badagokio, hitzarmen baten ondorioz ematen dituzten.**
 - Hala badagokio, Gizarteratzeko Euskal Plana gauzatzean onartzen diren gizarteratzeko udal-egitarauak egitea eta garatzea.
 - Gizarte-larrialdietarako laguntzei buruzko prozedurak izapidetzea eta ebaztea eta, hala badagokio, laguntza horiei dagozkien ordainketak egitea, horien jarraipena eta kontrola egitea eta zehatzeko ahalmena erabiltzea beren eskumenen esparruan.
- 12) Zerbitzuak antolatzea, kudeatzea, ematea eta kontrolatzea uraren ziklo integrean, kasuan kasuko esparru-erregelamenduen arabera:
- Uraren goi-hornidura, honako hauek barne: ur-baliabideak bildu eta azalratzea eta kudeatzea, baliabide ez-konbentzionalak sortzea barne; potabilizazio-tratamendua; arteria edo hodi nagusietatik garraiatzea eta herriguneen buruko andel erregulatzaileetan biltzea.

- Uraren behe-hornidura, honako hauek barne: banatzea, tarteko biltegi-tara eramatea eta kontsumorako ura hartune partikularretara edo erabiltzaileen instalazio-tara eramatea eta banatzea.

- Herriguneetako hondakin-urak garbitzea edo batzea eta, udal-estolderiaren bitartez, kolektore orokorretara edo tratatzeko bildu behar diren lekura eramatea.

- Herriko hondakin-urak araztea, hau da, biltzea, kolektore orokorren bitartez garraiatzea, tratatzea eta efluenta ur-masa kontinentaletara edo itsasora isurtzea.

13) Argiteria publikoko zerbitzua antolatzea, kudeatzea eta ematea.

14) Etxeko hondakinak eta merkataritzako hondakin ez arriskutsuak kudeatzeko zerbitzuak antolatzea, ematea eta kontrolatzea, hala badagokio, gaikako bilketarako sistema baimendu integratuen bidez, eta hondakin horien ekoizpena murrizteko plangintza, programazioa eta diziplina ezartzea, goragoko lurralde-mailarako plangintzarekin bat etorrita.

15) Bideak garbitzeko zerbitzua antolatzea, kudeatzea eta ematea.

16) Pertsonen garraio publikoko hiri-zerbitzuak —garraiatzeko modua dena dela— antolatzea, planifikatzea, programatzea, kudeatzea eta sustatzea eta horien inguruko diziplina ezartzea, betiere garraioa udal-erriaren barruan egiten bada osorik.

17) Udal-mugartearen barruan hartutako azpiegitura ziklagarriak bidez-titan planifikatzea, antolatzea eta gauzatzea, udalarenak badira.

18) Kirola sustatzea eta erabilera publikoko kirol-ekipamenduak kudeatzea:

- Lurralde historikoetako foru-organoei onartutako eskola-kiroleko programak eta kirola pertsona guztien artean zabaltzeko programak gauzatzea, foru-organo horiekin koordinatuta.

- Udalaren kirol-ekipamenduak eraikitzea, handitzea eta hobetzea eta horiek kudeatzea eta mantentzea.

- Udalaren kirol-ekipamenduen erabilera arautuko duten ordenantzak egitea eta onartzea.

- Osorik beren lurren barruan egiten diren kirol-agerpen eta -lehiaketak antolatzea eta, hala badagokio, baimentzea, bereziki herrikoiak badira edota eskola-adina duten edo arreta berezia behar duten pertsonei zuzenduak badira.

- Udalerriko kirol-plangintza formulatzea.

19) Kultur jarduerak planifikatzea eta kudeatzea eta kultura sustatzea:

- Liburutegi, agiritegi, museo eta museo-bildumen inguruan, udal-plangintza eta -proiektuak egitea, onartzea eta gauzatzea.

- Beren kultur erakundeak kudeatzea, kultur ekipamenduak eraikitzea eta kudeatzea eta udalerriko beste batzuekin koordinatzea.

- Era guztietako kultur jarduerak antolatzea eta sustatzea eta arte-sorkuntza eta -produktzioa eta kultur industriak bultzatzea.

- Euskadiko Liburutegi Sisteman eta Euskadiko Irakurketa Sare Publikoan parte hartzea.

20) Udal-ondare historikoa babestea eta kontserbatzea eta babes-plan bereziak eta katalogoak egitea eta onartzea.

21) Turismoa:

- Beren turismo-baliabideak eta interes bereziko jaiak sustatzea.

-. Beren lurraldean dauden tokiak, ondasunak eta zerbitzuak interes turistikodun izendatzea.

-. Tokiko turismo-informazioko zerbitzua ematea.

- Autonomia-erkidegoko turismo-sektorea planifikatu eta sustatzeko bitartekoen formulazioan parte hartzea.

- Udalaren titulartasunpeko turismo-azpiegiturei buruzko politika diseinatzea.

-. Beste administrazio batzuekin lankidetzan jardutea partekatutako inguruneak eta baliabideak sustatzeko.

22) Hezkuntza:

- Irakaskuntzaren programazioa egiten eta nahitaezko eskolatze-aldia betetzen dela zaintzen parte hartzea.

- Haur-hezkuntzako, lehen hezkuntzako eta hezkuntza bereziko ikastetxe publikoen eraikinak kontserbatzea, mantentzea eta zaintzea eta hezkuntza-administrazioari behar dituen orubeak eskaintzea herri-ikastetxe berriak egiteko.

- Herri-ikastetxeen instalazioen eskola-orduetatik kanpoko erabilera kudeatzea, Autonomia Erkidegoko administrazioan hezkuntza-arloko eskumena duen sailarekin koordinatuta eta berariaz ezarritako prozeduren bitartez.

- Udalaren musika-eskolak kudeatzea, eskumena duten autonomia-erkidegoko erakundeekin hitzarmena egin ondoren. Hitzarmen horretan zehaztuko da jarduera horiek finantzatzeko sistema.

23) Tokiko ekonomia- eta gizarte-garapena:

- Autonomia-erkidegoko plangintzaren esparruan, tokiko ekonomia- eta gizarte-garapena sustatzea.

- Tokiko garapena eta tokiko enplegua bultzatzeko plan estrategikoak egitea.

- Ekonomia-sektoreen beharrei eta tokiko lan-merkatuaren bilakaerari buruzko azterketak egitea.

- Enpleguko udal-politika aktiboak gauzatzen laguntzea, politika aktiboak gauzatzeko eskumena duen administrazioaren lankide diren aldetik. Ildo horretatik, enplegu-politika aktiboari buruzko programak eta neurriak kudeatzen parte hartuko dute; zehazki jarduera hauek gauzatu dituzte:

- lan-bitartekotza.
- enplegagarritasuna, gizarte-inklusioa eta berdintasuna sustatzea lan-merkatuan.
- enplegurako lanbide-heziketa.
- enplegu autonomia eta enplegua sortzen duten enpresa-ekimenak sustatzea.
- tokiko enplegua sustatzea.

- Enpresa berriak jartzeko azpiegiturak sustatzea.

- Era guztietako ekonomia-jarduerak sustatzea, bereziki merkataritzari, turismoari eta artisautzari lotuak.

24) Euskara:

- Euskararen erabilera sustatzeko udal-planak idatzi, onartu eta betearaztea.
- Gizarte-bizitzako alor guztietan euskararen erabilera sustatzea, herritarrek salerosketako, kulturako, elkarrekin, kirolak, erlijiozko edota beste edozein motatako jarduerak guztiak euskaraz garatu ahal izan ditzaten.
- Udalerrian euskara erabiltzea arautuko duen udal-ordenantza idaztea eta onartzea.
- Autonomia-erkidegoko administrazioarekin lankidetzan aritzea helduak euskalduntzen, alde aurretik gaiari buruzko hitzarmena sinatu ostean, jarduerak horiek finantzatzeko sistema zehazteko.

25) Berdintasuna eta edozein eratako bereizkeria desagerraraztea, emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko legerian jasotako bereizitasunei kalterik gabe:

- Udalerrian berdintasunaren gaia orokorrean antolatu eta plangintza burutzea.
- Udal-administrazioan berdintasunaren ikuspegia barneratzeko azpiegiturak, programak eta prozedurak zehaztu eta garatzea, eta enplegu publikoko berdintasunerako planak onartzea.
- Programa edo zerbitzuak aurkeztea, bereizkeria jasaten dutenek oinarritzeko gizarte-erabilerak baliatzeko aukera izan dezaten bermatzeko.
- Gizonen zein emakumeen norberaren bizitza, familia eta lana batera eramanez ahal izateko dauden baliabideak eta zerbitzuak antolatu eta kudeatzea, dituzten ezaugarriengatik udalek eskaini behar badituzte.
- Udal-esparruan gertatzen diren bereizkeria-egoerak antzematea, eta egoera horiek erotik kentzeko neurriak hartzea.

26) Etorrinei harrera egitea eta gizarteratzea, immigrazioko politikak gauzatzea barne dela; horretarako, etorkinek gizarrean duten errotzea egiaztatuko da, bai eta etxebizitza egokia dela etorkinen familiak berriz elkartzeko ere.

27) Udal-ondarea kudeatzea eta ondare horren erabilera, zertarako, kontserbazioa eta mantentze-lana arautzea.

28) Udalerriko biztanleen errolda kudeatzea, bai eta ohiko bizilekua inskripzio-eskabidean adierazitako udalerrian dagoela egiaztatzea ere, eta, behar izanez gero, erroldako inskripzioa ukatzea, helbide berean inskribatzen den pertsona-kopuruak biztanleko edo egoitza-unitateko gehienezko biztanle-edukiera gainditzen duenean (edukiera hori udal-ordenantzetan legeria aplikagarriaren arabera aurreikusitakoa izango da).

29) Hiltegiak antolatu eta kudeatzea.

30) Herritarrek parte hartzeko eta teknologia berriak eskueran izateko azpiegiturak ezarri eta garatzea.

31) Udalerrarenak diren herri barruko bide publikoak eta baserri-bideak diseinatzea, kontserbatzea eta mantentzea.

32) Udalerriko bideetan, pertsona, ibilgailu (motordunak zein bestelakoak) eta animalien mugikortasuna eta iredgarritasuna eta pertsona eta salerosgaien garraioa antolatu, kudeatu, sustatu eta diziplina-modua zehaztea; horretarako, beharrezko iritzitako baliabide materialak, teknikoak eta giza baliabideak jarri ahal izango dituzte.

33) Herri barruko trafikoa eta aparkatzeko moduak arautzea eta antolatzea.

34) Bake-epaitegiek beren eginkizunak aurrera eramateko baliabide materialak eta giza baliabideak jartzea.

35) Parkeak eta lorategiak.

36) Merkataritza:

- Hornidura-azokak antolatzea, kudeatzea eta sustatzea eta horien inguruko diziplina ezartzea.

- Aldian behin egiten diren feriak eta azoka txikiak baimentzea eta horiek egiteko leku fisikoaren egokitzapena sustatzea.

- Produktu bereziak sustatzeko ekitaldiak eta erakusketak antolatzea eta, hala badagokio, baimentzea.

- Txikizkako merkataritza eta merkataritzako ekipamendu handiak planifikatzea eta antolatzea, hirigintza-antolamenduko irizpideei eta lurzoruaeren arrazoizko erabilerari erantzunez.

- Kaleko salmenta erregulatzea, ikuskatzea eta arlo horretako zehapen-ahalmena.
- Udal-eremurako merkataritza-orientazioko planak onartzea eta betearaztea.
- Ibilgailuak eta bestelako salgaiak espazio publikoetan salerostea erregulatzea, ikuskatzea eta arlo horretako zehapen-ahalmena.

37) Gazteria:

- Gazteei zuzendutako jarduera, zerbitzu eta ekipamenduak antolatu, kudeatu, ikuskatu, kontrolatu eta zehatzeko ahala gauzatzea.
- Gazteentzako zerbitzuen udal-plangintza eta -programazioa egitea, erkidegoko eta aldundiko planifikazioarekin bat.

38) Garapenerako lankidetzak:

- Udalek garapenerako eskaintzen duten lankidetzak tekniko eta ekonomiko finantzarioa antolatu, programatu eta kudeatzea, eta beste horrenbeste ekintza humanitario eta larrialdiko egoerentzako ekintzen kasuan.
- Garapenaren aldeko lankidetzarako programak eta ekintzak betearaztea.

32. artikulua.- Udal-eskumenen eraginkortasuna.

1.- Udalek bakoitzak bere kabuz edo lege honen VI. tituluan nahiz lurralde historikoetako kasuan kasuko foru-arauetan aurreikusitako formulen bidez erabiliko dituzte beren eskumenak.

2.- Foru-aldundiek, oinarrizko legerian esaten denarekin bat etorruta, dena delako lurralde historikoko udalei laguntza teknikoa eta lankidetzak juridiko, ekonomiko eta teknikoa eskainiko diete, lege honen bidez udalei ematen zaizkien eskumenak benetan gauzatuko dituztela eta lege horretan esleitzen zaizkien zerbitzuak emango dituztela bermatu ahal izateko, baldin eta udalok beren kabuz edo beste batzuekin elkartuta ezin badituzte aurrera eraman.

33. artikulua.- Eskumenak eskuordetzea eta eskualdatzea.

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eskumenak eskuordetzeko edo eskualdatzeko aukera izango dute, eta edozein udalerriren edo toki-erakunderen esku utzi, lege honetan xedatutakoaren esparruan.

2.- Eskualdatzearen eta eskuordetzearen bidez, bereizte-printzipioa gauzatzeko aukera egongo da, batez ere behar besteko neurria eta eskualdatutako edo eskuordetutako eskumenak eraginkortasunez betetzeko kudeaketa-gaitasun nahikoa duten udalerriei buruz aplikatzeko.

3.- Udalek, era berean, beren lurralde-eremuko kontzejuetan eskuordetu ahal izango dute, haiek aldeztu aurretik berariaz onartu ondoren, berei dagozkien interesak ukitzen dituzten lanak egiteko eta zerbitzuak emateko beharrezko diren eskumenen erabilera.

4.- Lurralde historikoetako foru-organoen eta gainerako toki-erakundeen eskumenen eskualdatzea eta eskuordetzea, betiere, herri-administrazio horiek araubide juridikoa arautzen duen legeriarekin bat etorrita egingo da.

34. artikulua.- Eskumenak eskualdatzea.

1.- Eusko Legebiltzarraren lege baten bidez, berez autonomia-erkidegoarenak diren eskumenak udalerriei eskualdatzea egongo da.

2.- Eskualdatzea egiten duen legean eskualdatze horren araubide juridikoa eta finantzaketa zehaztu beharko dira.

3.- Autonomia Erkidegoko Administrazioak, egoki iritziz gero, antolatu, plangintza egin, koordinazio orokorrak arduratu edo kontrolatzeko ahalmenak bere eskuetan gordetzea erabaki ahal izango du.

35. artikulua.- Eskumenak gauzatzea eskuordetzea.

1.- Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eskumenak erabiltzea Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrri edo beste toki-erakunde batzuetan eskuordetzea, betiere, Eusko Jaurlaritzaren dekretu baten bidez egingo da.

2.- Dena den, eskumena eskuordetzan emanda ere, toki-erakundeak bere burua antolatzeko duen ahala errespetatu beharko da. Eskumen bat eskuordetzan emanez gero, erabateko erantzukizunez gauzatu du hartzaileak, nahiz eta zuzendaritza- eta kontrol ahalmenak gorde daitezkeen.

3.- Eskuordetzea benetan burutzeko, toki-erakundeak berariaz onartu beharko du; gainera, baliabide materialak, zuzkidura ekonomikoak nahiz finantzarioak laga, eta, beharrezkoa bada, giza baliabideak ere jarri beharko dira.

4.- Eskuordetzeari buruzko dekretuan, gutxienez kontuok zehaztu beharko dira:

- a) Eskuordetzea zuritzen duten lege-arauak.
- b) Zein eginkizun betearaztea eskuordetu den.
- c) Zein baliabide material, ekonomiko nahiz finantzario edo giza baliabide jarriko diren toki-erakundearen esku, bai eta balorazioa eta berrikusteko prozedura ere.
- d) Zerbitzuaren benetako kostuaren balorazioa.
- e) Eskuordetzea zein egunetan gauzatuko den, eta zenbateko epea izango duen.
- f) Autonomia-erkidegoak jarritako baldintzak, emandako instrukzio edo jarraibideak, jarritako kontrol-bideak, berarentzat gordetako ahalmenak, eta errekerimenduak egiteko zehaztutako prozedura; azken horren arabera, eskuordetzea ezeztatzea ere gerta daiteke.
- g) Eskumena eskuordetzan jasotzen duen toki-erakundeak izango dituen betebeharrak.

5.- Eskuordetzea bideratzen duen dekretuan ezarritako betebeharrak ez badira betetzen, gerta daiteke eskuordetzea bertan behera uztea eta eskumen horiek berriz ere Eusko Jaurlaritzak bereganatzea, aldez aurretik toki-erakundeak dioena entzun eta Gobernu Kontseiluak hala erabaki ostean. Toki-erakundeek uko egin ahal izango diote eskuordetzeari, eskuordetzeari buruzko dekretuan zehaztuko diren kasuetan. Kasu horietan, Eusko Jaurlaritzak zehaztuko du eskuordetutako eskumenak gauzatzearen edo ez gauzatzearen ondoriozko baliabideak eta kargak nola likidatuko diren.

36. artikulua.- Eskumen-gatazkak.

1.- Autonomia-erkidegoko toki-erakundeen arteko eskumen-gatazkak autonomia-erkidegoan toki-araubidearen arloko eskumenak dituen administrazio-organoak izapidetuko eta ebatziko ditu.

2.- Ebazpenak administrazio-bidea amaituko du, eta administrazioarekiko auzien jurisdikzioan jarri ahal izango da errekurtsioa, dagokion legeriak dioenaren arabera.

3.- Gatazka positiboa denean, gaiak eragiten dion toki-erakundeak bertan behera utziko ditu bere jarduerak, Euskal Autonomia Erkidegoan toki-araubidearen arloko eskumenak dituen organoak eskumenez baliatzeari uzteko eskatzen badio. Errekerimendua egon arren ere, eskumen-gatazkaz ebatzi aurretik ematen badu ebazpena, ebazpen hori erabat deuseza izango da.

4.- Erregelamendu bidez zehaztuko da zein izango den gatazka horiek ebazteko prozedura.

5.- Aurreko paragrafoetan xedatutakotik salbuetsiko dira udalerrri berari dagozkion kontzejuen arteko eskumen-gatazkak, haiek foru-araudi aplikagarriak xedatzen duenaren arabera ebatziko baitira.

III. KAPITULUA

DERRIGORREZKO ZERBITZUAK

37. artikulua.- Derrigorrezko zerbitzuak.

Derrigorrezko udal-zerbitzuak izango dira oinarrizko toki-legerian halakotzat jotzen direnak, autonomia-erkidegoko legeriaren barruan.

38. artikulua.- Foru-aldundien salbustea.

Udalerrri batek, bere ezaugarri bereziengatik, derrigorrezko zerbitzuetakoren bat edo batzuk ezartzea eta ematea udalarentzat ezinezkoa edo oso zaila dela egiaztatzen badu, betebeharrak horretatik salbustea eskatu ahal izango dio dagokion lurraldeko foru-aldundiari, kasuan kasuko foru-araudian aurreikusten den prozeduraren arabera.

V. TITULUA

UDALERRIEK POLITIKA PUBLIKO AUTONOMIKOAK ZEHAZTEN PARTE HARTZEA: TOKIKO POLITIKA PUBLIKOEN EUSKAL KONTSEILUA

39. artikulua.- Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseilua.

Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseilua kide anitzeko organoa da, eta duen eginkizuna euskal udalerrien eta erakunde autonomikoen arteko lankidetzara instituzionala bideratzea da, erabakiak autonomia-erkidegoaren

mailan hartzen direnean, udalerrien interesak ere neurtuko direla bermatzeko.

40. artikulua.- Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren izaera.

1.- Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseilua udalerriek autonomia-erkidegoko erakundeetan ordezkari izateko eta parte hartzeko organoa da, eta duen eginkizuna toki-erakundearen autonomia bermatzea da.

2.- Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseilua Eusko Jaurlaritzako Lehendakari atxikita egongo da, baina aurrekontuarekin zerikusia duten kontuetarako bakarrik.

3.- Dituen eginkizunak aurrera eramateko autonomia organiko eta funtzionala du. Antolaketako eta funtzionamenduko erregelamendu propioa onartuko du Kontseiluak, eta lege honetan aurreikusitakoak garatuko dira erregelamendu horretan.

41. artikulua.- Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren osaera.

1.- Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluak Lehendakaria izango du buru, edo hark eskuordetutako Eusko Jaurlaritzako sailburua.

2.- Autonomia Erkidegoan ezarpen handiena duen Euskadiko udalen elkarteko lehendakaria, edo horrek eskuordetutako pertsona, Kontseiluko lehendakariordea izango da.

3.- Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluan kide kopuru berdina izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren ordezkariak eta euskal udalerrietakoak. Kontseiluko kide dira, lehendakari eta lehendakariordeak gain, Autonomia Erkidegoko Administrazioaren hiru kontseilu-kide ordezkari, Eusko Jaurlaritzako Lehendakariak izendatuak, eta beste hiru udal-ordezkari, ezarpen handiena duen Euskadiko udalen elkarteak izendatuak; Autonomia Erkidegoko udal-hauteskundeetan boto gehien lortu dituzten hiru alderdietakoak izango dira ordezkari horiek, eta denak alkate edo zinegotziak izan beharko dira. Izendatutako kontseilukideek beren karguetan iraungo dute, harik eta izendatu zituen instituzio edo erakundeak kargua kendu arte edo legeak edo erregelamenduek aurreikusitako beste kargugabetze-arrazoiren bat agertu arte.

4.- Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluak, dagozkion eginkizunak aurrera eramateko, behar beste baliabide eta bitarteko izango du, ondo funtzionatuko duela bermatzeko.

42. artikulua.- Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren eginkizunak.

Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluak honako eginkizun hauek izango ditu:

- a) Araugintzako ekimenak prestatzen parte hartzea, bere kabuz edo aldez aurretik eskatuta, bai eta plan eta programen prestaketan ere, udalerriei dagozkien eskumenei eragiten dietenean. Parte-hartze hori honetan gauzatuko da: plan eta programa horiek eskumen horietan izan dezaketen eraginari buruzko txostenak ematean, non legezketasuneko eta egokitasuneko irizpideen araberrako iritziak emateko aukera ere izango duten. Txostenok ez dira lotesleak izango.
- b) Proposamenak egitea, bai eta legegintzako ekimenaz baliatuta ere, berez udalerrienak diren eskumenei eragiten dien edozein gairi buruz.
- c) Administrazioen arteko koordinazioa eta lankidetzaren sustatzea, bai eta herri-administrazioen arteko informazio-trukatzea ere.
- d) Udalerrien eskumenei eragiten dieten politika publiko sektorialeztartabaidatzea eta denen artean lantzea, eta dauden gobernu mailetan zer nolako eragina duten ikustea.
- e) Lankidetzarako eta, beharrezkoa bada, koordinaziorako sistemak sustatzea, dauden gobernu mailetakoko politika publikoen kudeaketa integratua izan dadin.
- f) Egoeraren batean toki-erakundeen autonomiari kalte egiten zaiola uste bada, Konstituzio Auzitegian konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsioa aurkeztea edo eskumen-gatazka dagoela adieraztea proposatzea horretarako legitimatutako pertsoneri.
- g) Lege honen 28.3 artikuluan galdatutako eskakizunak eta lege honetan edo beste lege batzuetan berariaz aitortutako beste zernahi betetzen direla zaintzea.

43. artikulua.- Berez udalerrienak diren eskumenei eragiten dieten legeen eta legegintzako dekretuen aurreproiektuak, edo erregelamenduen proiektuak eta plan nahiz programak prestatzen parte hartzea.

1.- Aurreko artikuluaaren a) idatz-zatian xedatutakoaren ondorioetarako, udalerrienak diren eskumenei eragiten dieten legeen eta legegintzako dekretuen aurreproiektuak, edo erregelamenduen proiektuak eta plan nahiz programak, kontsulta-txostena idazteko fasean daudenean, Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseilura bidali beharko ditu kasuan kasuko sailak.

2.- Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren baitan Politika Publikoen Udal Batzorde bat eratuko da, eta artikulua honetan zehaztutako eginkizunak izango ditu. Udal-batzorde horren lehendakaria ezarpen handiena duen Autonomia Erkidegoko udalen elkarteko lehendakaria edo hark eskuordetutako pertsona izango da, eta Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluko kide diren udalerrietako ordezkariak baino ez dira izango bertako kide.

3.- Udal Batzordeak eskaria jaso eta hamabost egun igaro baino lehen egin beharko du txostena. Eskatera bidaltzeko emandako aginduan txostena presazkoa dela esaten bada, behar bezala arrazoituta, orduan txostena egiteko epea zortzi egunekoa izango da.

4.- Udal Batzordeak proposatutako aldaketak oso-osorik onartzen baditu sailak, izapidetze-prozesuak aurrera jarraituko du.

5.- Proposamen guztiak edo haien zati bat onartzen ez baditu, Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseilua bildu beharko da, organo horretako toki-erakundeen ordezkariak eta gobernukoek gaiak eztabaida dezaten; zortzi eguneko epea izango dute horretarako.

6.- Bi ordezkariak akordiorik lortzen ez badute, dena delako sailak izapidetzearekin aurrera jarraituko du, baina txosten bat idatzi beharko du, Udal Batzordearen txostenean proposatutako aldaketak zergatik ez dituen onartu zuzitzeko.

7.- Lege-aurreproiektuen kasuan, lege-proiektua proiektu gisa onartu ostean, proiektuok Legebiltzarrera bidaltzean, ondorengoak ere erantsi beharko dira: Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren proposamenak baztertzeko arrazoiak zuzitzen dituen txostena, eta Kontseilu horrek eta Udal Batzordeak izandako bileraren edo bileren aktak.

8.- Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluari, betiere, lurralde historikoen araugintza-proiektu, plan eta programen berri eman beharko zaio, udalerriei dagozkien eskumenei eragiten badiete.

VI. TITULUA

BESTE TOKI-ERAKUNDE BATZUK ETA TOKIKO ZERBITZU PUBLIKOEN KUDEAKETA

I. KAPITULUA

BESTE TOKI-ERAKUNDE BATZUK.

44. artikulua.- Beste toki-erakunde batzuk sortu, aldatu eta ezabatzea.

1.- Lurralde historikoetako foru-organismoek, beren lurraldearen barruan, hainbat udal biltzen dituzten erakundeak sortu, aldatu eta ezabatzeko aukera izango dute, oinarritzeko legerian, lege honetan eta kasuan kasuko foru-araudian esaten denarekin bat etorrira.

2.- Dena delako toki-erakundea sortu, aldatu edo ezabatzeak Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eskumenei eragiten badie, administrazio horretan gaiari buruzko eskumena duen organoaren alde aurretiko txostena behar izango da.

45. artikulua.- Elkarte bidezko toki-erakundeak.

Udalerrien mankomunitateek eta toki-erakundeak biltzeko beste elkarte modu batzuek, obra eta zerbitzu jakin batzuk elkarrekin burutzeko edo eskaintzeko sortzen direnean, eta lurralde historiko bakar batekoak direnean, toki-araubideari buruzko oinarritzko araudia eta kasuan kasuko lurralde historikoko foru-organoek emandako arauak bete beharko dituzte, bai eta lege honetatik aplikaziozkoak zaizkien arauak ere.

46. artikulua.- Lurralde historiko bat baino gehiagokoak diren udalerrien mankomunitateak.

1.- Lurralde historiko bat baino gehiagokoak diren udalerrien mankomunitateek artikuluko honetan xedatutakoa bete beharko dute.

2.- Mankomunitate batean bildu nahi duten udalerrietako udalek osoko bilkurako legezko kideen gehiengo osoaren aldeko botoa beharko dute erabakia hartzeko.

3.- Mankomunitatearen estatutuak elkarte horren sustatzaile izan diren udalerririk guztietako alkate eta zinegotziek onartuko dituzte, batzarrean bilduta, gehiengo osoaren bidez, alde aurretik foru-aldundien txostena jaso ostean. Hori egin ondoren, mankomunitatea osatzen duten udal bakoitzeko osoko bilkurek onartu beharko dituzte estatutuak, aurreko paragrafoan aipatutako gehiengoaren bidez.

4.- Estatutuetan gutxienez ondorengo puntuak jaso beharko dira:

a) Mankomunitatearen izena, egoitza eta osatzen duten udalerrien zerrenda.

b) Zein helburu dituen, bai eta zein eskumen eta ahal dituen ere.

c) Gobernu- eta administrazio-organoak zein diren, nortzuk osatzen dituzten, eta bertako kideak nola izendatu eta kenduko dituzten kargutik.

d) Gobernu-organoen funtzionamendurako arauak, bai eta administrazioaren kudeaketakoak eta gerentziakoak ere, halakorik balego.

e) Mankomunitatea osatzen duten udalerrien ekarpenak eta erakundeak izango dituen gainerako baliabide ekonomikoak.

f) Mankomunitateak izango duen iraupena.

g) Estatutuak aldatzeko prozedura, lege honetan ezarritakoarekin bat etorrita.

h) Udalerrriak mankomunitatean sartzeko eta bertatik irteteko prozedura, eta udalerrriok biltzeko dauden aukerak, mankomunitatearen helburuetako bat edo batzuk betetzeko.

i) Mankomunitatea ezabatzeko arrazoiak eta prozedura, eta likidazioari buruzko arauak.

j) Udalerrriek ordaindu beharreko kalte-ordainen araubidea, mankomunitatearekin dituzten betebeharrak bete ezean.

k) Udalerriren batzuek mankomunitatetik irteten badute eta haiei utzitako ondasunen bat badago, ondasunok aurrerantzean izango duten araubide juridikoari buruzko aurreikuspenak.

5.- Mankomunitateko gobernu-organoak zein diren, zein eginkizun izango duten eta funtzionamendu-araubidea zehazteko orduan toki-erakundeen autonomia errespetatu behar bada ere, mankomunitatearen estatutuek bermatuko dute udalen ordezkari-organok, duen osaeragatik, kontrol-lana egin ahal izatea eta ziurtatzea udalerrri guztietako hautetsiak benetan egotea; dena den, udalerrri batek ere ezin izango du gehiengo osoa izan. Udalen ordezkari-organoko ordezkariak udalerrri bakoitzak izendatuko ditu, azken udal-hauteskundeetan lortutako emaitzekin proportzionalki.

6.- Autonomia-erkidegoko udalerrriek beste autonomia-erkidego batzuetakoak diren udalerrriekin mankomunitateetan biltzeko aukera izango dute, lege honetan ezartzen den moduan eta, era berean, gai honi buruz beste autonomia-erkidegoko edo erkidegoetako legerian erabakitakoarekin bat etorrita.

47. artikulua.- Udal eta toki mailako elkarlanerako sareak.

1.- Udalerrriek eta gainerako toki-erakundeek lurralde arteko elkarlanean aritzeko autonomia-erkidegoaren mailako edo maila apalagoko beste sare batzuek baliatzeko aukera izango dute, ezartzekoa den araudiarekin bat.

2.- Autonomia-erkidegoaren mailako edo lurralde historiko bat baino gehiagoko udalerrri edo erakundeen udal-sareak edo toki-erakundeen sareak pertsona fisiko edo juridiko publiko nahiz pribatuek osatuko dituzte, baldin eta udalerrrien eskumenak gauzatzea bermatzeko badira, eta herritarren interesen alde egiten badute.

3.- Lurraldeko lankidetzarako sareek edo sare horietako kide batzuek nortasun juridikoa duten erakundeak sortzeko aukera izango dute, beren helburuak betetzeko.

4.- Udal-sareak edo toki-erakundeen sareak hitzarmen bidez eratuko dira. Euskal udalerrien elkarteek udal-sareak sortzea sustatuko dute, eta haietan sartzeko aukera izango dute, artikuluko honetako 2. paragrafoan esaten den moduan.

5.- Autonomia Erkidegoko udalerrriak eta gainerako toki-erakundeak estatu eta nazioarteko eremuko lankidetzara-sareetan integratu ahal izango dira, aplikaziokoa zaien araudiarekin bat etorrita.

48. artikulua.- Lankidetzaren hitzarmenak.

1.- Udalerriek eta gainerako toki-erakundeek lankidetzaren hitzarmenak hitzartu ahal izango dituzte, kudeaketa eraginkorragoa, instalazio eta ekipamenduen aprobetxamendu hobea eta udal-eremuko zerbitzuak hobeto ematea lortzeko.

2.- Udalerriek eta gainerako toki-erakundeek beste herri-administrazioekin duten lankidetzara, betiere, toki-araubideari buruzko oinarritzko legerian administrazioen arteko harremanei buruz xedatutakoaren arabera garatuko da.

49. artikulua.- Partzuergoak.

1.- Udalerriek eta gainerako toki-erakundeek partzuergoak eratu ahal izango dituzte beste herri-administrazio batzuekin, guztien intereseko helburuak lortzeko. Irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuak ere izango dute partzuergoetan parte hartzeko aukera, baldin eta partzuergoko herri-administrazioen interesekin bat datozen interes publikoak badituzte erakunde pribatuok.

2.- Partzuergoak toki-erakundetzat hartuko dira lege honetan esaten direnetarako, baldin eta kide diren toki-erakunde guztiak edo gehienak lege honen arabera udalerrien eskumenekoak diren zerbitzuak eskaini edo jarduerak burutzeko elkartzen badira.

3.- Partzuergoaren eskumeneko zerbitzuak kudeatzeko, toki-araubideari buruzko legerian aurreikusitako edozein era erabili ahal izango dute partzuergoak.

4.- Partzuergoan bildu nahi duten zuzenbide publikoko erakundeen lurralde-eremuak lurralde historiko bakar batekoa gainditzeko ez duenean,

kasuan kasuko lurralde historikoko foru-organoen araudiarekin bat etorritz jardun beharko da partzuergoa eratzeko.

50. artikulua.- Lurralde historiko baten lurralde-eremua gainditzen duten partzuergoak.

1.- Partzuergoa osatzen duten zuzenbide publikoko erakundeen lurralde-esparruak lurralde historiko bat gainditzen badu, baina autonomia-erkidegoaren barruan bada, artikulua honetan esaten dena bete beharko du.

2.- Partzuergo bat eratu edo batean bildu nahi duten toki-erakundeetako gobernu-organo nagusiek horren aldeko erabakia hartu beharko dute, legezko kideak direnen gehiengo osoak aldeko botoa emanda. Partzuergoan sartu nahi duten gainerako erakundeen kasuan, aurreko paragrafoan aipatzen den erabakia hartzeko, beren estatutuetan edo barne-funtzionamenduko arauetan esaten denarekin bat etorritik jardun beharko dute.

3.- Partzuergoaren estatutuak partzuergo eratu nahi duten erakunde guztien ordezkariak osatutako batzorde batek landuko ditu, eta partzuergoan bildu den erakunde bakoitzak bozkatu ostean onartzeko dira, azkenik. Toki-erakundeen kasuan, estatutu horiek onartzeko, aurreko paragrafoan aipatzen den gehiengoa behar izango da.

4.- Partzuergoaren estatutuek funtzionamenduko arauak ezarriko dituzte, eta egin beharreko egokitzapenak eginda, mankomunitateentzat lege honen 46.4 artikuluan aurreikusten diren ezaugarri berak zehaztuko dituzte.

5.- Partzuergoaren estatutuek bermatu beharko dute han bildutako erakunde guztien ordezkariak benetan gobernu-organo gorenean egotea; dena den, erakunde batek ere ezin izango du gehiengo osoa izan. Udal-ordezkaritza, udal-erri bakoitzerako, azken udal-hauteskundeetan lortutako emaitzekiko modu proportzionalen izendatuko da.

6.- Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeak partzuergoetan integratu ahal izango dira beste autonomia-erkidego batzuetako erakundeekin, lege honetan eta aplikaziokoa den gainerako legerian xedatutakoren arabera.

51. artikulua.- Lurralde historiko baten lurralde-eremua gainditzen duten metropoli-areak.

Eusko Legebiltzarraren lege bidez, lurralde historiko batena baino gehiagoko lurralde-eremua hartuko duten metropoli-areak edo udalerrri arteko beste erakunde batzuk sortzeko aukera egongo da. Metropoli-are horiek sortuko dituen legeak erakundeok zer nolako eskumenak izango dituzten, zein organok osatuko dituzten eta araubide juridikoari buruzko gainerako osagaiak ere zehaztuko ditu.

II. KAPITULUA

ZERBITZU PUBLIKOEN KUDEAKETA

52. artikulua.- Tokiko zerbitzuen kudeaketa.

Estatuko oinarrizko legerian eta lege honetan ezarritakoa bete beharko bada ere, tokiko zerbitzu publikoen araubide juridikoa eta kudeaketa-erak kasuan kasuko udalerriek zehaztuko dituzte, erregelamenduak egiteko eta beren buruak antolatzeko dituzten ahalez baliatuta. Zerbitzua nola araututa egongo den zerbitzua eskaintzen hasi aurretik arautuko dute toki-erakundeek, eta gutxienez ondorengo kontuak argitu beharko dira: zerbitzua eskaintzeko moduak, zerbitzuaren egoera, finantziazioa eta erabiltzaileen eskubide eta betebeharrak.

53. artikulua.- Kudeaketa-erak.

1.- Tokiko zerbitzu-publikoak zuzenean kudeatu ahal izango dira, erakundeak berak eginkizun hori hartuta, edo horretarako sortutako beste erakunde edo elkarte batzuen bidez. Zeharka kudeatzeko aukera ere egongo da, indarrean den legerian aipatzen diren kontratu- edo lankidetzabideak baliatuta.

2.- Zuzeneko kudeaketa ondorengo aukeretakoren batekoa izango da:

- a) Toki-erakundeak berak kudeatzea.
- b) Erakunde publiko batek eskaintzea zerbitzua, dela erakunde autonomoa, dela enpresa-erakunde publikoa.
- c) Tokiko merkataritza-sozietate baten bidez eskaintzea, sozietate horren kapitala oso-osorik toki-erakundearena edo toki-erakundearen ente publikoren batena bada.

d) Tokiko fundazio publiko baten bidez eskaintzea, ezartzekoa den legerian zehazten denaren arabera.

3.- Aipatu diren kudeaketako aukera horiek ondorengoak bete beharko dituzte: aplikatzekoa zaien Estatuko oinarrizko legeria, lege honetan aurreikusitakoa, eta kasuan-kasuan onartutako udal-araudia.

III. KAPITULUA

JARDUERA EKONOMIKOAK GAUZATZEA

54. artikulua.- Tokiko ekimena jarduera ekonomikoak gauzatzerakoan.

Toki-erakundeek, neurria komenigarria eta egokia dela egiaztatzeko espedientearen bidez, jarduera ekonomikoak egiteko ekimen publikoaz balia daitezke, auzotarren beharrianak betetzeko.

55. artikulua.- Lehia-araubidean egiten diren jarduera ekonomikoak.

1.- Toki-erakundeek jarduera ekonomikoak lehia-araubidean gauzatu ahal izan ditzaten, honako hau bete behar da:

a) Korporazioak horri buruz hartutako hasierako erabakia. Zenbait zinegotzik eta teknikariek osatutako azterketa-batzorde bat izendatuko da.

b) Aurreko idatz-zatian aipatzen den batzordeak txosten bat idatziko du kasuan kasuko jardueraren alderdi sozial, juridiko, tekniko eta finantzarioei buruz. Honako hauek zehaztu beharko dira: kudeatzeko era zein den; jarduera-ematea zein kasutan eten behar den; kasu horretan zein irtenbide hartu behar den, eta zerbitzuak izango dituen prezioei buruzko proiektua.

c) Txostena jendaurrean jartzea, korporazioak horri buruz hartuko duen alde aurreko erabaki baten ondoren, 30 egun naturaletik beherakoa

izango ez den epe batean. Epe horretan, herritarrek zein erakundeek alegazioak aurkeztu ahal izango dituzte.

d) Tokiko korporazioaren osoko bilkurak proiektua onartzea.

2.- Artikulu honetan aipatzen diren erabakiak korporazioko kide bertaratuen gehiengo soilez hartuko dira.

56. artikulua.- Monopolio-araubidean egiten diren jarduera ekonomikoak.

1.- Lege estatal edo autonomiko baten bidez toki-erakundeen alde gordetako funtsezko jarduera edo zerbitzuak monopolio-araubidean egiazki gauzatzeko, honako prozedura honi jarraituko zaio:

a) Tokiko korporazioaren osoko bilkurak horri buruz erabakia hartzea. Korporazioko kideen legezko kopuruaren gehiengo osoaren aldeko botoarekin hartuko da, aurreko artikuluan aurreikusitako izapideei jarraituz, aldaketa bakar batekin: txostenean, betiere, monopolio-araubidearen egokitasuna justifikatu beharko da.

b) Espediente osoa Autonomia Erkidegoaren Administrazioan toki-araubidearen arloko eskumena duen sailari igortzea.

c) Toki-araubidearen arloko eskumena duen sailburuak Gobernu Kontseiluari helaraziko dio espedientea, jasotzen duen egunetik hilabeteko epean. Gobernu Kontseiluak proiektua onartu edo baztertu besterik ez du egingo.

d) Autonomia Erkidegoko Administrazioan eskumena duen organoan espedientea jasotzen den egunetik hiru hilabete igarotzen direlarik, toki-erakundeak ez badu jasotzen Gobernu Kontseiluaren erabakiaren jakinarazpenik, erabakia onarpenekoa dela ulertuko da eta, beraz, toki-erakundeak monopolio-araubidean gauzatu ahal izango du kasuan kasuko jarduera edo zerbitzua.

2.- Toki-erakundeak jarduera monopolio-araubidean egiazki gauzatzeko edo zerbitzu bat araubide horretan emateko erabakiak, honako ondorio juridiko hauek izango ditu:

a) Erabaki horrek berarekin ekarriko du zerbitzuari atxikitako ondasunen herri-onura eta premiazko okupazioko beharra aitortzea, baldin eta enpresak desjabetu edo emakidak berreskuratu behar badira, eta interesdunei gutxienez sei hilabete lehenago abisatu beharko zaie. Enpresaren desjabetzeak eta emakiden berreskurapenak ez ditu hartuko haien osagai guztiak, baizik eta bakarrik zerbitzuaren funtzionamenduari zuzenean atxikita daudenak edo zerbitzuaren garapen normalerako beharrezko direnak.

b) Toki-erakundearen udal-mugartearen edo lurralde-eremuaren barruan monopolio-araubidean aitortutako jardueran diharduen enpresarik ez da ezarri ahal izango, eta enpresa pribatuek ere ez dute horrelako jarduerarik gauzatu ahal izango lurralde-eremu horretan.

57. jarduera.- Jarduera ekonomikoak gauzatzeko araubidea ordezte.

Tokiko korporazioak monopolio-araubidea lehia askeko araubideaz ordezte erabaki ahal izango du, 55. artikuluan aurreikusten diren izapideei jarraituz, salbuespen honekin: 1.d) idatz-zatian aipatzen den erabakia korporazioko kideen legezko kopuruaren gehiengo osoaren aldeko botoarekin hartu beharko da. Monopolio-araubidea lehia askeko araubideaz ordezte, betiere, 56. artikuluan aurreikusten diren izapideei jarraitu egingo da.

58. artikulua.- Jarduera ekonomikoaren gauzatzea etetea.

Toki-erakundeak jarduera ekonomikoaren gauzatzea etengo du:

a) Osoko bilkurak onartutako txostenean (jarduera gauzatzeko oinarri gisa erabili den txostenean) berariaz aurreikusitako kasuetan.

b) Zerbitzua ematen duen sozietatea desegiteko edozein legezko kausa gertatzen denean.

c) Aurreikusitako xedea betetzeko ezintasun materiala badago.

d) Osoko bilkurak hartutako erabakiz, toki-erakundeak jarduera gauzatzeko proiektua onartzeko eskatu zen quorum berdinez hartzen bada.

e) Legez ezarritako beste edozein kasutan.

VII. TITULUA

UDAL-FINANTZIAZIOA

I. KAPITULUA

XEDAPEN OROKORRAK

59. artikulua.- Toki-ogasunak.

Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeen ogasunek lurralde historikoetako foru-organoek arlo horretakoak diren gaiei buruz onartutako xedapenak bete beharko dituzte, bai eta toki-erakundeek berek erregelamenduak egiteko eta beren buruak antolatzeke dituzten ahalez baliatuta onartutako arauak ere.

60. artikulua.- Euskal toki-ogasunen jarduerari buruzko oinarrizko printzipioak.

1.- Toki-ogasunek ondorengo oinarrizko printzipioekin bat jardun beharko dute:

- a) Finantza-autonomia, hau da, ekonomia, finantzak eta aurrekontuak antolatzeko eta kudeatzeko ahala izango dute, baina lurralde historikoetako foru-organismoek gai horietan dituzten eskumenei kalterik egin gabe.
- b) Finantza-nahikotasuna, hau da, toki-ogasunek behar beste baliabide izan beharko dute, lege honek, Eusko Legebiltzarraren beste lege batzuek edo lurralde historikoetako foru-arauek ematen dizkieten eskumenak gauzatzeko.

2.- Era berean, toki-ogasunek ondorengo printzipioak bete beharko dituzte, beren baliabideak kudeatzerakoan: legezketasun-, objektibotasun-, ekonomia-, eraginkortasun-, eragimen-, kontrol-, kutxaren batasun- eta arrazionaltasun-printzipioak.

3.- Toki-ogasunek beren eskuduntzak gauzatzerakoan, Euskadiko Ogasun Nagusiarekin eta lurralde historikoetako foru-ogasunekin koordinaturik, elkartasunez eta erantzukizunak banatuz jardungo dute.

61. artikulua.- Baldintzarik gabeko finantziarioa.

1.- Orokorrean, udalerrien eta gainerako toki-erakundeen finantziarioa baldintzarik gabekoa izango da.

2.- Aurrekoa gorabehera, finantziario baldintzatuko mekanismo batzuk ere aurrekusi ahal izango dira; baina, betiere, ondorengo irizpideak bete beharko dira:

a) Udalerriei zuzenduta egingo dituzten planek, lehentasunak ezartzeko orduan, udalerriek ere parte hartu ahal izatea bermatuko dute, eta udalerrien interesak autonomia-erkidegoenekin edo lurralde historikoenekin bateratzen saiatuko dira.

b) Kudeaketa ekonomikoa urte anitzekoa izatea erraztuko da, eta toki-erakundeak inbertsioak nola egin planifikatu ahal izango du, eta erabakitzeko edo hautatzeko orduan, udaleko jarduera-planak eta lehentasunak izango ditu kontuan.

c) Finantziario baldintzatuko sistemen bidez eskainiko diren zerbitzuak hartzaileentzat kalitatezkoak direla bermatu beharko da, bai eta zerbitzua eskaintzen jarraituko dela ere.

62. artikulua.- Udalerrien betebeharrak eta zerbitzu berrien araubidea.

1.- Eusko Legebiltzarraren lege bat edo foru-arau bat behar izango da udalerriei edo gainerako toki-erakundeei betebeharrak edo zerbitzu berriak emateko, haien ondorioz finantza-zama handiagoa jasan behar badute.

2.- Betebeharrak edo zerbitzu berri horiek zehazten dituen lege edo foru-arauan, aldi berean, beharrezko finantziario-bideak zeintzuk izango diren zehaztu beharko da beti, horrela betebeharrak beteko dela edo zerbitzuak eskainiko direla bermatzeko.

3.- Era berean, euskal udalerrien eta gainerako toki-erakundeen autonomia- eta nahikotasun-printzipioak bermatzeko, lege-proiektuarekin batera joango den txosten ekonomikoan, egoera berri horrek toki-erakundeen ogasunetan izango duen eraginari buruzko analisi bat ere jaso beharko da.

4.- Arau horrek berak zehaztu beharko du zein bide eta prozedura egongo diren, finantza arloko autonomia- eta nahikotasun-printzipioak errespetatuta ezartzeko.

63. artikulua.- Eskubideak eskuratu, zertarako zehaztu eta preskribitzeko araubidea.

1.- Toki-ogasunek eskubideak eskubideotako bakoitza arautzen duten arau berezietan xedatutakoarekin bat etorrira eskuratuko dituzte.

2.- Diru-sarrerak bakoitzaren araudian bestela ezartzen ez bada, sarreraren kopurua horren titularra den erakundearen betebeharraren multzoa finantzatzeko erabiliko da. Helburu zehatzetarako liberalitateetatik datozen diru-sarrerak direnean, ez da beharrezkoa izango berariazko xede-zehaztapena egitea, baldin eta unean-unean indarrean dagoen araudiari jarraiki onartu badira liberalitateak.

3.- Toki-ogasunen eskubideak preskribitu egingo dute, zuzenean edo osagarri moduan zehazki ezartzekoak zaizkien xedapenetan esaten den gisan.

64. artikulua.- Betebeharrak eskuratzea eta ondorioak izatea.

1.- Euskadiko udalerriek eta gainerako toki-erakundeek aplikagarri zaizkien lege eta foru-arauek zuzenean agintzen dizkieten betebeharrak beren gain hartuko dituzte, bai eta ordenamendu juridikoarekin bat egiten

duten egitate, egintza eta negozio juridikoetatik datozen betebeharrak ere.

2.- Deusezak izango dira erabat toki-erakundeek emandako xedapen orokorrak, ebazpenak eta administrazio-egintzak, baldin eta haien bidez hartu nahi diren gastu-konpromisoak dena delako toki-erakundearen aurrekontuko gastuen egoeran baimendutako kreditu mugatzaileen zenbatekoak baino handiagoak badira.

3.- Toki-erakundeen eta haien erakunde autonomoen kargu egitekoak diren ordainketa-obligazioak eraginkorrak izango dira aurrekontuak gauzatzetik datozenean, epai judizial irmoek hala erabakitzen dutenean eta diruzaintza-eragiketak gauzatzetik datozenean.

65. artikulua.- Zorpetzeko eta bermeak emateko araubidea.

Lurralde historikoetako foru-organismoek emandako arauetan aurreikusitako moduan, euskal udalerriek eta gainerako toki-erakundeek, haien erakunde publikoek, atxikitako erakundeek nahiz haien mendeko merkataritzako sozietateek era guztietako kreditu-eragiketak hitzartzeko aukera izango dute, bai eta eragiketa horiek ziurtatzeko edo haien arriskua edo kostua murriztu edo dibertsifikatzeko finantza arloko beste eragiketa osagarri batzuk egiteko aukera ere.

II. KAPITULUA

EUSKAL UDALERRIEN ETA GAINERAKO TOKI-ERAKUNDEEN FINANTZIAZIOA

66. artikulua.- Udalerriek zerga itunduetan izango duten partaidetza.

1.- Ekonomia Ituna dela-eta lurralde historikoek eskuratzen dituzten tributuen errendimenduan parte hartuko dute toki-ogasunek, honako parametro hauei jarraiki:

a) Udalerriak eta gainerako toki-erakundeak zein eskumen eta zerbitzuren titularrak diren, indarrean den ordenamendu juridikoaren arabera.

b) Toki-ogasunen tributuen errendimenduak eta gainerako diru-sarrera propioak.

2.- Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluak baliabideak zein diren zehazteko eta udalerriek tributu itunduetan parte hartzeko koefizientea zein izango den finkatzeko metodologia onartuko ditu. Metodologia hori, betiere, azaroaren 25eko 27/1983 Legearen, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute-Erakundeen arteko Harremanei buruzkoaren, 22.8 artikuluan eta, kasuan kasu, 29.ean aurreikusitako lege-proiektuari erantsiko zaio, eta horrela metodologia onartzea araubidea eta indarraldia lege harenak bezalakoak izango dira.

3. Autonomia Erkidegoko udalerrien multzorako, araubide erkideko legeria aplikatzeagatik legokiekeena baino apalagoa inola ere izango ez den baliabide-maila bat bermatu beharko da.

4. Lurralde historikoek Autonomia Erkidegoaren toki-ogasunen finantzaziora lagunduko diote, haietako bakoitzaren zerga-bilketa koefizienteen arabera. Koefiziente horiek Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluak ezartzen duenaren arabera zuzenduko dira.

67. artikulua.- Lurralde historiko bakoitzaren partaidetza zehaztea.

1.- Autonomia Erkidegoko toki-ogasunen finantzaketarako diru-kopurua, aurreko artikuluan xedatutakoaren arabera, honela banatuko da:

a) % 50, Autonomia Erkidegoko udalerrien arabera, Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluak ezartzen dituen irizpideen arabera. Irizpide horien artean agertu beharko da, zehazten den ponderazio-koefizientearekin batera, udalerrri bakoitzeko biztanle-kopurua eta toki-zergetako presio fiskala.

b) Beste % 50a, lurralde historikoetako foru-organismoek ezartzen dituzten irizpideen arabera, kasuan kasuko lurralde historikoko toki-erakundeen artean.

2.- Aurreko paragrafoan xedatutakoaren ondorioetarako, lurralde historiko bakoitzari, kasuan kasuko a) idatz-zatiaren arabera lurraldeko udalerriei dagozkien diru-kopuruen batura eta Autonomia Erkidegoko toki-ogasunen finantzaketara ekartzea egokitzen den diru-kopuruaren % 50 egotziko zaizkio.

3. Lurralde historiko bakoitzeko foru-organismoek, era berean, itundutako zergen bilketan parte hartzeagatik egokitzen zaizkien diru-kopuruak

banatuko dituzte kasuan kasuko lurraldeko udalerrien eta gainerako toki-erakundeen artean, artikulua honetan ezarritakoaren arabera.

68. artikulua.- Aplikazioa eta likidazioa.

1.- Aurreko artikuluetan xedatutakoarekin bat etorrira udalerriei eta gainerako toki-erakundeei dagokien finantziakzioa toki-erakunde horien ogasunaren baliabide arrunta izango da, haien eskumenekoak diren zerbitzu guztiei aurre egin eta eskaini ahal izateko, betiere aplikaziokoa den araudiarekin bat etorrira.

2.- Ekitaldi bakoitzerako lurralde historiko bakoitzean udalerrien eta gainerako toki-erakundeen esku jarritako zenbatekoak behin betiko kitatuko dira ekitaldia amaitzean, hitzartutako tributuengatik nahiz kontuan hartu beharreko gainerako diru-sarrerengatik bildutakotik lortutako diru-sarreraren datu errearen arabera.

69. artikulua.- Itundu gabeko zergetan parte hartzea.

Udalerriek eta gainerako toki-erakundeek itundu gabeko zergetan izango duten parte hartzea Ekonomia Itunean eta aplikaziokoa den araudi berezian esaten denaren arabera izango da.

VIII. TITULUA

BESTE XEDAPEN BATZUK

70. artikulua.- Zehatzeko prozedurak.

1.- Sektore-legerian xedatutakoaren kalterik gabe, toki-ordenantzek, haien aurkako arau-hauste administratiboak egiteagatik, zehapen batzuk aurreikusi ahal izango dituzte, hala nola: a) isunak; eta b) debekuak, zentzuzko eta neurrizko aldi baterako (inola ere ez sei hilabetetik gorakoak), zenbait jarduera egiteko, are jarduera baimendu, komunikatu edo erregistratuak egiteko, instalazio, zuzkidura edo ekipamendu batzuetan sartzeko, eta udaleko zerbitzu publikoak erabiltzeko, baldin eta zigor-erantzuna egokiagoa bada erasotako ondasun juridikorako eta jarrerari edo ekintzari lotutako lesioaren edo arriskuaren larritasunerako.

2.- Herritar-bizikidetzaren eremuko arau-hausteak direnean, bestelako zehapen batzuk ere jarri ahal izango dira, tarteko den pertsonaren berariazko baimenarekin, hala nola izaera berrezitzailea edo birgizarteratzekoa duten neurriak (herrian bertan betetzekoak), udal-

ordenantzetan ezartzen denaren arabera. Neurri horiek honelakoak izango dira: erkidegoaren aldeko lanak egitea edo prestakuntza-ikastaro edo saio pertsonalizatueta joatea, bai eta bitartekotza-prozesuetan edo gatazkak ebazteko prozesu osagarrietan parte hartzea ere. Zehapen bat erkidego-neurrien bidez jarri ahal izateko, betiere, zehapen-zuzenbidearen printzipioak errespetatu beharko dira, eta zehapena arau-haustearen larritasunaren eta lortu nahi dituen xedeen arabera da.

3.- Udal-ordenantzetan aukera egongo da isunen ordeztokiko erkidegoaren aldeko lan baliokideak eta arau-haustearen larritasunaren arabera egitea arautzeko, tarteko den pertsonak aldezturik baimena ematen badu, eta zehapena ezartzeko organo zehatzaileak hala erabakitzen badu modu arrazoitu batean, zehapen arloko zuzenbidearen printzipioen arabera.

71. artikulua.- Euskal udalen elkarteak negoziazio kolektiborako legitimatzea.

1.- Euskal udalen elkarteak, oinarrizko legerian esaten denaren arabera, legitimaturik egongo dira euskal udalerrietako eta gainerako toki-erakundeetako langile publikoekin negoziazio kolektiboaz aritzeko.

2.- Euskal udalerrriak, horretarako hartutako akordioaren bidez, euskal udalen elkarteek aurrera eramango duten negoziazio kolektibora atxiki ahal izango dira, negoziazioa hasi aurretik. Hala eginez gero, elkarte horiek hitzartutako akordioak, izenpetzen diren unetik, atxikitako udalerrri edo toki-erakundeak lotuko dituzte.

3.- Euskal udalerrriak, negoziazioaren ondoren ere, euskal udalen elkarteak burututako negoziazio kolektibora eta horren ondoriozko akordioetara atxiki ahal izango dira.

XEDAPEN GEHIGARRIA.- Ordezkaritza handiena duen euskal udalen elkarte.

1.- Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan ezarpen handiena daukana euskal udalen elkarte izango da Euskadiko erakundeetan ordezkari-tzazeregina publikoa beteko duena, hala erabakiko den esparru guztietan.

2.- Ordezkaritza handiena duen elkarte horrek lege honetan aurreikusitakoaren arabera emango zaizkion eginkizun guztiak izango ditu, beti.

3.- Ezarpen handiena duen euskal udalen elkarte zein den zehazteko, lege honen ondorioetarako, irizpide hauei jarraitu zaie, erregelamendu

bidez ezartzen diren baldintzetan: alde batetik, Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrietatik zenbat diren elkartekide, eta, bestetik, zenbateko biztanle-kopurua duten, guztira.

XEDAPENA IRAGANKORRA.- gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa.

Lehena.- Harik eta Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko apirilaren 12ko 7/2007 Legearen bigarren xedapen gehigarria garatuko duen funtzio publikoari buruzko araudi autonomikoa indarrean sartu arte, gaikuntza nazionala duten toki-administrazioko funtzionarioek Euskal Autonomia Erkidegoan izango duten araubide juridikoa gaur egun indarrean dagoena izango da, betiere ondorengo arauak kontuan izanda:

1. Gaikuntza nazionala duten funtzionarioen eskala osatzen duten azpieskaletara sartzeko hautaprobak gainditu dituzten hautagaiak funtzionario izendatzeko aginduak funtzio publikoaren arloko eskumenak dituen sailburuak emango ditu.
2. Administrazio-egoerari buruzko adierazpenak eta karrera profesionalarekin zerikusia duten gorabehera guztiak funtzio publikoko zuzendariaren ebazpen baten bidez formalizatuko dira, eskumen hori beste organo bati eman ez zaion guztietan.
3. Organo hauek izango dute diziplina-espedienteei hasiera emateko eskumena:
 - a) Toki-erakundeko alkate edo lehendakariak beti, edo aurreko horrek eskuordeturik, langileen zuzeneko buru denak. Toki-erakundeak aukera izango du autonomia-erkidegoko administrazioko funtzio publikoko zuzendaritzari diziplina-espedienteak izapidetzeko izapidegilea izenda dezala eskatzeko, hori egiteko giza baliabiderik ez baldin badu.
 - b) Administrazio autonomikoko funtzio publikoaren zuzendaritzak, zerbitzuak ematen ari denaz bestelako erakunde batean egindako hutsegiteak direnean, baldin eta bi erakundeok Euskal Autonomia Erkidegokoak badira, edota salatutako egintzen larritasuna dela eta, hutsegite horrek kargugabetzea edo zerbitzutik kentzea eragin dezakeenean.
4. Diziplina-espedientea ebazterakoan, hutsegite larrien edo oso larriengatiko zehapenak ezartzeko organo eskudunak honako hauek dira:

- a) Funtzio publikoaren arloko eskumena duen sailburua, kargugabetzea eta zerbitzutik bereiztea dakarten zehapenak ezarri behar direnean, bai eta aurreko paragrafoko b) idatz-zatian aurreikusitako kasuan ere.
- b) Toki-erakundeko udalbatza, aurreko idatz-zatian ageri ez diren zehapenak direnean.

Bigarrena.- Euskadiko Toki Administrazioaren Erregistroaren indarraldia.

Harik eta lege honen 5. artikuluan aurreikusitako Toki Administrazioaren Erregistroa funtzionamenduan jartzen ez den arte, indarrean jarraituko du abenduaren 15eko 383/1987 Dekretuaren bidez arautzen den Euskadiko Tokiko Administrazioaren Erroldak.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA.

1.- Indarrik gabe geratzen dira honako arau-xedapen hauek:

- a) 326/1994 Dekretua, uztailaren 28koa, Euskadiko Udal Kontseilua sortzen duena.
- b) 364/1987 Dekretua, abenduaren 1ekoa, toki-erakundeek ikur bereizgarriak hartzeko edo aldatzeko prozedura onartzeko dena.
- c) 271/1983 Dekretua, abenduaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien izenak aldatzeko prozedura finkatzen duena.

2.- Indarrik gabe geratzen dira, era berean, lege honetan aurreikusitakoari kontra egiten dioten xedapen guztiak.

AZKEN XEDAPENAK.

Lehena.- Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute-Erakundeen arteko Harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legeari egindako aldaketak.

Bat.- Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluaren funtzionamendua.

Beste paragrafo bat gehitu diogu azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 28. artikuluko 1. paragrafoari. Hauxe dio:

“Herri-Dirubideen Euskal Kontseilua, halaber, Euskadiko udal-mailako erakunde guztien eta beren sektore publikoaren jardun finantzarioa Euskadiko Ogasun Nagusiarekin batera lantzeko sortu da, batez ere baliabideak zehazteko eta udal-erakundeek hitzartutako tributuetan zenbateko partaidetza-koefizientea izango duten erabakitzeko erabiliko den metodologia bien artean finkatzeko, Euskadiko Udalen Legearen 66. artikulua xedatzen duenaren arabera; horrez gain, lege horretako 67. artikuluan adierazten den zeregina ondo betetzeko ere sortu da kontseilua.”

Bi.- Euskal udalerriek Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluan daukaten parte-hartzea.

Beste paragrafo bat gehitu diogu azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 28. artikuluko 4. paragrafoari. Hauxe dio:

“Udal-mailako edozein ordezkari hala eskatzen badu ere bilduko da Kontseilua, ordezkari horri interesatzen zaion kontuaz aritzeko.”

Hiru.- Beste paragrafo bat gehitu diogu azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 28. artikuluari. Hauxe dio:

“10. Nolanahi ere den artikulua honetako 2. eta 5. paragrafoetan xedatutakoa, euskal udalerrietako hiru ordezkari jarriko dira Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluan, ordezkari zabalena duen euskal udalerrien elkarteak izendatuta. Honela jokatu behar da ordezkari horiek kontseiluan jartzeko: Euskal udalen ordezkariaren pluraltasun politikoa bermatze aldera, izendapen horiek autonomia-erkidegoko udal-hauteskundeetan boto gehien jasotzen dituzten hiru indar politikoetako kideetara bideratu behar dira; edozein kasutan ere, hautatutako zinegotzi izan behar dute izendapena jasotzeko.”

Udaletako ordezkariak hitz egiteko eskubidea bai baina botoa emateko eskubiderik gabe izango dira Kontseiluan, non eta lantzen diren kontuak ez diren zuzen-zuzenean eragiten dietenak. Ondorioz, eskubide osoko kide izango dira ondorengoetan: baliabideak zehazteko eta udal-erakundeek hitzartutako tributuetan zenbateko partaidetza-koefizientea izango duten erabakitzeko erabiliko den metodologia finkatzeko unean (66.2 artikulua); Euskadiko Udalen Legearen 67. artikuluan jasotakoa taxutzeko unean, eta, udalerriei zuzenean eragiten badie, lege honen bigarren xedapen gehigarriaren hirugarren zenbakian jasotakoa betetzeko unean.

Udal-ordezkariek hitza eta botoa daukatenean, erabakiak hartu ahal izateko, ezinbestekoa izango da akordiook gehiengo osoz onartzea, betiere gehiengo horrek maila instituzional bakoitzeko, gutxienez, ordezkari bat daukala."

Lau.- Beste paragrafo bat gehitu diogu azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 28. artikuluari. Hauxe dio:

"11. Kontseiluak badauka aholkua eskatzerik eta beharrezko iruditzen zaizkion datuak biltzerik, bai euskal udalerrietatik, bai eta ezarpen handiena daukan udalen elkartetik ere. Aipatutako udalerrriak eta elkarteak, biak ala biak, behartuta daude eskatutako datuak eta bestelako informazio guztia ematera, artikulua honetako aurreragoko zenbakietan Autonomia Erkidegoko Administrazioari eta foru-aldundiei jarritako baldintza berdinetan."

Bost.- Azaroaren 25eko 27/1983 Legearen bigarren xedapen gehigarriko 1. idatz-zatia honela idatzita geratuko da:

"1. Foru-aldundiek, kasuan kasuko lurraldeko udalerrien gaineko finantza-babeseko ahalmenak betetzen dituztenean, Euskadiko Udalen Legearen xedatutakoarekin bat etorritik banatuko dituzte itundutako zergen bidezko bilketan haiek duten parte-hartzea".

Bigarrena.- Sistema berria martxan jartzea.

Lege honetan xedatutakoa betetzeko, legea indarrean sartu eta bi hilabeteko epean, Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluari dei egingo zaio udaletako aholkulari berriak izenda ditzan eta baliabideak banatzeko metodologiaren proposamen berria onar dezan, azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 22.8 artikuluan xedatutako baldintzetan, lege horrek halaxe agintzen duenez. Metodologia berria aplikaziokoa izan beharko da hurrengo aurrekontu-ekitaldian, oraingoaren indarralditik zenbat denbora geratzen den alde batera utzita.

Hirugarrena.- Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluaren erregelamendua prestatzea.

Lege hau indarrean sartu eta bi hilabete pasa aurretik, lehenengo Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseilua eratuko da; sei kide izango ditu lehenengo honek: hiru, ezarpen handiena daukan euskal udalen elkarteak izendatuak, euskal udalerrien ordezkari, lege honen 41.3 artikuluan ezartzen diren baldintzetan, eta beste hiru Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzak izendatuak. Lehenengo kontseilu horren eginkizuna izango da Kontseiluaren erregelamendua prestatzea eta onartzea, bi hilabeteko epean.

Laugarrena.- Garatzeko eta betetzeko gaikuntza.

Baimena ematen zaio Eusko Jaurlaritzari lege hau garatzeko beharrezkoak diren erregelamendu-xedapenak emateko, dagozkion eskumenen esparruan.